



Frente a la crisis social y nacional

¿Qué país?

Antonio Antón

Departamento de Sociología

Universidad Autónoma de Madrid

Frente a la crisis social y nacional. ¿QUÉ PAÍS?

Título: *Frente a la crisis social y nacional. ¿QUÉ PAÍS?*

Autor: Antonio Antón Morón

Página web: <http://www.antonio-anton-uam.es>

Twitter: @antonioantonUAM

Profesor Honorario de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) - Departamento de Sociología. Licenciado en Sociología y Ciencias políticas por la UNED. Doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid (sobresaliente *cum laude*). Ha realizado diversas investigaciones y es especialista en Políticas públicas y Estado de bienestar, Movimientos sociales, acción colectiva y cambio social, Sociología del Trabajo, Sociología política y Sociología de la Educación. Colabora con distintos medios de comunicación y ha publicado numerosos artículos y más de una quincena de libros. Entre los últimos están: *Reestructuración del Estado de bienestar* (2009); *Resistencias frente a la crisis. De la huelga general del 29-S al movimiento 15-M* (2011); *Ciudadanía activa. Opciones sociopolíticas frente a la crisis sistémica* (2013); *Poder, protesta social y cambio institucional* (2015); *Movimiento popular y cambio político. Nuevos discursos* (2015); *La democracia social hoy. Un nuevo ciclo sociopolítico por la democracia y la igualdad* (2016); *El populismo a debate* (2017), y *La clase trabajadora, ¿sujeto de cambio en el siglo XXI?* -coautor- (2018).

Editado por Rebelión

Madrid, septiembre de 2018

Rebelión ha publicado este libro con el permiso del autor mediante una [licencia de Creative Commons](#), respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Índice

Introducción

1. Uno de octubre: el fracaso de Rajoy
2. Superar la brecha identitaria
3. Estrategias para el cambio: Experiencia y desafíos
4. Otra España, otra Cataluña
5. Nueva marea por la igualdad
6. Cambio... ¿dentro de un orden?
7. ¿Qué salida de la crisis?
8. Valoración teórica de la interpretación populista
9. El dilema del gobierno socialista
10. Nueva etapa en Cataluña
11. El 'etnopolulismo' de Puigdemont
12. Recomposición de élites y activación cívica

Introducción

En el pasado curso 2017/2018 se han producido tres hechos relevantes con fuerte impacto para la situación social y el cambio político en España.

Primero, la intensificación del conflicto nacional-institucional en el interior de Cataluña, con la división de la sociedad catalana en casi dos mitades, y en relación con el Estado español. En las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, las fuerzas independentistas consiguieron una mínima mayoría parlamentaria para formar el *Govern*, pero no el apoyo suficiente de la mayoría ciudadana para legitimar la independencia. Se mantiene el bloqueo estatal a la construcción operativa de una *República catalana*, con la persistencia de una amplia reivindicación independentista y la activación de una reacción unionista.

Segundo, el desalojo del Gobierno inmovilista y reaccionario del PP, preso de la corrupción, y la victoria de la investidura de Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, apoyado por las fuerzas del cambio -*Unidos Podemos* junto con *En Marea*, *En Comú Podem* y *Compromís*- y los partidos nacionalistas vascos y catalanes. Se consolida la superación del bipartidismo, con la permanencia de cuatro grandes fuerzas estatales, pero con un reequilibrio progresista que rompe la hegemonía institucional de las derechas y abre nuevas expectativas.

Tercero, a pesar de la reactivación económica y de empleo, persiste una grave crisis social para la mayoría ciudadana, con un fuerte malestar cívico respecto de la trayectoria y la gestión política y económica dominantes. Al mismo tiempo, se ha generado una significativa respuesta popular frente a evidentes discriminaciones sociales y laborales. La más relevante, la masiva movilización feminista, sobre todo, el pasado 8 de marzo, contra las agresiones machistas y las desventajas de las mujeres y por la igualdad de género. También son de destacar la prolongada movilización de las personas pensionistas y la de distintos colectivos de gente trabajadora y precaria.

Todo ello ha contribuido a crear un nuevo clima político y a abrir un nuevo escenario, no exento de dificultades, para caminar hacia una opción de progreso. Es una fase transitoria, positiva, pero algo indeterminada sobre qué estrategias y equilibrios se están configurando como dominantes, y qué

expectativas existen sobre su conformación institucional definitiva en los procesos sociopolíticos y electorales pendientes (elecciones locales, autonómicas y europeas en mayo de 2019, con el previsible adelanto de las andaluzas, y generales para 2020, con su posible anticipación).

Aquí analizo las características específicas de estos fenómenos: el *procés* catalán y la articulación plurinacional de España, la persistencia de la crisis social y el descontento popular y la dinámica de activación cívica y cambio político e institucional. Pero también explico su interrelación, las tendencias de fondo y las opciones políticas para las fuerzas del cambio y progresistas. Su perspectiva es la conformación de un proyecto de país de países.

Lejos del enfoque socioliberal dominante en la socialdemocracia y del determinismo economicista y el voluntarismo subjetivista presentes en fuerzas alternativas, hay que hacer un esfuerzo analítico, crítico y realista, para comprender estas dinámicas y extraer las enseñanzas estratégicas y teóricas que suscitan. Se trata de definir mejor, en la actual etapa que comienza, las dificultades, las perspectivas y los proyectos para un cambio de progreso, tanto en Cataluña cuanto en el conjunto de España. Ello, teniendo en cuenta, especialmente, el marco europeo con la hegemonía institucional del bloque de poder liberal-conservador, sus políticas neoliberales y las debilidades institucionales de la U. E, así como el ascenso de tendencias de derecha extrema, autoritarias y xenófobas.

Los textos reunidos en este libro explican estos hechos. Sus versiones iniciales son artículos periodísticos, ensayos e investigaciones que se han presentado en distintos foros académicos y que se han publicado en extractos a lo largo de estos meses en diversos medios de comunicación. Su revisión y su edición conjunta ofrece la posibilidad de una mejor comprensión de las tendencias y las interacciones de los distintos procesos, poniendo en primer plano la valoración de los diversos actores o sujetos. También permite una profundización en los relatos y discursos que pretenden justificar los objetivos estratégicos de las diferentes fuerzas sociales y políticas. El objetivo es favorecer un debate realista y riguroso sobre las perspectivas transformadoras, en un sentido democrático e igualitario, en la nueva etapa que comienza.

Madrid, 3 de septiembre de 2018

Frente a la crisis social y nacional. ¿QUÉ PAÍS?

1. Uno de octubre: el fracaso de Rajoy¹

El 1-O mostró dos resultados básicos: el carácter autoritario del Gobierno del PP, con su apuesta represiva, y una gran movilización democrática y pacífica de la ciudadanía catalana. El Gobierno de Rajoy, inmovilista y reaccionario, ha fracasado estrepitosamente. Su estrategia impositiva de restricción de derechos democráticos de la sociedad catalana ha perdido legitimidad ante la opinión pública de Catalunya, España y el mundo entero. La credibilidad democrática de la derecha española ha quedado entredicho. Su relato, centrado en la aplicación de la legalidad, ha sido insuficiente y contraproducente.

Su justificación maniquea y sectaria de un 'nosotros' (la élite gubernamental y sus aliados 'constitucionalistas') que defienden el Estado de derecho, la convivencia y la racionalidad frente a un 'ellos' (los 'secesionistas' catalanes y el resto de soberanistas) anti-demócratas, divisionistas e irracionales (pasionales) no ha cuajado. Su idea de 'empate catastrófico' pretendía explicar la necesidad del desempate marginando a los supuestamente populistas que querrían destruir el Estado y España. Pero, ante la evidencia de la doble actitud en el conflicto, una dirección política represiva y una ciudadanía democrática y pacífica que quería votar, toda su retórica ha quedado desacreditada y su estrategia política desnuda con su autoritarismo inconfesable.

Pero, además, desde el punto de vista fáctico, el Ejecutivo de Rajoy ha mostrado su incapacidad para impedir la libre expresión de millones de personas y su reafirmación en la defensa de su autogobierno. Desde el punto de vista político, de las relaciones de poder, ya que los criterios éticos y democráticos le resbalan, es la mayor crítica que diferentes sectores mediáticos, socioeconómicos e institucionales pueden constatar: su gestión ineficaz para garantizar sus objetivos de neutralizar el proceso del *Govern* hacia la independencia. No ha sabido y no ha podido, con todos los mecanismos jurídicos, policiales, económicos y administrativos del Estado, impedir la masiva marea democrática y participativa en torno a la consulta

¹ Editado en *Público*, 3 de octubre de 2017.

planteada. Ellos mismos lo reconocen a medias: les ha desbordado la situación. Les ha cegado su prepotencia reaccionaria y su infravaloración de la masividad y firmeza de la cultura democrática, cívica y soberanista existente en el pueblo catalán.

Además, ante semejante incapacidad y torpeza, socios europeos ya han mostrado su inquietud ante esta 'inesperada' crisis de Estado en el panorama de una UE frágil en su articulación institucional, con el trauma del *Brexit* y el ascenso de dinámicas nacionalistas autoritarias y xenófobas en distintos países.

Sus primeras reacciones son 'sostenella y no enmendalla': su empeñamiento en una estrategia errónea, divisionista y antidemocrática. No les proporciona margen para la autocrítica o la rectificación. Para su regeneración democrática necesitan, al menos, salir del poder y pasar a la oposición. La ausencia de auténtico diálogo político anuncia una escalada de la tensión. Su opción, perfeccionar su estrategia autoritaria y su control efectivo de la Generalitat: intervenir y/o anular instituciones catalanas, mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. Se trata, de la inhabilitación y judicialización de sus principales dirigentes, y la toma de control ejecutivo (incluido la dirección de los *Mossos d' esquadra* y, quizá, los medios de comunicación públicos -TV3-), por un periodo indeterminado hasta la convocatoria de otras elecciones autonómicas con garantías para ellos de una representación minoritaria de las fuerzas independentistas; es decir, sin una salida clara al conflicto.

El plan puede ser de ejecución inmediata o diferida, a tenor de la apuesta independentista real y más allá de la simple declaración unilateral del *Parlament* que están calculando. Es un paso arriesgado para las dos partes y quizá se produzca una fase transitoria de tanteos junto con alguna gestión mediadora para (ambos) ganar tiempo y mejorar las posiciones respectivas de fuerza y legitimidad. Por tanto, es realista el escepticismo con el que el *Govern* valora los resultados efectivos de un diálogo (con mediadores internacionales). E, igualmente, para las derechas españolas, que mantienen su rigidez 'uninacional' y cuidan su supremacía institucional.

La dinámica de conflicto de fondo solo se va a poder encauzar con un Gobierno de progreso en España, con un claro perfil social y democrático y

respetuoso de la plurinacionalidad. Y ahí, la responsabilidad de la dirección socialista es clave. Es un reto para el nuevo PSOE de Pedro Sánchez ante dos opciones: apoyar la gestión gubernamental del PP (y Ciudadanos), su continuismo autoritario, ofreciéndole estabilidad; o apostar, junto con las fuerzas del cambio y nacionalistas una profunda reforma constitucional que culmine en un referéndum estatal. Y, al mismo tiempo, un acuerdo sobre un referéndum con garantías en Catalunya que satisfaga el deseo mayoritario (hasta el 80%) de decidir su estatus relacional y su futuro. Una consulta con mayorías reforzadas que incluya un marco de relación, así como la posibilidad de independencia, dada la representatividad de ese sector, y aunque muchos prefiramos su permanencia en una España mejor, más justa y solidaria.

El planteamiento del PP es cortoplacista y corporativo de sus propios intereses de partido. Frente a su retórica vacía no piensan en la sociedad española. Tampoco en España y el Estado, ni tienen un proyecto de país (de países). Piensan (erróneamente) que, aunque electoralmente pierdan Catalunya, con su nacionalismo 'españolista' conservador ganan España, con la absorción de *Ciudadanos*, la subordinación del PSOE y la marginación de las fuerzas del cambio. Toda una estrategia reaccionaria de dudosa eficacia y menor legitimidad.

Desprecian la fractura social generada en ambos ámbitos y entre ellos, mientras ocupen el poder estatal. Es más, se pueden encontrar cómodos en una dinámica prolongada de conflicto 'nacional' que facilite su hegemonía electoral, chantajee al *Partido socialista* y dificulte el avance de *Unidos Podemos* y sus aliados con una opción de progreso en lo social y solidaria en la gestión de la plurinacionalidad. Han anulado su ya escaso margen para tener un papel relevante en una solución política negociada. A su gestión regresiva de la política socioeconómica y sus responsabilidades en la corrupción política, se añade ahora claramente su autoritarismo político.

Los límites del independentismo

En el otro campo, en Catalunya, hay que diferenciar dos procesos paralelos y entremezclados. Ya he señalado el ejemplar, masivo y democrático comportamiento de gran parte de la ciudadanía catalana, en torno a su deseo

de participar en el rechazo a los planes gubernamentales y sus medidas represivas e independientemente del sentido de su voto o de no votar. En el 1-O ha confluído la posición de avanzar en la dinámica independentista junto con la reafirmación soberanista y democrática, ésta acentuada por combatir a Rajoy y sus medidas.

Según distintas encuestas, la primera tendencia cuenta con alrededor del 45% de la población catalana y la segunda llega hasta el 80%, es decir, existe en torno a un 35% soberanista no independentista. Esto es importante para valorar el siguiente paso y sus riesgos: la apropiación del *Govern* de las dos corrientes y legitimidades para apostar por la hoja de ruta independentista. Convertir una amplia alianza democrática en un compromiso específico independentista es un error ventajista que conlleva una instrumentalización de esa parte y, específicamente, de su representación política en torno a *Els Comuns* de Xavier Domènech y Ada Colau.

La cuestión es importante por los límites del proceso independentista y la articulación de la pluralidad en la sociedad catalana (y en España). O sea, tiene implicaciones estratégicas y de valores (inclusivos y de fraternidad). El *Govern* y el bloque independentista han demostrado su ampliación (desde el 25% en el año 2010 al 45% actual). Pero, aparte de un sector nacionalista radical, el incremento independentista en esta década se ha producido sobre la base de la existencia de una amplia corriente nacionalista (moderada y representada por CIU) que se ha desplazado hacia el independentismo. Ello en el contexto de frustración ciudadana por el recorte del *Estatut*, a iniciativa del PP, al mismo tiempo que por la gestión neoliberal y regresiva de la crisis económica por parte del *Govern*, compartida por la estrategia de austeridad promovida por su familia liberal conservadora europea (y socialdemócrata). En ese sentido, las élites de la derecha independentista han sabido eludir sus responsabilidades regresivas y trasladarlas hacia un 'enemigo' externo: España. Y ante la pasividad crítica de la izquierda independentista.

Por tanto, independentismo o República catalana, con la actual hegemonía de la burguesía neoliberal catalana y una gestión económica del PDeCAT no es sinónimo de mejora social para las clases trabajadoras, especialmente de Barcelona y su cinturón metropolitano que, como se sabe tienen un mayor origen emigrante del resto de España, muchos son castellano

hablantes y con un estatus socioeconómico menor. Sus sectores progresistas y de izquierda son, en gran medida, la base social de *Catalunya en Comú* y *Podem*, incluso del PSC, con lazos culturales e identitarios con el resto de España y reticentes al nacionalismo independentista.

Significa que el bloque independentista tiene dificultades estructurales para imponer la independencia de Catalunya por dos tipos de razones. Uno de carácter democrático, derivado de los déficits democráticos de la consulta realizada, especialmente por interpelar, casi solo, al sector independentista cuando la mitad, al menos, de la sociedad catalana no lo es; no era propiamente un referéndum con garantías para la expresión de la diversidad de posiciones existente, por lo que no tenía validez política, jurídica y democrática para decidir sobre esa opción. Pero, sobre todo, no reflejaba una igualdad entre las distintas opciones ni una actitud inclusiva e integradora de la diversidad nacional realmente existente en Catalunya.

Otro tipo de motivos son de carácter fáctico: los límites de su 'contrapoder' institucional (o popular) frente al poder del Estado y sus aparatos judiciales, de seguridad y económicos, así como la falta de reconocimiento internacional. Los dirigentes independentistas se han esforzado mucho en reafirmar su 'soberanía' práctica, no solo su legitimidad sino su fuerza, su poder, para realizar el referéndum. Era central para dar cobertura a la Declaración Unilateral de Independencia, es decir, demostrar que podían contrapesar el poder del contrario y desbordarlo (desobediencia, imposición, implantación...). Han salido airoso en algunos aspectos clave: ha habido colegios abiertos, urnas, papeletas y recuento. Pero, sobre todo, ha habido gente valiente y decidida a votar y participar en esta pugna con el Gobierno de Rajoy y las medidas represivas y judiciales. Evidentemente, no ha sido un referéndum legal y válido en términos jurídicos (contraviene la convención de Venecia), pero constituye una gran movilización política que el *Govern* se apresta a utilizar para legitimar su próximo paso independentista.

El pulso de legitimidades y de poder, aun con forcejeos discursivos y de diálogos contemporalizadores, se va a reproducir en un peldaño superior de confrontación. Y ahí, el refuerzo de una tercera posición autónoma, con un fuerte contenido social, democrático y solidario es clave para construir un país

Frente a la crisis social y nacional. ¿QUÉ PAÍS?

plurinacional más justo. Es el reto de *Els Comuns* y el conjunto de las fuerzas del cambio.

2. Superar la brecha identitaria²

La estrategia del bloque independentista de construir un Estado independiente, una República catalana, ha demostrado sus límites y su impotencia práctica: insuficiencia de apoyo social y legitimación popular y limitados apoyos fácticos, o sea, falta de capacidad de contrapoder o implementación práctica de un Estado propio soberano. La Declaración Unilateral de Independencia, como expresión política, no ha sido capaz de garantizar este paso decisivo del proceso, mostrando el irrealismo de sus dirigentes. Aun con un rechazo popular mayoritario y una fuerte resistencia cívica, la aplicación del artículo 155, con el cese del *Govern*, junto con la intervención estatal de las instituciones catalanas y su autogobierno, se ha impuesto por parte del Gobierno de Rajoy con la inestimable ayuda de *Ciudadanos* y *Partido Socialista*. Es una evidencia, sujeta estas semanas a polémica interpretativa, que hay que esclarecer.

Aquí tras explicar los rasgos autoritarios y centralizadores de la opción de las derechas, me centro en el análisis de esa incapacidad estratégica del bloque independentista para desarrollar la independencia unilateral ante el persistente bloqueo impuesto por el Gobierno del PP y las fuerzas que le apoyan. El objeto de la reflexión es aportar elementos para, una vez demostradas las dificultades de la estrategia unilateral de independencia, fortalecer una nueva estrategia y un nuevo espacio sociopolítico, superador de la dinámica de los bloques confrontados y que ponga el acento en un cambio de progreso, social y democrático, en Cataluña y en España, como opción más realista y transformadora. Se trata de resaltar el respeto a la plurinacionalidad del Estado español con una actitud integradora, al mayoritario sentido doble de pertenencia identitaria, así como a la prioridad por una agenda social, la mejora del autogobierno y un acuerdo sobre los procedimientos democráticos (referéndum pactado) para resolver el conflicto territorial, con legítimas y distintas opciones sobre la forma de configurar la relación de Cataluña con el resto de España, y con la correspondiente reforma constitucional.

² Publicado en *Mientras Tanto* nº 163, 1 de diciembre de 2017.

Ello es difícil con la mayoría institucional de las derechas. La solución, por tanto, pasa por la unidad de las fuerzas progresistas y de izquierda, en base a las llamadas fuerzas del cambio, para conformar una nueva mayoría social y política alternativa que supere la fractura social y la brecha identitaria. El horizonte del cambio es, salvando la ambivalencia de los dirigentes socialistas, construir un Gobierno de Progreso en España y otro en Cataluña que abra un nuevo ciclo político democratizador, anteponiendo las demandas sociales de las mayoritarias capas populares ante esta persistente crisis sistémica, social, política, institucional y europea.

En consecuencia, en primer lugar, explico el concepto y la realidad de plurinacionalidad y el sentido de un proyecto de país (de países) desde la constatación de la diversidad nacional y política de Cataluña y España; y, en segundo lugar, tras exponer la incapacidad estratégica del independentismo y su vía unilateral de implementación de un Estado independiente, señalo las bases de una estrategia de cambio en Cataluña y el conjunto de España.

Proyecto de país

La sociedad española y, particularmente, la ciudadanía catalana, han dado muestras, en las últimas décadas, de madurez cívica, compromiso democrático y valores solidarios y de justicia social. Nuestro país o, mejor, país de países, es complejo y diverso, especialmente, en sus identidades nacionales. España es un país plurinacional, constituido por distintas naciones (nacionalidades según la Constitución) y regiones, aunque sus pueblos tampoco son homogéneos. La frontera entre naciones y regiones no está clara. Esa pluralidad identitaria, cultural y política, no se da solo en el conjunto sino también alcanza al interior de los mismos territorios, sobre todo, en Cataluña (y Euskadi). No hay varias naciones compactas y completamente diferenciadas entre sí. Lo 'español', la pertenencia española, atraviesa transversalmente a la mayoría de sus poblaciones y se combina, en diversos grados, con el sentimiento o pertenencia a cada Comunidad.

Veamos algunos datos de la realidad identitaria en el conjunto del Estado de la mano del CIS (Estudio nº 3191 – Barómetro de octubre de 2017). A la pregunta (nº 26) *¿Cuál de las siguientes frases diría Ud. Que expresa*

mejor sus sentimientos?, las respuestas son: *Se siente únicamente español/la*, 16,1%; *se siente más español/la que* (gentilicio C. A.), 7,5%; *se siente tan español como* (gentilicio C. A.), 53,7%; *se siente más* (gentilicio C. A.) *que español/la*, 10,2%; *se siente únicamente* (gentilicio C. A.), 6,2%; *ninguna de las anteriores* (se sobrentiende localista o cosmopolita), 5,1%, y *no sabe/no contesta*, 1,3%. O sea, sumandos los tres segmentos que sienten una doble pertenencia, española y gentilicia de la propia Comunidad, llegan al 71,4%, frente a las otras dos (o tres) minorías (en el conjunto, aunque relevantes en varias de ellas) con una identificación exclusiva –española o nacionalista periférica (o cosmopolita)-.

El concepto de plurinacional hay que matizarlo: no solo hay varias naciones, sino que esa doble identificación mayoritaria las atraviesa; el sentimiento español es compatible y está presente, con diferente intensidad, en todas las nacionalidades y regiones. España no es solo una suma (institucional) sino un componente de la identificación interna y combinada que caracteriza a segmentos mayoritarios, incluso en Cataluña (y Euskadi), como luego veremos.

Por tanto, más allá de la pertenencia al Estado español, España existe como cultura transversal identificadora, o sea, recorre internamente las distintas Comunidades y conforma una sustancia relacional compartida: es base de un país de países. La dificultad (o la pugna interpretativa y normativa) es definir cuáles y qué profundidad tienen los rasgos comunes, el significado de la experiencia compartida, el peso de los sentimientos de pertenencia y los componentes identitarios respecto de un proyecto común, y cómo se entremezclan con otros sentimientos gentilicios o nacionales, otras identidades socioculturales y los intereses compartidos.

Además de los nacionalismos periféricos, parte de cuyos seguidores (no todos y diferenciando posición independentista de nacionalista) son opuestos a la identificación española, hay, al menos, dos ideas de España en pugna histórica y con una distinta actitud respecto de la articulación del conjunto: Una, conservadora y centralizadora, dominante y dirigida por la oligarquía española y la derecha (y el franquismo) que, en estos dos siglos, han fracasado en su idea de homogenización nacional-cultural total, al estilo de otros países europeos, y que han solido tratar de imponerse con rasgos prepotentes o

autoritarios; otra progresista y federativa (o confederal), con mayor relevancia en algunos territorios y momentos históricos, como en la Iª y la IIª República y la transición democrática (*¡Libertad, amnistía y Estatuto de Autonomía!*). Aunque dentro de la derecha ha habido posiciones descentralizadoras y dentro de las izquierdas, jacobinas (como manifiestan algunos dirigentes socialistas). Aquí, cabe añadir que la tradición dominante del republicanismo, las izquierdas y el movimiento obrero en Cataluña, desde la IIª República (CNT, POUM...) y el antifranquismo (PSUC, PSC...) hasta ahora (*Catalunya en Comú-Podem*, CCOO...), ha sido federal o confederal con componentes soberanistas.

El pacto intermedio de la Constitución de 1978 con el llamado Estado Autonómico ha mantenido un equilibrio inestable que ha empezado a agotarse con la mayor presencia de las tres dinámicas contrapuestas, con sus apoyos institucionales y de poder: centralizadora, federativa e independentista. Ya en el proceso de su elaboración, un ‘padre’ constituyente de centroderecha, Herrero de Miñón (UCD) hablaba de ‘nación de naciones’. ¿Cuáles son? España no es la cuarta nación compuesta por el ‘resto’ del Estado Español excluidas las llamadas nacionalidades históricas: Cataluña, País Vasco, Galicia; Andalucía ya se ganó en aquellos tiempos y mediante referéndum su derecho a similar capacidad de autogobierno. Pero también tienen una singularidad especial zonas como Comunidad valenciana, Les Illes, Canarias, Navarra, incluso Aragón y Asturias. Por citar a todas las Comunidades, qué queda: ambas Castillas con Comunidades limítrofes (Extremadura, Región Murciana, Rioja y Cantabria) y Madrid. Desde luego, ese segundo resto tampoco es España, a veces simbolizado por el Madrid-España, hecho en gran medida de aluvión migratorio del resto del Estado –como en mi caso, de origen aragonés-; en todo caso, en una España nueva bien podría aspirar a ser un distrito federal renovando los símbolos y compartiendo proyectos e instituciones estatales con otras capitales (por ejemplo, el Madrid de Manuela Carmena y la Barcelona de Ada Colau podrían colaborar en ello).

Por tanto, (dejando aparte la significativa presencia de inmigrantes, muy diferenciados entre sí por su origen –latino, magrebí, del Este europeo...- y con características culturales y problemáticas de integración específicas) nos encontramos con una gradación de identidades nacionales o comunitarias. Éstas tienen mayor o menor peso (o ninguno, en sectores cosmopolitas o a-

nacionales) en distintas personas y grupos sociales, según momentos y circunstancias. Y no necesariamente son soporte de un movimiento nacional o nacionalista (tampoco españolista) como actitud político-cultural central. Además, los nacionalismos (en plural) pueden ser más o menos densos, moderados, democráticos y excluyentes o inclusivos, así como encajar en distintos diseños institucionales.

Más allá del 'patriotismo cívico', basado en la democracia y la ciudadanía social, también los componentes nacionales se entremezclan con otros componentes identitarios (de clase, género, generación, étnicos, culturales, etc.) para plasmarse en actitudes, intereses y comportamientos diversos e interrelacionados. La persona es un ser social, tiene vínculos sociales y, por tanto, experimenta, interactúa y se siente partícipe con distintos grupos sociales con los que comparte dinámicas y objetivos. Y aquí el concepto de 'experiencia en común', frente al individuo abstracto liberal, es fundamental para reconocer esa situación relacional de pertenencia grupal y articularla a través de la convivencia, la solidaridad y el diálogo intercultural bajo una cultura universalista respetuosa de los derechos humanos.

A veces, alguna izquierda ha infravalorado esa 'realidad' (real) multidimensional de las clases trabajadoras y la necesidad de su interpretación, representación y conformación en una dinámica integradora de los legítimos intereses y derechos socioeconómicos, político-culturales e identitario-nacionales. Para las fuerzas progresistas de base popular, la acción por la igualdad, la libertad y la solidaridad, frente a la subordinación, la segregación y el autoritarismo, debe cubrir todos los campos sociales y culturales. Lo social (no solo de clase) debe ir unido con lo nacional (o cultural), aun con equilibrios y contrapesos diversos. Si lo primero es clave para las clases populares (trabajadoras y capas medias estancadas o en descenso), lo segundo también es básico y forma parte de su vida en común. Bajo una ética universal democrático-igualitaria hay que encajar las prioridades estratégicas e institucionales y la conformación de sujetos colectivos, con sus contextos, combinaciones y preferencias, con un horizonte emancipatorio.

Diversidad nacional y política en Cataluña

Frente a la crisis social y nacional. ¿QUÉ PAÍS?

Dejamos aparte el sentido de pertenencia local y europeo (o al mundo). Comparemos esa tendencia dominante en el conjunto de España y la de Cataluña. Existen varios análisis demoscópicos con distintos resultados, coincidentes en señalar esa diversidad, aunque con una asimetría política evidente entre la media de España y, en este caso, la de Cataluña.

Por ejemplo, según la encuesta de *Metroscopia*, del 30-10-2017, entre sus residentes considera: *sólo catalán*, el 19%; *más catalán que español*, el 25%; *tan catalán como español*, el 46%; *más español que catalán* el 5%, y *sólo español* el 3%. Sumadas las personas que albergan un doble sentimiento español junto con el catalán, constituyen una mayoría del 76%, similar (algo superior) a la media de España (con el gentilicio correspondiente), y aunque una parte de ellos se haya vuelto independentista instrumental (no identitario). Dicho de otra manera, Cataluña no se puede comprender sin esa doble identificación catalana-española. Según el mismo estudio, el 29% están *a favor de la independencia*, el 19% *a favor de seguir como ahora*, y el 46% *formar parte de España pero con nuevas y garantizadas competencias exclusivas*.

El barómetro del tercer trimestre (31-10-2017) del CEO, CIS catalán, con un muestreo más amplio, ofrece otros porcentajes donde hay más diferencias en el plano político: a la pregunta *¿quiere que Cataluña se convierta en un Estado independiente?*, responde SÍ el 48,7% (el independentismo sube 7,6 puntos desde el anterior estudio de junio), y contesta NO el 43,6% (baja 5,8 puntos) (*no sabe/no contesta*, el 7,8%). Está por ver el impacto de los hechos de estas últimas semanas y si se consolida o no esa tendencia.

En la evolución de los últimos años, el porcentaje de independentistas (siguiendo con los sondeos del CEO) ha estado entre 42%/48% y los no independentistas entre el 45%/50%. Ello supone un práctico empate, ya que en estas encuestas el margen de error es de 2,69 puntos arriba o abajo, es decir, el rango puede variar hasta 5,4 puntos. Por tanto, son significativas las variaciones de este último trimestre, aunque hay que ver cómo evolucionan y contando que ya en los años 2014/15 el independentismo estaba igual de alto, cercano a la mitad, pero sin llegar a ser mayoría.

Por otro lado, ante el impacto de la aplicación del Gobierno de Rajoy del artículo 155 de la Constitución con el cese y encarcelamiento del *Govern* y la convocatoria de elecciones autonómicas para el 21-D, según la reciente

encuesta de *Metroscopia* (12-11-2017), ha bajado drásticamente el porcentaje de personas que antes veían la independencia como una posibilidad real en un futuro cercano (51%) y ahora el 66% lo descartan. Habrá que volver sobre ello en otro momento.

La diferencia comparativa de los distintos resultados tiene también que ver con el tipo de opciones propuestas: si se reducen a dos, con una polarización extrema, o a tres, con una propuesta intermedia, que se corresponde más con la realidad diversa. Así, a la pregunta *¿estás de acuerdo con un Estado independiente?* dicen Sí el 40,2%; cuando se les ofrece como alternativa la otra opción de un *Estado dentro de un Estado Federal* la escogen el 21,9%, y la del *actual estado de autonomía* el 27,4% (o *una región de España*, el 4,6%). Lo relevante aquí es que ocho puntos y medio se definen independentistas si la única alternativa a ello se supone que es el inmovilismo o statu quo; pero, si se les ofrece la posibilidad, prefieren una opción federal (o confederal), llegando junto con una parte del otro bloque no independentista a ese destacable 22% partidario de una opción de mayor autogobierno sin independencia (y mayoritario en los resultados de *Metroscopia*).

Por tanto, expresadas las tres opciones, también ha crecido más de seis puntos la opción independentista este trimestre (desde el 34,7%, porcentaje más cercano al obtenido por la primera encuesta), pero aun así sigue siendo minoría entre la población. Sumadas estas dos posiciones (62,1%) los porcentajes de casi dos tercios de la población coinciden con el bloque que considera que *Cataluña ha conseguido un nivel insuficiente de autonomía* (64,6%), y que desde 2007 se ha mantenido entre el 60% y el 72%; mientras el bloque que cree que ha conseguido un *nivel suficiente de autonomía* es el 23%, similar durante los últimos diez años (5,4%, expresa *demasiada autonomía*). O sea, en Cataluña es ampliamente mayoritaria la crítica a los límites de la autonomía y la exigencia de mayor capacidad de autogobierno. La Constitución y el *Estatut 'cepillado'* por el Tribunal Constitucional están agotados entre su población.

Por último, hay que recordar que, según diversas encuestas, entre el 70% y el 80% de personas son partidarias de poder decidir sobre sus instituciones y su futuro, dato que se asocia a una posición soberanista y en la que participan también una parte del electorado autonomista del PSC e incluso

Frente a la crisis social y nacional. ¿QUÉ PAÍS?

del PP y Ciudadanos. Es decir, esa corriente catalanista y relativamente transversal, ampliamente mayoritaria, está compuesta por un sector independentista (45%) y otro no independentista (hasta el 35%), con una parte del primero y, sobre todo, del segundo, con doble sentido de pertenencia identitaria, es decir, con sentimientos catalanes y también españoles.

Contrastan estos datos con los del CIS antes comentados para la media estatal, aunque casi la cuarta parte se muestra partidaria de superar el marco actual, sumadas las personas que desean 'mayor autonomía que en la actualidad' (13,4%) y el reconocimiento de la 'posibilidad de convertirse en un Estado independiente' (10,2%) -con un 39,2% de mantenerse igual y un 28,2% con mayor centralización-.

Como conclusión, junto a una realidad de identidad nacional exclusiva (en sectores nacionalistas periféricos y también en el nacionalismo español) lo que predomina es el doble sentido de pertenencia a España y a la correspondiente Comunidad Autónoma. Con ese diagnóstico se debe articular, sobre la base de lo común, un discurso coherente con ambas realidades, con una óptica social y democrática, un proyecto de país plural que es el objeto último de esta reflexión.

¿Independencia o Gobiernos de Progreso?

El *Govern* de la Generalitat, actualmente cesado y procesado (o exiliado), ha fracasado en su proyecto de implementar ya una República catalana, un Estado independiente. Es un hecho evidente, reconocido por los dirigentes del PDeCAT y de ERC. La estrategia del bloque independentista ha mostrado sus debilidades frente al bloque de poder representado por el Gobierno de Rajoy. Sus líderes han comenzado una reflexión y una readecuación estratégica basada en el reconocimiento de ese desequilibrio en la relación de fuerzas sociopolíticas y fácticas y de control institucional. Esperan reeditar su mayoría en el *Parlament* en las elecciones del 21 de diciembre e insisten en continuar la 'construcción' de la independencia, en el sentido de ampliar su base de apoyo ciudadano, así como económico, institucional y europeo. Pero descartan (ambiguamente) la vía unilateral como constitución inmediata de un Estado soberano en confrontación abierta con el

Estado. No es la posición de la CUP que insiste en lo acertado de la proclamación de la independencia y exige su construcción inmediata desafiando el poder estatal y las dificultades estructurales.

Por mi parte, en un artículo publicado el día 3 de octubre en el diario *Rebelión* (<http://www.rebellion.org/noticia.php?id=232314>), valoraba el fracaso del Gobierno de Rajoy en su actuación contra la masiva y exitosa expresión cívica del 1-O, aunque insuficiente para considerarlo un referéndum vinculante; pero también explicaba ya los límites del independentismo, señalando las 'dificultades estructurales para imponer la independencia de Catalunya'. En esos momentos las expectativas sobre la proclamación de la independencia y su implementación práctica estaban en lo más alto.

Los nuevos acontecimientos, con una evolución frenética, están claros. El Gobierno de Rajoy, con sus apoyos parlamentarios de *Partido Socialista* y *Ciudadanos*, ha aplicado el artículo 155 con el cese del *Govern*, a pesar de la desaprobación popular mayoritaria en Cataluña y las grandes movilizaciones democráticas y soberanistas, y ha bloqueado el despliegue o desarrollo de la República catalana. Al mismo tiempo, se ha mostrado la impotencia fáctica de la vía unilateral desarrollada por el bloque independentista cuyos dirigentes, finalmente, han reconocido solo su carácter simbólico o declarativo con renuncia a su construcción operativa. Así, aun defendiendo simbólicamente la legitimidad del *Govern* y el *Parlament*, han aceptado la participación en las elecciones autonómicas para el 21-D, convocadas por el presidente del Gobierno español, cuyos resultados representativos, en el marco de la nueva realidad impuesta con los equilibrios de poder manifestados, abrirán una nueva etapa.

Reafirmación democrática y percepción más realista sobre el Estado independiente

Veamos algunos datos de la percepción de la ciudadanía y su evolución. Según la encuesta de *Metroscopia*, publicada el 12-11-2017, en esas semanas de octubre tras el 1-O y el 3-O (huelga general democrática contra la represión policial), en torno a la primera aprobación (dejada en suspenso) de la *Declaración Unilateral de Independencia* (DUI) por el *Parlament* el 10 de

octubre y hasta su aprobación definitiva el 27 de octubre, el 51% de la población catalana consideraba factible la secesión en ‘un futuro más o menos cercano’.

No obstante, tras la aplicación por el Gobierno del PP del artículo 155, tras su aprobación por el Senado con los apoyos del *Partido Socialista* y *Ciudadanos* ese mismo día, el 62%, casi dos tercios (aunque el diario *El País* transcribe el 66%) ‘de catalanes ve poco probable la independencia de Cataluña’, es decir, descartan la idea de que Cataluña pueda separarse de España y convertirse en un estado independiente en un futuro más o menos cercano. O sea, de la mitad pasa a un tercio los residentes que confían en la implementación inmediata de la República catalana, por mucho que la afirmen como objetivo a largo plazo.

Por otro lado, siguiendo con *Metroscopia*, en Cataluña, el 69% de personas encuestadas muestran su desaprobación con la gestión del Gobierno de Rajoy y, expresamente, el 61% son ‘contrarios a la manera en que se está aplicando el artículo 155’. Ya anteriormente, a la pregunta *¿Cree que una aplicación del artículo 155 sería beneficiosa para apaciguar la situación actual?*, había contestado NO el 61% y SÍ el 13% (65% entre votantes del PP). Dato que contrasta con el 61% de la población española (incluido el 56% de los votantes socialistas) que apoya la aplicación del artículo 155.

En relación a la posibilidad de llegar a un acuerdo que permitiera la permanencia de Cataluña en España, el escepticismo social es algo asimétrico y muy fuerte, aunque ha descendido ligeramente en ambos casos. Antes, un 56% de catalanes lo veían como algo muy difícil y después ha bajado al 49%; y otro 49% cree que aún hay esperanza, porcentaje que alcanza hasta el 60% para el resto de los españoles.

No obstante, a la cuestión de “La mejor manera de resolver el problema entre Cataluña y España es que se celebre un referéndum pactado y plenamente legal sobre la independencia de Cataluña en el que los catalanes decidan si quieren o no seguir formando parte de España”, contesta *De acuerdo* el 82% (la casi totalidad de independentistas y de *Catalunya en Comú-Podem*, e incluyendo el 75% del PSC, el 57% de *Ciudadanos* y el 49% del PP), y *En desacuerdo* el 16% (el 21% del PSC, el 41% de *Ciudadanos* y el 43% del PP).

Por tanto, aunque la mitad de la sociedad catalana ve difícil llegar a un acuerdo es muy mayoritaria (más de cuatro quintas partes) la aspiración a poder decidir mediante un referéndum pactado y legal su relación institucional con España. En definitiva, se combina una reafirmación democrática – referéndum pactado- como procedimiento para resolver el conflicto, se mantiene un amplio bloque independentista, cercano a la mitad, pero se rebaja a un tercio la expectativa de poder implementar de forma inmediata una República catalana independiente.

La incapacidad de la estrategia independentista

Volvamos a este último aspecto. La aprobación de la *Declaración Unilateral de Independencia* por la mayoría del *Parlament* que, no olvidemos, representa solo el 47,8% de la ciudadanía catalana y la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno del PP, junto con la actuación del aparato judicial, han demostrado los límites de la estrategia independentista tal como habíamos avanzado. Había, y se han demostrado posteriormente, dos tipos de razones.

Uno de carácter democrático, derivado de los déficits democráticos de la consulta realizada, sin suficientes garantías al no estar pactada y sin interpelar en condiciones de igualdad y con una actitud inclusiva a la otra mitad de la sociedad catalana. Sus resultados no podían legitimar la independencia, tal como ha sido (y todavía es) el núcleo justificativo del bloque independentista. Otro tipo de motivos eran de carácter fáctico, los límites de su ‘contrapoder’ institucional (y popular) frente al poder del Estado y sus aparatos judiciales, de seguridad y económicos, así como la falta de reconocimiento internacional.

Es decir, antes de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, por parte del Gobierno de Rajoy con el apoyo de *Ciudadanos* y el *Partido Socialista*, cesando y encarcelando al *Govern* y procesando a parte de la mesa del *Parlament*, ya se podían constatar dos hechos ‘verdaderos’: primero, la ausencia de una mayoría ciudadana reforzada o un consenso social y político suficiente que legitimase claramente el paso inmediato a un Estado independiente; segundo, la ‘incapacidad’ operativa de las supuestas estructuras de la nueva República y la impotencia para convertir las

Frente a la crisis social y nacional. ¿QUÉ PAÍS?

instituciones autonómicas en instituciones ejecutivas independientes en confrontación con el Estado español: desde el propio *Govern* y el *Parlament*, pese a la insistencia en su soberanía total, hasta las estructuras de seguridad (*Mossos d'esquadra*) y administrativas (por ejemplo, de Hacienda) o la capacidad de 'contrapoder' organizado en la calle.

Ambos hechos han sido producto de interpretación interesada e irrealista. Primero, el embellecimiento de los propios apoyos ciudadanos (que no llegaban a la mitad), confiando en su necesaria tendencia ascendente, en particular intentando absorber, neutralizar o instrumentalizar la autonomía del tercer espacio representado por *En Comú-Podem* (y en menor medida del PSC), con infravaloración del distanciamiento y la brecha producida respecto de la otra mitad de la sociedad catalana.

Segundo, la sobrevaloración del poder institucional propio y su capacidad operativa independiente, que sólo necesitaría una cobertura jurídica propia para instaurar una legalidad contrapuesta a la del Estado español y ser soberano en el plano ejecutivo. De ahí el idealismo discursivo y formalista del papel (poco) operativo de la *Declaración unilateral de independencia*, ahora rebajada a acto simbólico.

Tercero, infravaloración del poder, la capacidad operativa y la legitimidad del contrario, el Estado Español, incluido el poder judicial, así como la determinación del Gobierno del PP apoyado por la alianza del bloque *monárquico* y la subordinación del *Partido Socialista*. No se trataba de un Gobierno fascista y desacreditado que utilizaba la violencia explícita de forma generalizada y, por tanto, fácil de desenmascarar y aislar cívicamente y en la opinión pública europea. El Estado, que utilizó la represión abierta el 1-0, no ha tenido necesidad de utilizarla para imponer el cese del *Govern*; solo su gran capacidad de coerción, incluida la judicial, con una aplicación desproporcionada de la ley vigente, ha disuadido la actitud de desobediencia del aparato administrativo o la rebeldía de las fuerzas de seguridad catalanas (*Mossos*), así como la operatividad de las hipotéticas estructuras de doble poder (*Comités de defensa de la República*).

Cuarto, la movilización social democrática de rechazo al 155 y defensa de las instituciones catalanas se ha expresado masiva y cívicamente, especialmente en las dos grandes manifestaciones, con participación no solo

independentista sino democrática, vinculada a los *comunes*. Pero tampoco ha sido suficiente para impedir la intervención del poder ejecutivo en el *Govern*, liberar a los presos y revertir el 155. El desacuerdo mayoritario de la ciudadanía contra la intervención del autogobierno se puede convertir en una mayor deslegitimación del poder estatal, en particular del PP, y una mayor legitimidad para las fuerzas soberanistas, no solo independentistas. Pero en el cálculo electoral también interviene la credibilidad política de las alternativas propuestas y su gestión. Y en eso, he dicho que, en el caso independentista, ha faltado fuerza y coherencia y de ahí su perplejidad.

El peso del poder económico y europeo

A todo ello se han añadido dos elementos que han afianzado la realidad y la sensación de impotencia en el control de su economía y el aislamiento institucional al no conseguir reconocimiento internacional. Así, el desplazamiento de la sede social de varios miles de empresas (más de mil, su sede fiscal, con su impacto presupuestario), ha supuesto una demostración de desconfianza en el proceso independentista de la oligarquía empresarial y financiera catalana, en gran parte imbricada con el capitalismo español, vinculada a su mercado, conectada con las estructuras económicas europeas -y mundiales- e insertada en sus élites dominantes.

Además, el *Govern* ha demostrado su impotencia reguladora, así como las desventajas de un proceso incierto fuera de la UE, que contrastaba con una supuesta superioridad y mejora económica como país independiente sin la rémora de España, menos modernizada. Pero ese relato se ha dado de bruces con la realidad. En la lógica subyacente de la hegemonía neoliberal de sus principales responsables económicos, el *Govern* mantenía la creencia de la bondad de las mismas políticas económicas de austeridad y pérdida de derechos laborales y sociales, es decir, de conectar mejor con las estructuras de poder económico europeas y el poder liberal conservador al que está inscrito el dominante (hasta ahora) PDeCAT.

La gran frustración popular por la crisis social y la responsabilidad del *Govern* de Mas y, después, de Puigdemont había sido hábilmente trasladada hacia la cuestión nacional. Su salida no era cambiar las políticas de austeridad

del Gobierno de Rajoy y el bloque de poder representado por Merkel, sino esperar que un Estado independiente construyese una Cataluña próspera, separada de la atrasada España. La ausencia de pacto fiscal y la solidaridad impuesta en la distribución interregional completaban el discurso de las ventajas de la independencia: estar en mejores condiciones económicas y materiales, beneficiosas para el conjunto de la ciudadanía, incluido sus capas populares, y así constituir una alternativa de salida a la crisis con toda su secuela de desigualdad y empobrecimiento. Aquí, conviene separar dos dinámicas contrapuestas: una la económica, con orientación neoliberal; otra, la social de carácter progresivo. Pero el modelo social de la República catalana no está claro; más bien es el de continuidad con las políticas dominantes en España y la UE. Motivo añadido para la desconfianza en amplios sectores de las capas populares.

Y la alternativa social, aparte de hacer ajustes redistributivos de lo existente, es terminar con la austeridad y los presupuestos restrictivos de gasto público e incrementar el porcentaje de gasto social por habitante; es decir, aumentar el conjunto de la tarta presupuestaria (incrementando los ingresos) a repartir entre las Comunidades Autónomas que, sobre todo, va a gasto público social (sanidad, educación, dependencia...) y que está infradotada en los presupuestos (España gasta unos siete puntos de PIB menos que los países de la UE-15, los más avanzados de la UE). La salida debe ser progresista, no de competencia interregional-comunitaria.

En el plano internacional, la ilusión del apoyo europeo también ha prevalecido y se ha ido desvaneciendo. No hay ningún interés fundamental de ningún país importante para apoyar a la nueva República catalana (como fue Alemania –y la OTAN- para la independencia de Eslovenia y Kosovo o las repúblicas bálticas –para aislar a Rusia-). El Gobierno de la derecha es fiel aliado al bloque de poder europeo y la integración política, económica y geoestratégica una realidad que interesa a todos los poderes en la UE, todavía más en la incertidumbre estratégica de sus alrededores (Rusia, Oriente Medio, Norte de África...) y de las dinámicas centrípetas y xenófobas en el interior de muchos Estados. Sin una negociación o salida pactada, la unilateralidad añadiría incertidumbre para los poderes europeos (y mundiales), institucionales y económicos, que se han manifestado en contra de una República catalana.

Mayorías sociales tras una nueva agenda social y plurinacional

Por tanto, el proceso independentista necesitaría más legitimidad democrática y/o más poder político-institucional (y de seguridad) y control económico, con mayores aliados (en España y en Europa), o bien un fuerte debilitamiento del poder de las derechas en el Gobierno central. En estos momentos, su debilidad comparativa es evidente: el Estado español es más fuerte, especialmente en lo segundo y con suficiente respaldo legítimo, legal e internacional, en parte derivado del apoyo de la dirección socialista.

La perspectiva independentista, tras el 21-D, y aunque vuelva a ganar la mayoría parlamentaria e incluso una ligera mayoría de votos, todavía no tendría un nivel suficiente de las dos condiciones básicas –legitimidad y poder– para desafiar con otra vía unilateral al Estado Español, al menos con la suficiente credibilidad para ganarle. Su posible reajuste estratégico pasa por controlar el *Govern*, ensanchar su apoyo social y conformar estructuras soberanas como acumulación de fuerzas y medio para negociar un acuerdo ventajoso de incremento del autogobierno. Pero, para ello, bajo la previsible nueva hegemonía de ERC en el campo independentista, tendría que activar una agenda social que permitiese acercar posiciones con *Catalunya en Comú-Units Podem*, aunque le llevase al distanciamiento con el PDeCAT, y dejar aparcada la vía de la imposición de la unilateralidad. Se abriría la única vía realista y transformadora de verdad, progresista en lo social, democrática y pactada en el conflicto nacional, superando las brechas identitarias, y unitaria y solidaria con el cambio político en España (y Europa).

En definitiva, ante el conflicto en Cataluña y el bloqueo autoritario y regresivo del Gobierno de las derechas de Rajoy (y Rivera), se ha demostrado las dificultades de la estrategia independentista. Solo cabe una nueva estrategia, una salida de cambio más democrático y más operativo (aun con sus enormes dificultades, incluido la ambivalencia del PSOE): echar al PP por parte de las fuerzas progresistas, ganar a las derechas unas elecciones generales, con un Gobierno de Progreso en España, junto con otro *Govern* progresista en Catalunya, con nuevas mayorías sociales y políticas que aseguren el avance hacia una agenda social (también en el marco europeo),

Frente a la crisis social y nacional. ¿QUÉ PAÍS?

una fuerte democratización (empezando con la lacra de la corrupción) y un mayor acuerdo en la cuestión territorial, con una respuesta democrática, pactada y social en Cataluña y una reforma sustancial de la Constitución.

3. Estrategias para el cambio: Experiencia y desafíos³

La lógica populista –antagonismo e idealismo voluntarista- ha sido relativamente funcional en la etapa precedente (2014/16) –no tanto en la anterior, 2008/14-, pero presenta mayores insuficiencias para abordar la etapa que comienza. En España, dadas las características específicas del movimiento popular era más adecuada que otros enfoques, particularmente frente al socioliberalismo y el determinismo economicista, para ese momento: enlazar con la amplia corriente social progresista (llámese sujeto o ‘pueblo’) contra los poderosos configurada en la fase anterior, así como para la tarea específica de articulación de una nueva representación política, conformar *Podemos* y los aliados y convergencias. No obstante, los mecanismos existentes y las tareas han cambiado, hay nuevos desafíos, y exigen madurar las estrategias y revisar críticamente esa teoría, tal como explico en el libro *El populismo a debate* (texto completo: <http://www.rebellion.org/docs/234831.pdf>).

En la primera parte de este análisis explico la experiencia de la pugna sociopolítica para el cambio en España: los avances de las fuerzas del cambio; las correcciones estratégicas de la dirección de Podemos y sus aliados, y las dificultades para alianza de progreso de las fuerzas del cambio con el Partido Socialista, diferenciando los planos estatal y territorial. En la segunda parte me centraré en los retos estratégicos para el cambio político: la configuración de una corriente sociopolítica progresista y alternativa, base social fundamental para el cambio, así como su relación con la representación político-institucional y la existencia en la sociedad española de energías transformadoras.

Los avances de las fuerzas del cambio

Los avances principales de las fuerzas del cambio no vienen derivados del enfoque populista sino del acierto analítico y político concreto de sus dirigentes, con influencias teóricas e ideológicas diversas, así como por la voluntad de cambio de miles de activistas.

³ Publicado en *Rebelión* en dos partes, los días 28-12-2017 y 2-1-2018.

Las fuerzas del cambio han conseguido objetivos fundamentales en la articulación de los tres ámbitos de institucionalidad: consolidar una amplia representación política en los tres niveles (local, autonómico y estatal), algo asimétrica territorialmente, pero con más del 20% del electorado; una gestión institucional hegemónica en varios de los grandes ayuntamientos del cambio, con lo que supone de mejora para el conjunto de la ciudadanía y como demostración de capacidad política y gestora, y una formación política, las llamadas fuerzas del cambio, Unidos Podemos y convergencias, junto con candidaturas municipalistas, sometida a un proceso complejo de articulación.

Esa dinámica del traslado del instrumento del avance para la sociedad hacia ese marco de delegación institucional, representativa y política ha conllevado, de forma previsible, una cierta desactivación del campo específico de la participación activa en iniciativas sociales autónomas en el ámbito de la propia sociedad, el tejido asociativo o los movimientos sociales, incluido el sindical o laboral. Aunque se mantiene, especialmente en la mayoría de gente joven, una significativa conciencia cívica, la ola de preocupación por los asuntos públicos y su seguimiento, particularmente en las redes sociales (con menor impacto de los grandes conglomerados mediáticos). Sin embargo, el grueso de las aspiraciones y expectativas de cambio de esa amplia base social, con repercusión entre los sectores progresistas y el resto de la ciudadanía, han estado concentradas en la canalización institucional de la democracia representativa, con el largo ciclo electoral y la construcción de una nueva formación política con su reflejo en las instituciones políticas.

La importante marea cívica, expresada en el periodo anterior (2008/2010 hasta 2014), con la respuesta popular a la crisis sistémica y su gestión autoritaria y regresiva, de indignación cívica y protesta social progresista, junto con el bagaje sociopolítico y cultural democrático-igualitario de una amplia ciudadanía crítica, ha expresado los grandes avances y cambios en el marco político-institucional y, al mismo tiempo, los límites de su profundidad expansiva y transformadora.

Por tanto, con una relativa estabilidad de las tendencias sociales de fondo y los equilibrios representativos con sus condicionamientos, supone la necesidad de nuevos instrumentos político-institucionales para encarar el proceso siguiente: consolidar las fuerzas y los apoyos institucionales, pero,

sobre todo, conseguir un avance cualitativo en la capacidad política y organizativa de las fuerzas del cambio en las tres esferas. Estamos en un tercer ciclo de reajuste político-institucional, distinto a los dos anteriores, y diferente a la larga etapa democrática.

El horizonte del cambio está puesto, sobre todo, en el marco electoral o político-institucional de los años 2019 (elecciones locales, autonómicas y europeas) y 2020 (previsiblemente elecciones generales y expectativas de cambio gubernamental). Pero estos casi dos años de interregno pendiente son decisivos para encarar ese desafío. Lo específico es que el cambio institucional real (salvo una imprevisible moción de censura ganadora o una crisis política profunda por el asunto catalán) no es inminente y los mecanismos electorales se sitúan en el medio plazo. Y la acción política tiene que tener un doble sentido: inmediato, de condicionamiento de las políticas liberal-conservadoras y mejora de la situación de la gente, y a medio plazo, de camino persistente y garantías para el cambio institucional con un sentido democrático y de justicia social.

Correcciones estratégicas

En las estrategias políticas de *Podemos* y sus aliados se han ido produciendo correcciones, algunas significativas, derivadas del cambio de situación y la maduración de las propias estrategias, incluido el debate de Vistalegre II con sus relatos dispares. Por ejemplo, en la concreción del nivel de antagonismo o colaboración y la actitud ante el *Partido Socialista*, ya iniciado tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015, donde se priorizó, por parte de las fuerzas del cambio y, en parte, por el propio PSOE, el objetivo de echar al PP de esas instituciones territoriales.

En *Podemos* y sus aliados se iniciaba un cambio de actitud general: admitir que, a corto-medio plazo, el cambio institucional y, específicamente, gubernamental para aplicar un programa de progreso, no era posible de forma generalizada solo por el propio autodesarrollo, sobre todo si el resto de los otros tres grandes partidos formaban un bloque continuista en las políticas fundamentales. Así, ha existido (y todavía existe) un riesgo evidente, el proyecto continuista y la normalización de la primacía institucional de las

derechas, con el aval socialista (el plan *susanista* y de los barones y poderes fácticos): la llamada triple alianza, con reedición de la alternancia bipartidista renovada y el aislamiento de las fuerzas del cambio y una alternativa de progreso.

Pero ese proyecto continuista ha salido tocado por dos motivos: por un lado, por la resistencia y la consolidación del bloque del cambio a pesar de las campañas políticas y mediáticas de desprestigio y acoso; por otro lado, por la rebelión de la mayoría de la militancia socialista partidaria del distanciamiento del *Partido Socialista* respecto del *Partido Popular* y el afianzamiento de una posición de izquierdas (por definir) y de acercamiento a *Podemos* y sus aliados (por concretar). No obstante, la nueva dirección socialista, con la crisis catalana, ha vuelto a priorizar su pacto con las derechas.

Por tanto, las fuerzas del cambio deben distinguir los dos niveles, territorial y estatal, porfiar en el distanciamiento del *Partido Socialista* del intento restaurador del bipartidismo renovado de simple alternancia y buscar fórmulas apropiadas para avanzar en la democracia y el progreso social con menor aislamiento político.

Cuando los líderes alternativos se encontraron con la hegemonía socialista en diversas Comunidades Autónomas, adoptaron con flexibilidad la prioridad estratégica del desalojo del PP con apoyos a la investidura socialista en varios gobiernos autonómicos, con acuerdos mínimos. E igualmente por la presión unitaria, tuvo que hacer el *Partido Socialista* para investir alcaldes alternativos en grandes municipios. En ese ámbito local, con competencias fundamentales de gestión de los servicios públicos, las constricciones y los compromisos socialistas respecto del poder establecido y sus políticas de austeridad eran menores y algo diferenciadas. Eso ha permitido acuerdos básicos de gobernabilidad frente a las derechas.

Igualmente, ante los resultados en las elecciones generales del 20-D-2015, los dirigentes y las bases de las fuerzas alternativas aceptaron el principio democrático de reconocer la representatividad de las dos formaciones y apoyaron la oferta de un gobierno alternativo de progreso, con un programa negociado y una gestión compartida, con la presidencia gubernamental del Secretario General del PSOE.

Dificultades para una alianza de progreso

Como se sabe, la nueva actitud colaborativa de *Podemos* y sus aliados solo fructificó parcialmente en el ámbito territorial pero no en el gubernamental. La causa principal de ese fracaso fue la preferencia del *Partido Socialista* por su pacto con *Ciudadanos* y un plan continuista que prolongaba las consecuencias de la crisis socioeconómica y el continuismo institucional y territorial. Además, llevaba aparejada la finalidad de la subordinación de las fuerzas del cambio y su marginación. Esa estrategia continuista, presentada como transversal entre el centroizquierda y la derecha renovada, es la que no permitió echar al PP; tampoco tras el 26-J, en que *Ciudadanos* apostó claramente por el continuismo de Rajoy y sus políticas (similares a las de su pacto con el PSOE). Pero esta interpretación fue objeto de una gran polémica pública y el relato tergiversado que se impuso en los grandes medios de comunicación era otro: la causa era la actitud sectaria e irresponsable de la dirección de *Podemos* (particularmente, de Pablo Iglesias) hacia el *Partido Socialista* que impedía echar al PP del Gobierno.

Lo que se ventilaba era un reforzamiento del continuismo estratégico de las políticas socioeconómicas e institucionales, incluido el tema catalán que ha alcanzado un significado central, con perjuicio para las condiciones de la gente y el cierre de la dinámica de cambio; solo existía la ventaja relativa de un recambio o alternancia de élite gobernante, pero que buscaba la vuelta a un nuevo bipartidismo renovado. El fundamento alternativo se basaba en insistir en el emplazamiento hacia el *Partido Socialista* con el único plan realmente de cambio de progreso y ruptura con las políticas liberal conservadoras: un programa gubernamental compartido y negociado según el equilibrio político derivado del reconocimiento mutuo de la representatividad casi paritaria de ambas formaciones, sin la preponderancia de la alianza socialista con *Ciudadanos*. Se trataba de dejar abierto y vivo el proceso de cambio de progreso y la no subordinación completa de las fuerzas del cambio a ese eje hegemónico de gran centro con su plan continuista socioeconómico y de relaciones de poder en el marco del consenso liberal europeo.

En consecuencia, aparte de las deficiencias en aspectos parciales y en su implementación comunicativa, el análisis de las tendencias principales y la

estrategia de conjunto de *Unidos Podemos* y convergencias, avalada muy mayoritariamente por sus bases inscritas, apuntaban adecuadamente. Aunque fue incomprendida por una parte de la gente progresista y motivo de una gran campaña mediática de aislamiento político, principalmente, del ámbito socialista, la firmeza en la orientación transformadora de las fuerzas del cambio y su consistencia política y organizativa, vistas en perspectiva, han dado sus frutos: han contribuido a evitar la consolidación de ese continuismo estratégico, impedir la normalización institucional de las derechas, superar el bipartidismo renovado con una simple alternancia y favorecer el giro hacia la izquierda de la militancia del *Partido Socialista*. Y todo ello ha permitido mantener abiertas las opciones del cambio real de progreso, beneficioso para las mayorías sociales, y ha impedido el aislamiento social de las fuerzas alternativas y su proyecto transformador autónomo.

La dirección del nuevo PSOE, en caso de confirmarse su giro hacia la izquierda y su preferencia de acuerdos con *Unidos Podemos* y convergencias, abría, inicialmente, nuevas expectativas para el cambio institucional, vía electoral y alianza de progreso, no exento de dificultades e insuficiente voluntad política. No obstante, esa expectativa se ha bloqueado por su actitud 'uninacional' y de apoyo a las medidas autoritarias del Gobierno de Rajoy ante la crisis catalana. En todo caso, superando el periodo involutivo de la Comisión gestora socialista, con su compromiso con la gobernabilidad del *Partido Popular* de Rajoy y su preferencia por los acuerdos con las derechas, vuelve a tener sentido la colaboración entre las fuerzas del cambio y un *Partido Socialista* renovado con el objetivo estratégico de desplazar la primacía gubernamental liberal conservadora y abrir un nuevo ciclo institucional de progreso con políticas favorables a la mayoría social.

En definitiva, el componente discursivo y la legitimación del nuevo liderazgo alternativo debían conectar con ese nuevo campo sociopolítico progresista y de izquierdas, adquirir suficiente credibilidad para conseguir su delegación representativa y aprovechar la oportunidad de un reequilibrio político-institucional. El haber conseguido dar un paso significativo en esa dirección es el extraordinario mérito de los líderes de las nuevas fuerzas del cambio, provenientes y enraizados en la protesta social de progreso y con un discurso alternativo y transformador en confrontación con los poderosos. Eran

adecuados el enfoque de la polarización política (igualitaria y democrática) y una prioridad ambiciosa y voluntariosa de un nuevo discurso y liderazgo que conectasen con la realidad del conflicto sociopolítico y rellenasen el hueco de la orfandad representativa en el ámbito político-institucional.

Corriente sociopolítica y representación político-institucional

En esta segunda parte me centro en los retos estratégicos para el cambio político: la configuración de una corriente sociopolítica progresista y alternativa y su relación con la representación político-institucional.

Haciendo una metáfora, hay que clarificar el papel de cada uno de los dos elementos, aunque tenga efectos en la legitimidad mayor o menor de los liderazgos: lo que se había conformado era una 'marea cívica' frente a los poderosos con esos valores de fondo democrático-igualitarios, y lo adicional construido sobre esa corriente social ha sido una 'tabla de surf', representativa y delegada, sobre todo, para la gestión institucional, aunque imprescindible para la consolidación de esa capacidad articuladora de la dinámica sociopolítica de cambio.

Es importante este problema interpretativo de distinguir y valorar los dos componentes: corriente sociopolítica y representación político-institucional. No es secundario explicar y promover su interacción. Afecta, precisamente, a las tareas estratégicas actuales y cómo encararlas. Qué hacer y cómo para mantener, consolidar o ampliar el campo social y electoral (la marea, ahora más convertida en brisa marina, aunque con corrientes de fondo) por una opción de cambio de progreso real o sustantivo. La marea, la dinámica sociopolítica de fondo de ese sujeto de cambio, con menor capacidad expresiva en el ámbito de la movilización social, está condicionada por diversos mecanismos estructurales, socioeconómicos, político-institucionales y culturales. Y, especialmente, está influida por las relaciones de fuerzas sociales y políticas, engarzadas en el poder y/o la sociedad. Y es el aspecto que no se suele tratar adecuadamente desde el enfoque populista. Es el principal déficit para comprender las características de la nueva etapa y elaborar una estrategia transformadora de ese doble plano: las tendencias sociopolíticas de fondo y la gestión representativa y de liderazgo.

La configuración de la formación política y su papel de refuerzo mutuo con su base social casi conformada es más fácil, al ser accesible a mecanismos internos, aunque precisa de otras características ideológicas y organizativas democráticas, realistas e integradoras. La articulación, ampliación y activación de una base social diversa y autónoma, un heterogéneo tejido asociativo o de agrupamiento laboral y sociocultural, compuestos e influidos por distintos actores y condicionamientos, es una tarea mucho más compleja y persistente. Tiene resultados netos inmediatos en experiencia sociopolítica, mejoras concretas para la gente y empoderamiento cívico. Pero, sobre todo, produce efectos políticos a medio plazo: participación en el proceso general de cambio social y político. Sin embargo, la conformación de un sujeto sociopolítico necesita una función estimuladora más sutil, permanente y mediadora.

El enfoque populista de líderes de *Podemos* (al igual que el de otras teorías del conflicto presentes entre las fuerzas del cambio) contenía elementos básicos (polarización y constructivismo) con componentes funcionales o positivos para esa tarea de conformar una alternativa política de cambio frente al continuismo liberal-conservador y el socioliberalismo adaptativo.

Pero, recordemos, el resultado específico de esta última etapa ha sido, sobre todo, construir una nueva representación político-institucional en un marco delimitado por la experiencia del movimiento popular en España en un contexto determinado. Y ha dado lo que ha dado en dos planos diferentes. Por un lado, el fin del cierre bipartidista y su normalización socioeconómica e institucional en torno a una gestión autoritaria y antisocial de la crisis sistémica. Es decir, se ha mantenido, con sus ritmos y condiciones específicos, la oportunidad de promover un ciclo transformador con el horizonte de justicia social y democratización institucional; ello en un difícil marco europeo de hegemonía liberal conservadora, pero con nuevas dinámicas sociales y políticas democráticas y de izquierda renovada. Por otro lado, una significativa representación comprometida con el cambio sustantivo de progreso, constituida por *Unidos Podemos*, convergencias y candidaturas municipalistas, similar en su representatividad ciudadana a la del *Partido Socialista*, ahora con un nuevo proyecto (retórico) de 'izquierdas' y sin responsabilidades gubernamentales, o sea, con posibilidad de colaboración (nuevamente bloqueada por su apoyo al

Gobierno de Rajoy en la aplicación del artículo 155 de la Constitución, cesando al *Govern* y recortando el autogobierno catalán).

No obstante, es la dinámica de esas variables sociopolíticas y contextuales, en el marco del carácter de la gestión de la crisis sistémica y su evolución, así como la actitud de la ciudadanía activa, las que siguen conformando la corriente social de fondo. Y sobre esas mayorías sociales incide la acción política de las nuevas élites políticas del cambio, ya sea discursiva, de gestión institucional o de articulación asociativa y movilizadora.

La especialización representativa o gestora de las fuerzas alternativas puede dejar de lado la vinculación directa con la sociedad, considerarla pasiva o simplemente receptora de discurso y utilidad de la gestión de los servicios y prestaciones públicas (limitada todavía). O simplemente, resignarse, declararse impotente y sin competencias en esa tarea colectiva de activación cívica con otros actores sociales para ensanchar y consolidar la base social, el sujeto sociopolítico y la dinámica de cambio. El concepto de partido-movimiento parece que quiere significar la necesidad de la formación política, desde la autonomía de cada cual, de conexión con las dinámicas populares progresivas, la vinculación con el asociacionismo de base y el estímulo de la participación democrática y el empoderamiento cívico. Sin embargo, todavía es algo impreciso y, sobre todo, necesita de experimentación práctica, arraigo entre la gente descontenta o crítica y persistencia.

El idealismo postmoderno, de revalorizar el impacto del discurso y el liderazgo, así como el posibilista institucionalismo elitista, infravaloran esa ardua tarea de arraigo social y activación cívica por abajo; se suelen quedar en un intento de legitimar su función representativa sin asegurar, práctica y teóricamente, los procesos de cambio. El impacto de esas insuficiencias es mayor en esta nueva fase al desactivarse los anteriores y amplios procesos participativos en la contienda sociopolítica y, al mismo tiempo, tener que abordar transformaciones simbólicas y estructurales de amplia repercusión ciudadana y respecto del poder. La no superación de esos límites de enfoque y perspectiva estratégica conlleva la incapacidad para interpretar adecuadamente, con rigor y desde un pensamiento crítico y realista, los factores favorables y desfavorables de la transformación social y política y la

dificultad para definir las prioridades estratégicas. Conllevan la repercusión de deficiencias más ostentosas o desorientaciones en la acción política inmediata.

Existen energías transformadoras

No tienen fundamento los vaticinios o deseos divulgados en distintos ámbitos políticos y académicos de la disolución de esta dinámica de cambio progresista en sus dos vertientes: amplia corriente sociopolítica de fondo y relevante representación político-institucional. Infravaloran las causas estructurales, históricas y sociopolíticas de su aparición y consolidación en el nivel que ha alcanzado en España (y otros países del sur europeo e incluyendo Francia y Reino Unido): el importante rechazo cívico a una gestión autoritaria y antisocial de la crisis sistémica (socioeconómica, institucional y territorial) y la defensa de la justicia social, los derechos humanos y la democratización política.

Igualmente, muchos medios resaltan en exceso la fragilidad, los errores y las insuficiencias de este conglomerado político, aventurando su agotamiento o explosión, cual burbuja coyuntural que va a explotar en cualquier momento, dejando vía libre al tradicional bipartidismo corregido. O bien, aseguran el fin del descontento popular y el éxito de la normalización o la hegemonía cultural y política liberal conservadora con el asentamiento institucional y el consentimiento popular a su gestión y su salida a la crisis sistémica, basada en el incremento de la desigualdad social y la subordinación de las mayorías ciudadanas. Su plan está basado en un modelo social regresivo, con pocos derechos sociales y laborales y precarizado, y un modelo político autoritario o de democracia débil, sin hueco para las fuerzas transformadoras progresistas y de izquierda de cierta relevancia e influencia.

Pero, los dos fenómenos juntos tienen suficiente solidez política y estructural para mantenerse, al menos en torno a los equilibrios actuales. El plan sistemático del poder establecido y sus aparatos mediáticos para reducirlos de forma prepotente ha fracasado en sus distintas fases y mecanismos desde el lejano 2010/2011. La dinámica del cambio se ha frenado de acuerdo a las relaciones de fuerzas en presencia. El problema a plantear y resolver es cómo romper el relativo estancamiento y *statu quo* en los equilibrios

conseguidos y persistir en el horizonte de dar un paso cualitativo de apoyos sociales e influencia político-institucional tras los objetivos de un cambio sustantivo y de progreso en la gestión de la todavía persistente crisis sistémica. Para ello, para mejorar la práctica política, organizativa y de alianzas, hay que afinar la estrategia, los discursos y el liderazgo y, por tanto, los enfoques teóricos.

4. Otra España, otra Cataluña⁴

Se ha iniciado el cambio hacia un nuevo ciclo político-institucional en Cataluña, con un fuerte impacto en España. Los factores principales han sido la imposición del Estado español con la aplicación del art. 155 de la Constitución, con el aval del PP, PSOE y Ciudadanos, los resultados de las elecciones del 21 de diciembre, con un empate representativo entre partidarios o no de la independencia, y la formación de un nuevo *Govern* con mayoría parlamentaria independentista aunque dependiente de la nueva realidad de poder y legitimidad social.

Cataluña: cambio de ciclo

Estas semanas estamos en una transición a la nueva etapa con un reajuste fáctico, institucional y de poder, simbólico y de legitimidad. Todavía la elección del *President* de la *Generalitat*, más o menos prolongada y conflictiva, es un momento transitorio y espectacular para cómo alumbrar la nueva etapa. La pugna jurídico-política sobre la investidura de Puigdemont (u otro candidato), con su escenificación mediática y su expresión simbólica y legitimadora, representa los últimos esfuerzos de cada parte por terminar de configurar el nuevo equilibrio de poder y legitimidad y las características de la relación de fuerzas y las estrategias de la nueva dinámica.

No hay una normalización completa, con el simple acatamiento de la legalidad vigente y el continuismo político e institucional del Estado, tal como desea el bloque partidario del art. 155, que quedó en minoría (43,5% frente al 55% en contra). En particular, el Estado autonómico actual aparece agotado. Ni tampoco, en el bloque independentista, hay una continuidad mecánica de la construcción de la República catalana (posición que también está en minoría, 47,5% frente al 52%); y salvo en el caso de la CUP, se inicia una adaptación o aplazamiento de su imposición unilateral inmediata buscando otras vías y ritmos.

⁴ Publicado en *Mientras Tanto* nº 165, 1 de febrero de 2018.

El *procés* ha culminado una fase sin poder llegar a la implementación de la independencia. El bloque independentista mantiene una amplia legitimidad social y la mayoría parlamentaria en Cataluña, pero se impone la evidencia de la insuficiencia de sus apoyos sociales y su capacidad de contrapoder (institucional, económico, de relaciones internacionales, popular...) para imponer un Estado independiente. Al mismo tiempo, las fuerzas *unionistas* han mostrado su poder estatal y se refuerzan, sobre todo, en el conjunto de España mediante el desarrollo de un nacionalismo españolista conservador, punitivo y centralizador.

Las élites dirigentes de ambos campos, con algunos reajustes internos (*Ciudadanos* frente al PP, *Junts per Catalunya* frente a ERC), representan los núcleos de poder neoliberal dominante y se retroalimentan mutuamente mediante el conflicto identitario de ambos nacionalismos. Ambos se enfrentan a la dinámica de cambio político de progreso, los procesos más amplios de democratización social y económica, así como a la dinámica de pertenencia comunitaria más abierta, democrática, mixta, plural e integradora tanto en Cataluña cuanto en España.

La confrontación identitaria y política entre ambos grupos dominantes busca su propia ventaja comparativa respecto del control y la gestión del poder institucional en su ámbito prioritario de influencia y en la configuración de su distribución en el conjunto del Estado. La competencia entre ambos núcleos de poder conlleva dos tendencias paralelas, complementarias y beneficiosas para ellos: 1) la hegemonía de la fracción de clase dominante en su respectivo espacio (justificado como objetivo de Estado o 'nacional', no de partido), así como el reajuste y el refuerzo de la representación política y su legitimidad pública en cada campo (en beneficio de *Ciudadanos*, con menor desgaste que el PP, y de *Junts per Catalunya*, utilizando el legitimismo de Puigdemont); 2) la subordinación de las fuerzas de cambio de cada ámbito en perjuicio de los intereses de las capas populares, junto con el bloqueo hacia una salida de progreso e inclusiva.

Esa dinámica de avivar el conflicto nacional y someter las demandas democráticas y socioeconómicas de progreso es funcional para los núcleos dirigentes de las derechas de ambos campos y el *establishment* (catalán, español y europeo). Por tanto, los intereses principales y las estrategias

dominantes derivadas del actual equilibrio de poder y legitimidad permiten aventurar la prolongación del conflicto territorial, con nuevas formas. Quizá, con menos intensidad conflictiva en la pugna por la reestructuración de poder, o sea con una relativa tregua respecto de las medidas más duras de cada parte: ruptura institucional unilateral o disolución autoritaria de la autonomía. Es decir, por un lado, sin construcción interpuesta de estructuras de Estado propio y con gestión autonómica ordinaria; y por otro lado, sin una regresión dura y centralizadora. Aunque, sí con un forcejeo político de fondo, continuados emplazamientos mutuos y una fuerte pugna simbólica y discursiva.

Por tanto, vamos hacia una nueva etapa, por un lado, con otro proceso de acumulación de fuerzas del bloque independentista más lenta y cautelosa y, por otro lado, un proceso de continuismo y contención estatal. De momento, con subordinación de la dirección socialista, es decir, sin reforma constitucional sustantiva o apertura a una opción dialogada e intermedia donde quepan las fuerzas alternativas. Esta polarización hegemónica por las derechas respectivas favorece el bloqueo de los cambios políticos y constitucionales necesarios, profundiza la brecha identitaria y la fractura socioeconómica y neutraliza la conveniente dinámica democrática e integradora en la cuestión (pluri)nacional y la transformadora e igualitaria en la cuestión social.

En resumen, el riesgo es un bloqueo duradero y a medio plazo de las fracturas sociales y nacionales de fondo, con intentos de desequilibrio hacia ambos lados nacionalistas, pero sin una salida extrema clara, bien de involución autoritaria en España, bien de escalada inmediata del conflicto secesionista. Aunque en ambos casos con riesgos de degradación de la democracia, pudrimiento de la convivencia en Cataluña y sin un horizonte de progreso social y económico y de integración solidaria y convivencia cívica. No es el futuro deseable y sería un fracaso histórico de ambas élites dominantes que podría arrastrar a mayores brechas sociales y autoritarismos.

En consecuencia, evitar esa involución social y ese conflicto identitario supone un nuevo reto para las fuerzas de cambio y progreso de ambos espacios: un proyecto de país de países, democrático y solidario y, al mismo tiempo, una agenda social transformadora de las graves condiciones materiales de las mayorías populares. Los dos aspectos van de la mano, son irresolubles

por separado y son fundamento de la democracia: la justicia social y la convivencia intercultural y nacional solidaria.

La apuesta debe ser por un patriotismo cívico, con un proyecto de una España plural y solidaria, con valores democrático-igualitarios y laicos. Y con una adaptación institucional a las nuevas dinámicas locales y mundiales, una importante capacidad regulatoria del Estado, especialmente en las relaciones económicas y fiscales, pero con la recomposición de la gobernanza y las cosoberanías institucionales, hacia arriba (Unión Europea) y hacia abajo (naciones, municipios...). Por tanto, un modelo social y (pluri)nacional de España y su diversidad constitutiva, diferenciado y superador de la configuración uninacional y conservadora dominante en nuestra historia y basado en la mejor tradición progresista, federativa y democrático-igualitaria.

Una tercera posición ante la polarización identitaria

La ciudadanía catalana, el pasado 21 de diciembre en la elección del *Parlament*, se ha polarizado en torno a la cuestión más candente: la independencia o no del Estado español, de forma inmediata y unilateral (República catalana). La campaña electoral se ha desarrollado dentro de una dinámica de confrontación tras el aval o refuerzo de dos objetivos básicos de las principales fuerzas contendientes: por un lado, continuar el 'proceso' independentista, partiendo de su incapacidad fáctica derivada por la insuficiente legitimidad social y el limitado poder (institucional, económico, internacional y popular) para su implementación y junto con el evidente fracaso de la simple Declaración Unilateral de Independencia-DUI; por otro lado, la aplicación por el Gobierno de Rajoy, con el apoyo de PP, PSOE y *Ciudadanos*, del art. 155 de la Constitución con el cese del *Govern* y la imposición de la legalidad uninacional, con la expectativa de las derechas españolas de un reequilibrio en la representación institucional y el refuerzo de su hegemonía política en España.

Respecto a la articulación política en un Estado propio o el continuismo autonómico (aun con el amago de una imprecisa reforma constitucional) se ha consolidado la división en Cataluña, prácticamente, por la mitad: 47,5% *independentista* frente al 43,5%, *unionista*. Los resultados reafirman la

conformación de dos bloques dominantes, que cabría denominar *conglomerados* dada su diversidad interna.

Pero ese relativo empate tiene algunos matices significativos y está condicionado por diversos factores, cuya explicación es necesaria para evaluar las tendencias sociopolíticas y electorales de fondo y las perspectivas de bloqueo o superación de esa relación de fuerzas.

En primer lugar, hay que destacar una tercera tendencia, más débil en estas elecciones autonómicas en que se quedó en el 7,5%, aunque más amplia en lo sociopolítico y cultural y, en particular, en las municipales y generales de 2015 en las que llegó a cerca del 25%, con más de novecientos mil votos. Es un campo intermedio, integrador, federativo y crítico con ambos polos identitarios, representado por los *Comunes* (y en algunos aspectos por el PSC). Tiene su base social y está arraigado en el tradicional catalanismo progresista de las izquierdas, solidario con la transformación social y política de España (y Europa), reforzado y renovado por la protesta social y democrática de estos últimos años frente a la gestión antisocial y antidemocrática de las élites poderosas (españolas, catalanas y europeas). Y pone el acento también en otro plano fundamental para las capas populares (clases trabajadoras y clases medias estancadas o descendentes): la agenda social para hacer frente a las graves consecuencias de la crisis socioeconómica y las políticas de austeridad.

A mi modo de ver, su doble posición en lo nacional y lo social es globalmente acertada pero insuficiente para contrarrestar la atracción de los dos grandes polos de poder y su dinámica de polarización identitaria. Su propuesta de superación de los dos bloques nacional-identitarios a través de una opción de pertenencia más inclusiva con un avance cívico e integrador es la más sensata para la gran mayoría ciudadana (en torno al 70%) que comparte rasgos identitarios o de pertenencia mixtos catalán-español o español-catalán. Conlleva valores democráticos y solidarios fundamentales: respeto y convivencia respecto de la diversidad cultural plurinacional interna y en relación con España, desarrollo del autogobierno y un procedimiento negociador y pactado, no para profundizar la división sino para encauzarla y resolverla democráticamente mediante un referéndum pactado. Los tres criterios están refrendados por una amplia mayoría social de más de dos

tercios de la población catalana pero no han cristalizado como factores determinantes en una opción electoral.

Los límites de ese discurso tienen que ver con la sobrevaloración de la solución procedimental (referéndum) de un conflicto entre otras dos partes ajenas (independentista y 'este' unionismo) que pretenden imponer su punto de vista. Igualmente, con el escaso desarrollo sustantivo de una tercera posición propia en los dos ámbitos, catalán y, especialmente, español, del debate nacional y social: la alternativa para otra Cataluña y el proyecto de país plural y social para otra España en el que encajar ambas.

Pero el mayor problema no es programático o que, tal como han dicho algunos críticos, su discurso haya sido ambiguo o equidistante. Su orientación general de combinar un proyecto integrador, solidario y democrático en lo nacional con un plan progresivo de cambio socioeconómico es la más adecuada para la disputa por la hegemonía político-institucional y cultural de ambas derechas –catalana y española- e imprescindible para el futuro de progreso solidario en Cataluña y España.

Insuficiente credibilidad fáctica

En segundo lugar, la dificultad más grave de la tercera posición era su insuficiente credibilidad fáctica o, si se quiere, su incapacidad comparativa de poder e instrumentación gubernativa para garantizar su implementación. Para llevar a cabo ese proyecto diferenciado, no estaban claros los instrumentos político-institucionales y democráticos (y menos los apoyos económicos e internacionales). Es decir, la consistencia y amplitud de las fuerzas sociopolíticas alternativas y sus alianzas para conseguir mayorías electorales, la dificultad de conformar ambos gobiernos de progreso y solidarios e implementar los cambios constitucionales y políticos necesarios; o sea, la capacidad para derrotar a las derechas y caminar hacia un cambio de ciclo progresista, teniendo en cuenta el giro del aparato del *Partido Socialista* hacia su pacto con PP-Ciudadanos y su cierre a una alternativa de cambio de progreso.

En los otros dos bloques hay fuerzas económicas e institucionales poderosas; también una gran legitimidad social, incluido una parte de las clases

trabajadoras. Solo se puede contraponer con una consistente y democrática fuerza político-social, todavía enraizada en gran parte de la juventud precarizada e indignada. Partía de una amplia simpatía popular por sus objetivos básicos, sociales y democráticos, e incluso por su talante mediador e inclusivo. Pero en su traducción electoral influyen las mediaciones político-institucionales, es decir, también pesa la operatividad de la prioridad inmediata en que se ha dividido la mayoría: reforzar la independencia o frenar la independencia.

Por tanto, existe la tercera posición: más autogobierno y más democracia en una España más justa y plural. Y, es el aspecto a destacar, la relevancia de la autonomía y la diferenciación del proyecto propio, aunque se compartan aspectos concretos de cada uno de los otros dos bloques y se reciban por ello las críticas del contrario. La delimitación principal no es dictadura (española) frente a democracia (catalana). El tablero no es binario, sino más complejo, con dos conflictos (democrático-social y democrático-identitario) y tres posiciones en cada polarización, diferentes en su articulación: un circo de dos pistas entrecruzadas con tres actores principales en cada una de ellas. Por ejemplo, estar contra la aplicación del art. 155 y las medidas autoritarias coincide con la posición del bloque independentista, y estar contra la independencia unilateral (DUI) coincide con la del bloque unionista. Priorizar la agenda social se enfrenta a su instrumentalización nacionalista o, directamente, al bloque causante de los poderosos que pugna por su marginación. Ello hace más difícil el discurso y la alternativa política, pero más realista, justa y potencialmente arraigada.

La cuestión es que esa propuesta superadora de ambos bloques, no se ha constituido como alternativa realista e inmediata y ese espacio identitario intermedio ha sufrido fugas hacia un campo u otro presionado por la dinámica de utilidad de la garantía principal: avanzar o frenar la independencia. Y ello no solo como respuesta a la problemática nacional, sino también, y así ha sido divulgado por los principales contendientes, como garantía para la mejora económica y la reforma social de las capas populares, cuestión en disputa por todos.

Combinar democracia social con patriotismo cívico

En tercer lugar, ambos discursos nacionalistas también prometían resolver la cuestión social. La vinculación a esta España o la República catalana, además de reportar mayor certidumbre identitaria y seguridad en los vínculos sociales respectivos, se presentaba como la mejor garantía de estabilidad y crecimiento económico y capacidad distributiva. Incluso *Ciudadanos*, escondiendo su plan neoliberal, llegaba a emplazar a los *Comunes* con admitir (parte) de su programa de reformas sociales a cambio del apoyo a la investidura de Arrimadas. Y las élites independentistas, a pesar de su responsabilidad en la consolidación de los recortes sociales, la precarización y las políticas neoliberales, aseguraban que sin el supuesto lastre de España y con un Estado independiente, las condiciones materiales de la población de Catalunya estarían entre las más avanzadas de Europa. Espejismo que se traducirá en frustración.

La cuestión no es que lo social estuviese ausente de la motivación y preocupación de la gente (estratificada por clases sociales) sino que en los discursos de los últimos años, tras el susto de la movilización social frente a la crisis socioeconómica y los recortes sociales, se subordinaba a la racionalidad económica dictada por la UE (y los mercados) y, cuando ha ido fallando, a la lógica de ambos nacionalismos y su polarización; primero las élites gobernantes catalanas, desde la Diada de 2012, y luego el PP y *Ciudadanos*, en respuesta al *procés* iniciado tras las elecciones autonómicas de 2015.

La cultura de izquierdas y el profundo proceso de protesta social, particularmente masivo en Cataluña, ha fortalecido una cultura de justicia social, pero sin una maduración político-electoral consistente para sortear las mediaciones de la última movilización y polarización nacionalista. Por tanto, la agenda social clara no ha sido capaz de tener suficiente credibilidad fáctica para su implementación frente a los poderosos de ambos campos (y de la UE). Y, especialmente, para interrelacionarla con una posición de identidad nacional propia e integradora.

La seguridad institucional de cada campo (Estado español o República catalana) atraía el voto útil en unas elecciones donde la cuestión central no era cambiar España (Gobierno y Congreso) o la gestión municipal (por ejemplo, el ayuntamiento de Barcelona), sino precisamente, el *Govern* de la *Generalitat* y

sus vínculos con el Estado Español... como construcción de país y también como mediación para la mejora socioeconómica (del país).

Por tanto, el hándicap para una estrategia nacional-integradora y social-progresista es que el proceso de confrontación nacional de los dos polos dominantes subordina lo social, favorece la hegemonía de ambas derechas y el continuismo neoliberal y regresivo y perjudica la agenda social real y la convivencia inter-identitaria. O sea, para activar y dar credibilidad a una opción democrática y popular es necesario combinar el giro social en confrontación con los poderosos con la tercera opción en la pertenencia nacional: superación de la brecha identitaria, profundización del autogobierno y resolución democrática y pactada del conflicto nacional, irresoluble por la imposición autoritaria o la unilateralidad. Y con mayor apoyo cívico y democrático, contrapesar los déficits de poder económico e institucional respecto de los otros dos bloques de poder.

No se trata de abandonar el espacio con una posición propia en el tema territorial, aunque hoy se esté a la defensiva en los dos ámbitos, España y Cataluña. Se trata, frente a los nacionalismos excluyentes e insolidarios, de combinar la democracia social y económica con un patriotismo cívico, plural y solidario, basado en la experiencia y los vínculos sociales compartidos e interrelacionado con distintos niveles y combinaciones de pertenencia e identidades colectivas.

Un proyecto de país (de países), como España, debe dar respuesta clara y democrática a dos cuestiones candentes: la social y la territorial. Dicho de otra forma, un cambio democrático y de progreso en España sería mucho más difícil sin las fuerzas progresistas de Cataluña; y difícilmente se va a construir una Cataluña progresista y más autónoma sin el desalojo institucional de las derechas españolas y la hegemonía política de las fuerzas progresistas (y su avance en Europa). La España y la Cataluña neoliberales y homogéneas en su composición nacional no se corresponden a la realidad y las necesidades de las mayorías sociales. Están agotadas y su retroalimentación mutua con el pulso identitario y su desprecio por la desigualdad social profundizan las fracturas sociales y la cohesión cívica. Necesitan recambio, un nuevo patriotismo cívico democrático-igualitario y solidario, y ese es el desafío del cambio social y político.

En consecuencia, la plasmación gubernamental de un gobierno tripartito progresista o de izquierdas, entre *En Común Podem* (7,5%), PSC (13,9%) y ERC (21,4%) -incluso añadiendo la CUP (4,5%)- no estaba madura, política y numéricamente. No obstante, haciendo ahora abstracción de sus ambivalencias, esas fuerzas nominalmente de izquierdas han conseguido una representatividad importante: 47,2% (bajando algo desde el 50,1% de las primeras elecciones autonómicas en el año 1980 y modificando su composición) frente al 51,2% de las derechas. Ello no supone que no sea la principal alternativa institucional para abordar mejor el doble conflicto, social y nacional, o que la dinámica de movilización popular y los resultados en las próximas elecciones municipales y generales no modifiquen la relación de fuerzas, cuestionando los actuales equilibrios y se pueda avanzar hacia ese cambio de hegemonía.

En todo caso, hace falta concretar sus difíciles condiciones para superarlas con un nuevo compromiso transversal en lo nacional y firme en lo social. Pero superando la experiencia del Tripartito, en otro contexto, con un proyecto de reforma político-territorial, democrática y social con un Gobierno de progreso en España y otro en Cataluña. Para ello es imprescindible un mayor peso de *Catalunya en comú Podem*, al menos similar a los otros dos partidos, así como la ruptura del PSC (y PSOE) de sus compromisos con las derechas españolas y la desvinculación de ERC de su dependencia de *Junts per Catalunya* y el exclusivismo nacionalista. Mucho camino por andar.

No obstante, existe una dificultad adicional. En España, el giro de la dirección socialista hacia su pacto con las derechas y el aislamiento de las fuerzas del cambio –Unidos Podemos y sus aliados de confluencias y candidaturas municipalistas- neutraliza las expectativas unitarias y restringe las opciones de un cambio institucional de progreso. Aunque haya un reequilibrio en la representación política de las derechas españolas (*Ciudadanos* en perjuicio del PP), con la subordinación de la dirección del PSOE, el plan de los poderes fácticos pretende un cierre normalizador centralizador y continuista de la gestión socioeconómica liberal y regresiva, así como imponer una legalidad constitucional restrictiva y el continuismo institucional con insuficientes medidas regeneradoras.

La dirección socialista adquiere una grave responsabilidad: tapar en falso la crisis social y la crisis territorial, hacer más prolongado y difícil el cambio institucional y distanciarse de la parte más dinámica de la sociedad, la juventud precarizada y las capas populares urbanas. Así, asumiría un costo histórico (adicional a la crisis de la socialdemocracia por su ambivalencia) por asociarse o mirar para otro lado respecto de una respuesta fallida a la crisis social, democrático-institucional y de valores de las viejas élites gobernantes (española y catalana, con dos de los partidos más corruptos de Europa –PP y la antigua Convergencia), así como del ascendente (neoliberal y centralizador) *Ciudadanos*.

Cambio de hegemonía con un proyecto propio

En cuarto lugar, la superación de la brecha identitaria en Cataluña entre dos espacios políticos y sociales de dimensión similar, así como de la confrontación con y del Estado español solo es posible con el cambio de hegemonía política e institucional en ambos ámbitos. Se trata de desalojar a las derechas respectivas del poder gubernamental, con una alternativa democrática e integradora en lo (pluri)nacional y un plan progresivo en lo social. Dicho de otra forma, es necesaria otra España y otra Cataluña para que en el interior de ambas y entre ellas se entiendan las mayorías sociales tras un proyecto de país (de países) más justo, inclusivo y democrático. La unidad con la actual España liberal-conservadora y reaccionaria es difícilmente aceptable para la mitad de los catalanes; su imposición autoritaria tampoco es aceptable para muchos españoles partidarios de una solución democrática y pactada. El cambio político en España es una imperiosa necesidad; pero sin las fuerzas progresistas de Cataluña sería más difícil. Y al revés.

El proceso independentista se ha construido sobre dos premisas falsas. Por un lado, su suficiencia democrática para ser hegemónico en Cataluña y su capacidad de poder para vencer al Estado español, que irían inexorablemente en aumento. Por otro lado, la promesa de que una República catalana, sin el supuesto lastre de España, resolvería mejor los déficits socioeconómicos de su población. Eso sí, con una calculada ambigüedad de su modelo social que apenas esconde la continuidad y el refuerzo de las políticas neoliberales que

consolidan la desigualdad social, la precariedad laboral y las políticas públicas regresivas de sus actuales élites neoliberales. Además, sin cuestionar el marco del consenso liberal-conservador y restrictivo europeo y con la subordinación del supuesto talante socialdemócrata de ERC y anticapitalista de la CUP.

El primer aspecto ha quedado en evidencia ante el actual baño de realidad: el bloque nacionalista-independentista no llega a la mitad de legitimidad ciudadana (47,5%), con un ligero descenso desde 2012 (49,15%, incluida *Solidaritat Catalana per la Independencia*) y 2015 (47,74%). La expectativa de algunos de sus líderes de llegar a una mayoría más clara, en torno al 60%, que les reportara una holgada garantía democrática no se ha cumplido, aunque no dejan de revalorizarla y embellecerla, haciendo solo hincapié en la precaria mayoría parlamentaria. Su horizonte sigue siendo ése, pero es difícil su realización, dada la estructura sociopolítica, cultural y demográfica de Cataluña, aunque a su favor estarían los posibles errores estratégicos, autoritarios y regresivos, del Estado español. Su pronóstico sólo es posible ante un cambio de ese campo mixto catalanista-español que representan los *Comunes* (y parte del PSC e incluso algunos votantes de *Ciudadanos*), aunque también necesitan de dilución de su agenda social. Es la dinámica de absorción o subordinación hacia el plan independentista conseguida en una parte del PSC y de *Podem*, difícil de ampliar. La obsesión independentista por ello genera una presión prepotente sobre este tercer espacio que roza lo punitivo.

Pero lo que se ha demostrado (sin demasiado reconocimiento público de sus dirigentes) es que desde el punto de vista fáctico o, lo que es lo mismo, de la capacidad operativa de las estructuras de poder propias o su conversión desde las instituciones actuales catalanas como los *mossos* y la estructura jurídico-administrativa, no han sido capaces de construir un contrapoder institucional o popular capaz de imponer la República catalana. Ello por mucho que haya algunos líderes que todavía mantengan la ficción de su existencia y la validez jurídica y política de su pasada declaración unilateral de independencia en el *Parlament*.

En ese sentido, la fuerza político-institucional del Estado se ha impuesto, aunque siga vigente el conflicto de poder y el empate de legitimidad que se expresan actualmente en la conformación del *Govern* de la *Generalitat* y su

President. Así, aunque en el bloque independentista (en ERC y sectores del PDeCAT) haya cierto acatamiento a la legalidad vigente y realismo en la percepción de su debilidad fáctica y democrática es difícil la vuelta a la normalidad institucional. Permanece el conflicto de fondo y en su interior.

Se puede configurar un *Govern* independentista que siga gestionando la *Generalitat* con su doble lógica: acumular fuerzas –legitimadoras y fácticas- en otra fase transitoria y de forcejeo negociador ventajoso y preparatorio hacia la independencia; consolidar la hegemonía institucional y de gestión de las políticas públicas, culturales y económicas de las actuales élites de orientación neoliberal con subordinación de la agenda social beneficiosa para las capas populares.

Ello significa que la nueva estrategia independentista, aun sin renunciar a la independencia debe articular un nuevo reajuste de los planes, instrumentos y ritmos. Es lo que se está ventilando en la actual conformación y legitimidad del *Govern* y los equilibrios entre ERC y *Junts per Catalunya* y el papel incierto de Puigdemont.

Por terminar con una metáfora futbolística. Ante un choque Barça / Real Madrid (o Espanyol) no se trata de ser neutral o ser el árbitro regulador. Independientemente de la afinidad respectiva se trata de construir otro equipo y participar en otro partido (otra liga), el de la selección española popular y diversa (en la que se incluye lo mejor de ambos y otros equipos) frente al equipo (liberal-conservador) de los poderosos (europeo, español y catalán) dirigido por el bloque de poder comandado por Merkel (junto con Macron y Schulz, y Rajoy, Rivera y Puigdemont) y presionado por los populismos xenófobos y autoritarios de la derecha extrema europea. Ése es el tablero y los polos principales del conflicto.

En definitiva, es necesario un plan sustantivo superador del conflicto identitario y la subordinación del cambio de progreso, con una respuesta democrático popular, (pluri)nacional-integradora y social-transformadora. Un proyecto igualitario, pluralista y solidario de modernización socioeconómica, democratización político-institucional y renovación ética y cultural. El horizonte debe ser el cambio de hegemonía política en España, en las elecciones generales de 2020, con el desalojo de las derechas, el distanciamiento de la dirección socialista respecto de su pacto de gobernabilidad con ellas y el

fortalecimiento de la dinámica del cambio social y político progresista. Ello permitirá transformar las dinámicas sociopolíticas y el contenido sustantivo de la actual pugna institucional: el tablero, los polos y los motivos de referencia. Posibilitará la superación del bloqueo derivado de la polarización de las dos élites dominantes en el conflicto identitario con intereses hegemónicos complementarios frente a una alternativa democrática y de progreso diferenciada de las derechas neoliberales de ambos campos.

Por tanto, es imprescindible el fortalecimiento de una tercera posición integradora en la conformación territorial: otra Cataluña inclusiva en una España nueva y diversa. Y, al mismo tiempo, fortalecer un polo popular con una agenda social frente a las políticas regresivas y el modelo predominante de precariedad laboral y desigualdad social. La combinación de ambos objetivos nacionales-solidarios y democráticos-igualitarios pasa por la capacidad de articulación de *En Comú Podem* y la difícil y necesaria colaboración del PSC y ERC. Ello supone aspirar a un cambio del sistema de alianzas y las prioridades políticas frente a las derechas, más acordes con lo que la gente de Cataluña y España necesita.

5. Nueva marea por la igualdad⁵

El día 8 de marzo fue un éxito del movimiento feminista, con la participación masiva en las movilizaciones. Millones de mujeres, especialmente jóvenes, participaron, de una u otra forma, en las manifestaciones públicas, paros y concentraciones laborales y estudiantiles, así como en actividades reivindicativas y culturales. Han estado acompañadas por la solidaridad de muchos hombres y el reconocimiento y apoyo de un amplio tejido asociativo, sindical, mediático y político.

Se ha conformado una nueva marea social plenamente justificada frente a la discriminación de género, el acoso machista, la brecha salarial y la desigualdad social y laboral, y por una igualdad fuerte y efectiva. España, y particularmente Madrid, ha sido referencia mundial por su capacidad expresiva y la claridad y contundencia de sus mensajes. Es un hecho singular cuyo sentido sociocultural y político tiene especial relevancia, más en la actual coyuntura.

Es una protesta democrática y cívica que busca la emancipación femenina. Refleja un cambio de mentalidades y relaciones interpersonales en la sociedad, un proceso de empoderamiento individual y colectivo en gran parte de mujeres y una voluntad transformadora. Contribuye a cambiar el papel y la relación de los distintos actores sociales y políticos, de los movimientos sociales o la ciudadanía crítica respecto de las representaciones políticas. Modifica las prioridades de la agenda política: hay que dar respuesta a esas demandas.

Por tanto, desde la autonomía de su participación cívica, esta marea feminista reafirma el perfil social del cambio en un contexto difícil y complicado con fuertes tendencias político-económicas regresivas, dinámicas sociopolíticas y culturales reaccionarias, bloqueo institucional de las derechas, así como división y relativa impotencia de las fuerzas progresistas para implementar un cambio político sustantivo. Tres hechos encadenados de este contexto explican esta amplia participación ciudadana y dan sentido y proyección a la reafirmación feminista por la igualdad.

⁵ Editado en *Público*, 14 de marzo de 2018.

Primero, la persistencia de la desigualdad, la discriminación y la violencia hacia las mujeres, junto con el insuficiente reconocimiento público de su aportación, así como con mayores dificultades y desventajas comparativas en su doble condición de mujeres y trabajadoras (presentes y futuras). No hace falta ilustrarlo. Últimamente es el rasgo con mayor visibilidad que contrasta con el incremento de la percepción individual y colectiva de su injusticia conformando una actitud transformadora igualitaria y liberadora.

Segundo, el límite de las políticas públicas y los mecanismos institucionales que teóricamente favorecen la igualdad de género, así como los recortes sociales y de derechos que perjudican especialmente a las mujeres.

Por un lado, el carácter limitado o solo retórico, sin suficientes presupuestos y recursos, de algunas leyes como la Ley de igualdad, la de conciliación y la normativa contra la violencia machista o de género, esta última casi solo centrada en reforzar su carácter punitivo en detrimento de una estrategia realmente 'integral' para erradicarla. Están agotadas y necesitan una nueva y real implementación, superando su cortedad aplicativa.

Por otro lado, las deficiencias de los sistemas públicos de atención a las personas y los cuidados que suelen recaer en las mujeres, con desventajas comparativas y adjudicándoles un mayor esfuerzo y carga de trabajo, no reconocidos, en esa actividad reproductiva, incluida la maternidad y la crianza: escuelas infantiles de cero a tres años, ayuda a la dependencia, mejora de los servicios públicos, paridad con los hombres en la distribución y conciliación de las tareas domésticas y profesionales...

Además, la consolidación de las reformas laborales regresivas, la devaluación salarial, la precariedad de las trayectorias laborales y el mercado de trabajo y las dificultades de inserción profesional en un empleo decente, en el actual contexto de las políticas de austeridad, perjudican más a las mujeres, particularmente de las capas populares (clases trabajadoras y clases medias estancadas o en retroceso).

En consecuencia, **se ha configurado una exigencia feminista de reformas efectivas contra la desigualdad de género en los distintos ámbitos de las relaciones interpersonales, las garantías institucionales de**

un Estado de bienestar más avanzado, la democratización política y las reformas progresistas económico-laborales bajo el objetivo de la igualdad real. Muchas reivindicaciones pueden ser compartidas con varones frente a las estrategias de subordinación y segmentación del poder establecido, como, por ejemplo, la intolerable precariedad laboral juvenil; pero también hay que señalar el sesgo y la especificidad de género. Al mismo tiempo, denotan la interacción de lo personal, lo grupal y lo político, así como su impacto institucional y cultural.

Impacto feminista en el cambio político

Tercero, esta amplia expresión cívica feminista (junto con cierta reactivación popular y movilizaciones significativas como la de personas pensionistas) se produce ante el bloqueo político del cambio derivado del reforzamiento institucional y mediático de las derechas, incluso con su prepotencia autoritaria y su desprecio machista (solo camuflado ante este éxito movilizador), el continuismo hegemónico del bloque liberal conservador en las instituciones europeas y la división de las fuerzas progresistas incapaces de configurar una alternativa política unitaria y creíble.

Se ha terminado un prolongado ciclo electoral que había despertado ciertas esperanzas transformadoras por la vía de la delegación representativa y su acción en las instituciones. Se han consolidado las fuerzas del cambio y su gestión política en algunos grandes ayuntamientos, paliando situaciones sociales graves. Pero, sin claras mayorías o sólidas alianzas institucionales y sin un cambio gubernamental (y europeo), con una fuerte base de apoyo ciudadano, el impacto del cambio para las mayorías sociales y sus condiciones de vida es limitado e insuficiente ante la prolongación de la crisis social y económica y las políticas neoliberales dominantes.

Es el marco y contrapunto para la inquietud de mujeres activas que late en la necesidad de una movilización social general que desbloquee la situación e impulse reformas igualitarias efectivas. La oportunidad de cambio político (moción de censura) se desvanece, se acumulan fuerzas y discursos progresistas pero la expectativa se aplaza hacia el nuevo ciclo electoral por venir. Sin embargo, los factores de malestar de fondo, feminista y popular,

persisten y no esperan para expresarse en el campo social (dejo al margen el conflicto territorial). **Este proceso participativo tiene un valor propio como activación social y refuerzo de la ciudadanía crítica, con un perfil feminista fundamental y un impacto directo en las relaciones sociales y políticas. Configura una necesidad y un complemento sustancial para el cambio político e institucional y su carácter.**

Se ha reforzado, precisamente, ante un impasse a medio plazo en las expectativas transformadoras sin un horizonte claro de probabilidad de avances sociales y democráticos. La alternativa inmediata de un cambio gubernamental de progreso ha sido rechazada por el Partido Socialista que renuncia a forjar un acuerdo progresista con Unidos Podemos y convergencias. Tras un breve paréntesis del nuevo PSOE su dirección retoma sus preferencias por la operación de gran centro de la mano de Ciudadanos, su responsabilidad de Estado y el consenso europeo, así como el distanciamiento y la marginación de Unidos Podemos.

Pero, aunque no todo está dicho, con esa dinámica se restringe la capacidad de cambio sustantivo en el próximo ciclo electoral del año 2019 (elecciones municipales y autonómicas) y 2020 (generales), aun cuando las fuerzas del cambio tengan un buen resultado, ganen en algunos ámbitos en términos relativos y se alcancen algunos acuerdos concretos. En ese sentido y con esas coordenadas su legítima aspiración a 'ganar' no se traduce necesariamente en un cambio institucional suficiente para implementar un giro social progresista y democratizador de alcance general. Sería insuficiente para modificar sustancialmente la dinámica socioeconómica, política... y de las relaciones machistas y patriarcales. Es la sensación feminista que avala la idea de coger el presente y el futuro en las propias manos. Por tanto, con esa inercia, el cambio real de políticas públicas y gestión institucional es incierto, y desactiva las expectativas e ilusiones ciudadanas de una transformación gubernamental de progreso.

En consecuencia, este fenómeno de activación popular, además de expresar una exigencia de cambio inmediato y conformar mayores capacidades colectivas de influencia social y política, es una variable fundamental para modificar los campos electorales, fortalecer la dinámica de cambio político real, condicionar al Partido Socialista hacia una alianza de progreso y configurar una

alternativa institucional firme y creíble con esa orientación de fondo de la igualdad y la participación cívica.

Existe una pluralidad de corrientes ideológicas y culturales. Hay, al menos, dos grandes corrientes feministas: una de corte liberal, más formalista y adaptable a las actuales estructuras de poder, y otra de orientación igualitaria o progresista que enlaza con una actitud transformadora. Ambas tienen un fuerte componente cultural, simbólico e identitario. Y también una gran repercusión política-institucional, a veces de signo distinto o contrapuesto.

Un movimiento social debe ser autónomo de cualquier dependencia partidista y, en ese sentido, transversal a las distintas pertenencias políticas; es decir, su identificación y su cohesión se producen en torno a objetivos propios y compartidos en esa esfera de su función social inmediata. No obstante, ello no puede llevar a negar el impacto o el sentido político de su actividad. Es lo que pretende ahora las derechas del PP y Ciudadanos y su aparato mediático al querer desactivar (despolitizar) la dimensión crítica y transformadora de una acción sustantiva por la igualdad real frente a las resistencias del poder establecido que aparece difuminado.

En definitiva, el movimiento feminista (y sus aliados), dentro de su diversidad, tiene, a mi modo de ver, **dos retos por delante: consolidarse como movimiento social autónomo, como marea cívica, con su articulación organizativa y sus referentes reivindicativos y discursivos; contribuir, desde sus objetivos transformadores, compartidos por otros movimientos sociales y agentes sociopolíticos, al cambio político e institucional de progreso tras ese gran valor de la igualdad.**

6. Cambio... ¿dentro de un orden?⁶

En torno a la entrevista a I. Errejón: “La reforma más importante es introducir orden”

Iñigo Errejón es uno de los dirigentes políticos e intelectuales progresistas más sugerentes de este momento. Sus aportaciones son siempre un motivo de reflexión, especialmente en esta situación de bloqueo político y necesidad de una clarificación discursiva y estratégica para el cambio político y después de un año de su alejamiento de la primera línea expresiva. Más allá de una valoración más general y detallada, estos son solo unos comentarios rápidos a cuatro de sus ideas expresadas en la citada entrevista editada en diario *Público* (4-4-2018), en relación con su propuesta de orden, la pertenencia nacional y la soberanía popular, el sentido del populismo y la hegemonía institucional.

En primer lugar, ¿qué sentido tiene apropiarse (y resignificar) significantes utilizados por la derecha con un significado definido como ORDEN frente a desorden neoliberal? Está bien intentar adjudicar el desorden (popular, social y territorial) al poder neoliberal o conservador y exigir protección pública y seguridad vital (orden) para la gente común y sus vidas. El problema es que ese significante está asimilado cultural y políticamente a las derechas en cuanto reflejo y gestión de autoridad institucional, élites y estructuras sociales dominantes con el resultado de la subordinación popular (ordenada) e impuesta bajo el imperio de la actual hegemonía institucional liberal-conservadora.

Por tanto, cuando menos, es una referencia ambivalente, de doble sentido, si no se especifica bien su carácter y su función en este contexto determinado. Como bien se dice, hay que definir un horizonte claro con un contenido de certidumbre vital para la mayoría social. Pero ello supone precisar el modelo socioeconómico e institucional, los objetivos estratégicos y el proceso relacional, es decir, el significado. Lo podemos definir siguiendo el programa político de las fuerzas del cambio para esta legislatura, en el que el autor tuvo un papel destacado: cambio democrático-igualitario y transformación progresista del sistema económico-institucional dominante que alumbre una

⁶ Editado en *Público*, 7 de abril de 2018.

Frente a la crisis social y nacional. ¿QUÉ PAÍS?

democracia social y económica, más justa, solidaria... y segura para la sociedad. Habría que desarrollar más su sentido político-cultural de avance cívico: la idea fuerza de cambio (de progreso) frente a continuismo (liberal-conservador) (y más allá del slogan "Sonrisa de país").

En el texto no está claro si la prioridad por el orden subsume, desplaza o complementa esas ideas fuerza de cambio de progreso y democracia social, aunque en el ámbito ideológico-cultural aparece como una nueva alternativa. En todo caso, habría que precisar qué condiciones hay que ordenar (o regular), para quién se reclama (los de abajo y su precariedad) y frente a quién (privilegiados de arriba y su orden y dominación), así como cuándo y para qué (para el proceso de activación popular y conquista institucional y/o gestión gubernativa); son aspectos que se citan pero que quedan en un segundo plano.

En la tradición política convencional se han utilizado otras expresiones para definir horizontes de una sociedad más justa e integrada, que son menos problemáticas: (socioliberales) cohesión social, seguridad social, bienestar público u orden (garantías) democrático, así como una 'idea fuerte de bien común' (aristotélico) o el 'ideal republicano' (ilustrado) (que cita); por no utilizar la tradición democrática de las izquierdas y su modelo de sociedad: justicia social, democracia social avanzada, Estado de bienestar, derechos y garantías sociales y laborales, sociedad libre e igualitaria...

Existen también otras referencias ambivalentes como estabilidad o consenso político muy valoradas mediáticamente, pero ligadas al concepto de orden hegemónico del poder establecido y la supuesta neutralidad institucional, y no siempre encaminadas al bienestar social.

Además, la palabra orden (nuevo) está asociada históricamente a la doctrina nazi-fascista (frente al desorden democrático-liberal y de las izquierdas de entreguerras) y a los regímenes autoritarios o conservadores. Y la está rescatando la nueva derecha extrema europea.

Estamos ante una fuerte pugna político-cultural. La necesidad de un proyecto alternativo definido, de un modelo socioeconómico e institucional diferenciado del bloque de poder dominante, es clara. Pero los esfuerzos de la resignificación de orden pueden ser baldíos o contraproducentes.

Es verdad que la gente necesita orden (seguridad) en sus vidas, no un sistema económico e institucional autoritario o una normalización política

basados en el orden hegemónico actual, es decir, obediente al poder establecido y sin oposición cívica o conflicto sociopolítico. O sea, es imprescindible una fuerte participación ciudadana, el respeto a la diversidad y el pluralismo y una democracia fuerte que garanticen el bien común o el bienestar social de las mayorías populares. Pero antes que la continuidad del actual orden (institucional y económico-laboral), se necesita cambio (social y político).

La consecuencia de priorizar el orden, aunque sea solo en el campo cultural, es que se difumina el objetivo y la dinámica del 'cambio'... del orden institucional real existente por un nuevo reequilibrio o transformación del poder... a un nuevo sistema más justo, libre... y 'seguro'. La realidad del poder y la dominación es dual. No vale una expresión satisfactoria para ambas partes en conflicto. Su significado está vinculado socialmente a la experiencia popular de su sentido político para la mayoría ciudadana, reaccionario o de progreso.

La tarea política alternativa, por tanto, sería construir una dinámica y experiencia de cambio, una práctica relacional confrontada con las élites dominantes que generan subordinación, desigualdad, explotación y precariedad, es decir, destrucción, conflicto, desarraigo o desorden popular. Y, además, dotarse de una justificación discursiva y una 'nominación' clarificadora de un nuevo modelo social. Sin que el motor constructivo sea un 'horizonte' ambiguo, sino una experiencia compartida que avance hacia un objetivo con un significado claro para los intereses y demandas cívicas y un sentido democrático-igualitario.

La segunda idea problemática es asociar lo populista con la dinámica hacia la PERTENENCIA NACIONAL, no de clase, popular o cívica que aparecen en segundo plano. Inicialmente, construir pueblo frente a las élites es una polarización democrático-popular anti-oligárquica similar a la lucha de clases o el conflicto social. Ahora se pasa de esa idea previa hacia una posición de pueblo-nación, transversal entre las capas populares con los grupos de poder (de la nación) y sin adversarios.

Frente al individualismo extremo, el desarraigo social y la subordinación en las estructuras sociales tradicionales es imprescindible reforzar los vínculos sociales, el sentido de pertenencia e identidad colectiva y el talante democrático e igualitario. Los lazos comunitarios no necesariamente derivan

hacia dinámicas nacionalistas. No obstante, en el texto el momento populista se justifica por el ascenso de los movimientos nacionales. Y la alternativa es la soberanía popular en una Europa renovada (y ecológica) basada en un New Deal (nuevo trato o contrato social).

Aquí las respuestas se quedan cortas respecto a dos cuestiones cruciales. Una sobre las tendencias principales: la cogobernanza o integración solidaria y democrática en la construcción de la UE, embarcada en la recomposición de una nueva élite dominante europea (bajo hegemonía alemana y de las derechas) con las tensiones, acomodados y reajustes inevitables, pero con el horizonte de una democracia débil y poco social y solidaria. Otra sobre la alternativa de una democracia social avanzada o, como mínimo, de una Europa más justa, solidaria, democrática e integrada, superadora de los nacionalismos excluyentes y del cosmopolitismo (o europeísmo) ingenuo y subordinado al núcleo de poder liberal-conservador.

Pero, desde el punto de vista fáctico, ¿la realidad y la tendencia dominante es el fantasma del populismo? Por otro lado, hay también un embellecimiento de la construcción nacional: “Hay algo potencialmente popular y democrático en la reunificación de las pertenencias nacionales” ... aunque es fundamental el matiz 2): ‘instituciones para preservar el pluralismo político’.

En tercer lugar, está bien diferenciar y definir la pugna entre dos populismos distintos, aunque Errejón resalta su diferenciación por su esencialismo o constructivismo, no tanto por su sentido político: reaccionario y democrático-progresista. Podríamos hablar de populismo de derechas y de izquierdas (Ch. Mouffe), o de populismo de clases dominantes y clases dominadas (E. Laclau); aunque también existen populismos centristas-liberales, nacionalistas (o estatistas) y de extrema derecha (o autoritarios) y extrema izquierda (o soviéticos) ... Así, el populismo no es una ideología ni una orientación política sustantiva definida, y es compatible con (casi) todas ellas.

El POPULISMO es, sobre todo, una lógica política de polarización, sin definir el sentido y la estrategia política de los dos campos contrapuestos. Por ello debe ir acompañado de una orientación estratégica, una vinculación sociopolítica y una dinámica relacional específicas. Así, hay que hablar de populismos en plural, muchos contradictorios entre sí por su carácter sustantivo. Esa lógica de confrontación de dos actores –nosotros/ellos-, sin

precisar su sentido político (progresista o reaccionario) no debería ser el eje principal clasificatorio de las tendencias político-sociales. El incentivo es dar por supuesto que es la tendencia ganadora en la historia y que refuerza la representación de ese campo. Pero es débil para legitimar un liderazgo o una teoría transformadora por lo sustancial, su carácter democrático-igualitario.

No obstante, en cuarto lugar, aun con ese elemento parcial de recomposición de la representación política, que no del poder económico, el interrogante es el presente y futuro inmediato de la HEGEMONÍA institucional y política. Pero la tendencia principal en Europa no es la desaparición o la posición subalterna de la representación 'tradicional' liberal-conservadora, con los nuevos apoyos centristas o socioliberales, y su pérdida de hegemonía institucional a favor de otros actores (populistas, de un tipo u otro). Y la respuesta (parece) es que no, al menos a corto plazo y aunque se difumine la continuidad del poder establecido y haya reequilibrios diversos.

Por tanto, sí existe una amplia deslegitimación popular de las clases políticas dominantes, incluso del propio proyecto europeo, y es evidente su necesaria recomposición apelando al pueblo (y/o la nación), o sea su relegitimación; pero el núcleo dominante de la UE y su proyecto neoliberal se están reforzando.

Para seguir con el principio de realidad, la dinámica principal parece que va más bien por la consolidación del bloque de poder establecido europeo y su representación política en torno a la tradicional y renovada élite dirigente: Merkel -hegemónica- con acompañamiento –negociado- de SPD y Macron; es decir el gran centroderecha y la subordinación nacional y de clase del resto de élites periféricas y del sur, incluido la socialdemocracia, con su ambivalencia ante su encrucijada. No obstante, la mayor subordinación y contención es hacia sus mayorías ciudadanas, sus demandas y las fuerzas democráticas y de progreso. Y ello aun con la presión, por un lado, del populismo de derecha extrema, las dinámicas disgregadoras, autoritarias, xenófobas y nacionalistas, que pugnan por un reacomodo, y, por otro lado, de la necesaria activación del bloque progresista, alternativo o de izquierdas que necesita un horizonte (un modelo y una estrategia) más preciso y sólido.

Las fuerzas del cambio son insuficientes hoy para garantizar una alterativa institucional, especialmente gubernamental y europea. Hay que

Frente a la crisis social y nacional. ¿QUÉ PAÍS?

transformar la situación masiva de desigualdad y precariedad y evitar la consolidación de la involución social y democrática. La alternativa de progreso y cambio democrático exige firmeza y cooperación para desplazar la hegemonía institucional de las derechas. Pero dos no cooperan si uno no quiere, o impide un acuerdo equilibrado o exige un sometimiento a la otra parte. Es uno de los nudos a desatar y el dilema de la dirección socialista: gran centro continuista (naranja) o acuerdo de cambio de progreso (morado). El cambio debe ser sustantivo, aunque sea limitado y lento. Y puede desarrollarse mejor en el ámbito municipal y autonómico. El avance progresista en ellos será la condición para abordar mejor la prueba de fuego de cambio gubernamental. Bienvenido sea el comienzo de este debate estratégico.

7. ¿Qué salida de la crisis?⁷

El vuelco dado por la moción de censura exitosa a Mariano Rajoy y el Gobierno del PP, encabezada por Pedro Sánchez y el Partido Socialista, con el apoyo de Unidos Podemos y sus convergencias y demás fuerzas progresistas, abre un nuevo horizonte para avanzar en la regeneración democrática, una imprescindible agenda social común y la reconducción dialogada del conflicto territorial. Una oportunidad para consolidar el necesario cambio social y político de progreso. Pero veamos el diagnóstico y los retos para desarrollar, particularmente, una agenda social sustantiva que aborde las graves consecuencias de la crisis social y económica, así como revertir las políticas de ajuste y austeridad aplicadas por la derecha.

1. ¿Hacia dónde vamos? El reto de la necesaria agenda social

La crisis socioeconómica tiene múltiples facetas. Más si le añadimos la crisis política y territorial, así como las percepciones y actitudes sociopolíticas de sociedad y en particular de las capas populares. Hay tendencias contradictorias. Por una parte, desde hace varios años se ha terminado la recesión económica y hay crecimiento económico y del empleo. Por otra parte, se consolidan la precariedad laboral y la desigualdad social, mientras persisten un paro masivo, la devaluación salarial, los efectos de los recortes sociales y laborales, la mayor subordinación de las clases trabajadoras respecto del poder económico-empresarial impuesto en las reformas laborales, así como el debilitamiento de la capacidad contractual del sindicalismo.

Se produce una pugna sociopolítica y discursiva en torno a qué tipo de salida de la crisis se está produciendo, qué horizonte de relaciones laborales y de empleo se están generando, qué modelo social se está instaurando, quiénes salen de la crisis económica y quiénes no. Las percepciones de la sociedad y las dinámicas laborales y sociopolíticas son contrapuestas. Es preciso el rigor analítico e interpretativo para clarificar una posición normativa.

⁷ Comunicación académica presentada al **IV Encuentro del Comité de Investigación de Sociología del Trabajo** de la *Federación Española de Sociología-FES* (Universidad Autónoma de Barcelona, junio de 2018). Versión publicada en *Pensamiento Crítico*, junio de 2018.

Continuamos en el marco de una profunda crisis social y económica, aun con realidades contradictorias. Así lo afirma el 54% de la población -y el 62% de los votantes del PSOE y el 69% de los de Unidos Podemos-, según *Metroscopia* (15-5-2018), que considera que la crisis económica “No ha sido superada y no se superará hasta dentro de muchos años”; el 26% opina que “No ha sido superada, pero se superará dentro de poco” y el 18% que “Ha sido superada”.

Además, existe una persistente crisis política, con amplia desconfianza cívica hacia las élites gobernantes y una recomposición de la representación política. Se ha superado el viejo bipartidismo compartido entre *Partido Popular* y *Partido Socialista* y se han consolidado nuevas fuerzas emergentes de distinto signo: por un lado, como nueva derecha, *Ciudadanos*, y por otro lado, en el campo progresista o de izquierda, las llamadas fuerzas del cambio, con *Unidos Podemos*, las convergencias y las candidaturas municipalistas de unidad popular.

Dejo al margen el análisis de dos procesos significativos que condicionan fuertemente esta dinámica estatal: el *procés* independentista en Cataluña y la correspondiente reacción centralizadora, con la crisis de modelo territorial, y el carácter e impacto del poder y las políticas liberal-conservadoras europeas.

Un hecho relevante a destacar, frente a los planes de normalización, es el nuevo proceso de indignación cívica. **Lo significativo son las dinámicas ciudadanas y las alternativas sociales y su relación con el cambio político-institucional**, así como las posibilidades de acuerdos de progreso, incluyendo las dificultades de la colaboración entre *Partido Socialista* y fuerzas del cambio, imprescindible para garantizar la hegemonía institucional del campo progresista frente a las derechas.

Tras el largo ciclo electoral y de reajuste representativo e institucional, precedido de una etapa de masiva indignación cívica y movilización popular, **estamos en otra fase política con dos opciones: la articulación del cambio político de progreso, o la consolidación reaccionaria de las derechas**. Está por ver la conformación de qué tendencia va a ser dominante. El diagnóstico de su interacción no está claro e independientemente de la voluntad transformadora de distintos actores requiere el máximo de realismo analítico.

Es una etapa transitoria hacia las nuevas convocatorias electorales de 2019 (municipales, autonómicas y europeas) y 2020 (generales), decisivas para consolidar las posibilidades de avance sociopolítico y representativo y las expectativas de cambio de progreso o, bien, el continuismo de la estrategia liberal-conservadora. La pugna sociopolítica y discursiva se establece sobre el sentido de su trayectoria y la legitimación de los actores principales. Supone la necesaria adecuación estratégica de las fuerzas progresistas respecto de las alternativas sociales para el cambio socioeconómico e institucional, el empoderamiento cívico y la democratización política.

Hay dos tipos de interrogantes sometidos a una fuerte pugna cultural-discursiva, derivada de las posiciones contrapuestas respecto al actual continuismo económico y el bloqueo político-institucional. Además, existen dinámicas ambivalentes, favorables y desfavorables para el cambio, y complejas, cuya relación no aclara una trayectoria dominante: avanzar o retroceder, ganar o perder. El futuro está abierto y es incierto. O sea, habrá que rechazar las visiones deterministas, económicas y políticas, sobre la inevitabilidad de una salida u otra, progresista o reaccionaria, y poner el acento en los mecanismos de activación y articulación popular y su capacidad transformadora.

Así, hay que responder, primero, a cuestiones analíticas o interpretativas: ¿Cuáles son las características y el sentido de esas tendencias sociales y políticas de fondo? ¿Qué dinámicas y perspectivas existen para la activación cívica o la movilización social? ¿Qué impacto tienen para el cambio político-institucional? Segundo, hay que explicar la orientación política y la estrategia transformadora: ¿Cómo avanzar hacia un cambio de progreso y qué bases sociales tiene? ¿Cómo se conforma el movimiento popular y qué relación tiene con la representación política e institucional? ¿Cuál es el perfil social de las fuerzas del cambio, las políticas públicas más necesarias para la sociedad y el papel y la relación con la socialdemocracia? Por tanto, hay dos tareas: una de interpretación, de construcción de un diagnóstico realista de las dificultades y condiciones para el cambio social y político; y otra, de carácter político-estratégico, de definir un horizonte y un camino democrático de progreso.

Comienzo por la crítica a la posición dominante en el discurso político y académico. Obedece a prejuicios ideológicos y a intereses corporativos de los grupos de poder y a la garantía de estabilidad para su gestión. La podemos designar como liberal-conservadora o socio-liberal, según los matices. Viene a negar la persistencia y gravedad de las consecuencias de la crisis social y económica, a reafirmar el continuismo económico y su supuesta inevitabilidad, como vía única de salida, y defender el poder y el orden establecido. Infravalora el malestar social e intenta manipularlo. Se sitúa en el supuesto post-malestar como aval para una nueva hegemonía política partidaria del continuismo (renovado) de la estrategia y el poder liberal-conservador, con una activa campaña mediática que acentúe la pasividad crítica ciudadana y restrinja la oposición cívica y su representación institucional. Está empeñada en cerrar la crisis política con un amplio proceso de 'normalización' ciudadana e institucional, el aislamiento o neutralización de la protesta social y la dinámica alternativa de cambio, así como la relegitimación de las élites gobernantes y sus políticas con ligeros recambios.

Lo más llamativo es la reconfiguración de las derechas, con el ascenso de *Ciudadanos* a costa del descenso del *Partido Popular*, con alguna retórica regeneracionista, cierto marketing político de apariencia renovadora y una reafirmación neoliberal en lo socioeconómico y recentralizadora en lo territorial.

La tendencia político-ideológica dominante de ese bloque es reaccionaria: va hacia un debilitamiento del Estado de bienestar y los derechos sociales y laborales de las capas populares, un nuevo autoritarismo político con democracia débil, y un consenso de Estado bajo un nacionalismo españolista conservador y centralizador, ajeno a la diversidad nacional. Así mismo, se subordina a la clase gobernante hegemónica liberal-conservadora europea, sin un proyecto modernizador, social y democrático de país (de países), ni la construcción de una Europa más justa e integrada.

Pero la realidad social de las mayorías ciudadanas no encaja con esos intereses, proyectos y estrategias continuistas y reaccionarios. **Hay una pugna sociopolítica y cultural-discursiva por definirla e interpretarla para consolidar la actitud social y las normas político-institucionales en torno a dos opciones básicas: continuidad o cambio de progreso.** Por un lado, con privilegio de poder para las derechas (y el mundo económico-empresarial)

y, por otro lado, con una alternativa social y democrática. Por tanto, existen grietas en ese plan normalizador o, lo que es lo mismo, se mantienen abiertas posibilidades de cambio. El bloqueo institucional y el relativo equilibrio entre las ofensivas reaccionarias y las dinámicas progresistas son inestables. Se trata de valorar los elementos que pueden decantar la tendencia hacia una alternativa social, democrática y de progreso, ganar las elecciones generales próximas y evitar el riesgo de un dominio prolongado de las derechas con rasgos autoritarios y regresivos o la tentación de una operación de gran centro.

Nueva indignación cívica

Queda lejos el 15-M-2011. No obstante, con características distintas y en un contexto diferente, **se está conformando un nuevo proceso de indignación social, con dinámicas proclives a la activación cívica, con motivos y ámbitos específicos, entre los que sobresale un renovado e integrador sujeto sociopolítico.** Me refiero, sobre todo, al movimiento feminista y su ejemplar y justa movilización por la igualdad y la justicia. Pero también hay indicios de nuevas protestas sociales, por ejemplo, la de los pensionistas y colectivos de gente trabajadora –el número de huelgas laborales y participantes en ellas ha vuelto a crecer en 2017-. En otro sentido están las dinámicas nacionalistas que expresan un fuerte malestar, aunque con otras mediaciones y sentido político. Paralelamente, se comprueba la dificultad de las élites gobernantes y los cauces institucionales para satisfacer las demandas populares de justicia social, igualdad y democracia que afectan a la mayoría ciudadana, con agotamiento del discurso legitimador de su gestión.

La interacción entre indignación popular y activación cívica con valores democráticos e igualitarios y el agotamiento de la credibilidad de las élites gobernantes por su gestión impopular ha dado como resultado la conformación, entre los años 2008 y 2016, de unos nuevos equilibrios político-institucionales. Pero, sobre todo, se ha reforzado una nueva mentalidad crítica; se ha consolidado una cultura democrática en amplias mayorías sociales, especialmente juveniles, con la reafirmación en la justicia social y la dignidad ciudadana que choca con el poder establecido y sus prácticas más corruptas, regresivas y autoritarias.

Analizo ese ámbito sociopolítico dejando al margen las implicaciones en la esfera estrictamente electoral, donde la competencia entre un continuismo remozado y un cambio sustantivo para desplazar y sustituir la hegemonía de la vieja derecha se está agudizando. Tampoco entro en su posible impacto en la configuración institucional a medio plazo, más difíciles de discernir hoy. Solamente señalar que los resultados electorales de 2019 y el nuevo carácter de los grandes ayuntamientos del cambio (Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Cádiz, A Coruña...) y algunas comunidades autónomas significativas (Madrid, Comunidad valenciana, Andalucía, Navarra...) van a tener una influencia sustancial en las expectativas de cambio gubernamental de progreso a través de las elecciones generales de 2020.

En todo caso, **mi pronóstico es la nueva dimensión, interacción y articulación de esos tres factores –indignación cívica, activación popular progresista y representación política alternativa-, que expresan el comportamiento y las mentalidades de amplios sectores sociales.** Ello aun en un contexto económico y político parcialmente diferente al de la última década en que se instaló la fuerte crisis social, económica y política y a las identidades precrisis. Sin embargo, su existencia constituye la palanca necesaria para posibilitar y porfiar en un cambio de progreso. Tenemos la experiencia de las distintas respuestas sociopolíticas y una limitada y contradictoria evaluación teórica, a menudo deudora de esquemas interpretativos rígidos. Pero creo que hay que poner el énfasis en el análisis riguroso de los nuevos componentes y tendencias de esta etapa que comienza para definir mejor una posición normativa o estratégica transformadora.

De entrada, **debo afirmar la necesidad de un enfoque realista, crítico y sociohistórico de esta dinámica sociopolítica democrático-igualitaria frente a la posición liberal-conservadora de neutralizarla o distorsionarla.** Igualmente, entre miradas progresistas, hay que superar tres tipos de desenfoces, a veces interrelacionados. Primero, los límites de una interpretación determinista económica, basada en el impacto mecánico de las condiciones materiales de existencia, por lo que la crisis económica conllevaría rebeldía popular generalizada (o integración cuando termina). Segundo, la visión determinista política, que considera que la crisis del poder o el Régimen político y la recomposición de la representación política crearía ventanas de

oportunidad para un cambio de progreso, cuando hay que valorarlas socio-históricamente por la relación de ambas fuerzas –populares y de los poderosos- y el sentido sustantivo de los distintos sujetos y su tipo de cambio. Así mismo, tercero, es insuficiente la interpretación idealista del populismo discursivo, que sobrevalora la influencia del discurso y el liderazgo en la construcción de una dinámica sociopolítica o un sujeto colectivo transformador –el pueblo-, infravalorando la experiencia popular y cívica, el sentido de las relaciones de fuerzas sociales y las estructuras socioeconómicas.

Por tanto, frente al discurso neoliberal del comienzo de una nueva fase de crecimiento económico, desarrollo social y normalización política, funcional para su hegemonía institucional, todavía es pertinente el concepto de crisis socioeconómica y política y, más general, el de crisis sistémica. No en su versión extrema y determinista, como derrumbe o hundimiento del capitalismo y/o del régimen político que abocaría necesariamente a una transformación radical; idea catastrofista e ilusa con poca credibilidad. Sino crisis en su acepción convencional y contingente, con dos rasgos: uno, dificultades de esos sistemas para cumplir su función de garantizar el contrato social y político de bienestar social, igualdad y democracia, con deslegitimación de las élites gobernantes; dos, al mismo tiempo, oportunidad para un relevante cambio (de progreso), mediante la participación cívica y según los reequilibrios de las fuerzas sociales, económicas y políticas. El futuro sigue abierto y en disputa.

Empiezo, utilizando las fuentes demoscópicas del CIS y *Metroscopia*, por explicar las percepciones de la sociedad española, luego señalo algunos datos laborales y sociales significativos de la mano de *Eurostat* y la EPA del INE, para terminar con unas conclusiones, a modo de pronóstico.

2. Persiste el malestar cívico en la mayoría social

Frente a la idea extendida interesadamente de que se ha iniciado una etapa post-malestar, dando por finalizado el descontento masivo y, por tanto, las bases para reclamar un cambio de políticas y políticos, sostengo lo contrario: persiste una valoración negativa mayoritaria de la situación económica y política; ha disminuido algo cuantitativamente, pero la permanencia en esa posición sigue siendo mayoritaria y más consistente.

Pero, además, y a diferencia de otros países europeos, ese malestar de fondo se traduce, mayoritariamente, en una actitud cívica, desde la reafirmación de la justicia social y los valores democráticos e igualitarios, no segregadores, autoritarios o reaccionarios, por mucho que sectores poderosos estén impulsando ya esa senda. Junto con la activación ciudadana, particularmente de la nueva marea igualitaria del movimiento feminista, y el desgaste de las élites gobernantes, esta nueva ola de indignación cívica permite aventurar la prolongación de la pugna por el cambio, sin su cierre histórico inmediato y la posibilidad de un reequilibrio democrático y de progreso.

La incógnita principal, dejando aparte la consistencia del gran poder liberal-conservador, deviene de la configuración político-institucional de las fuerzas progresistas, con una indefinición de la dirección del *Partido Socialista* bien por la operación Gran Centro (la prioridad de su alianza con *Ciudadanos*), para asegurar un continuismo remozado y la neutralización de factores de cambio, bien por un acuerdo de Progreso (la colaboración con *Unidos Podemos* y convergencias), abriendo otra etapa de reequilibrios institucionales en favor de las demandas populares y el cambio institucional.

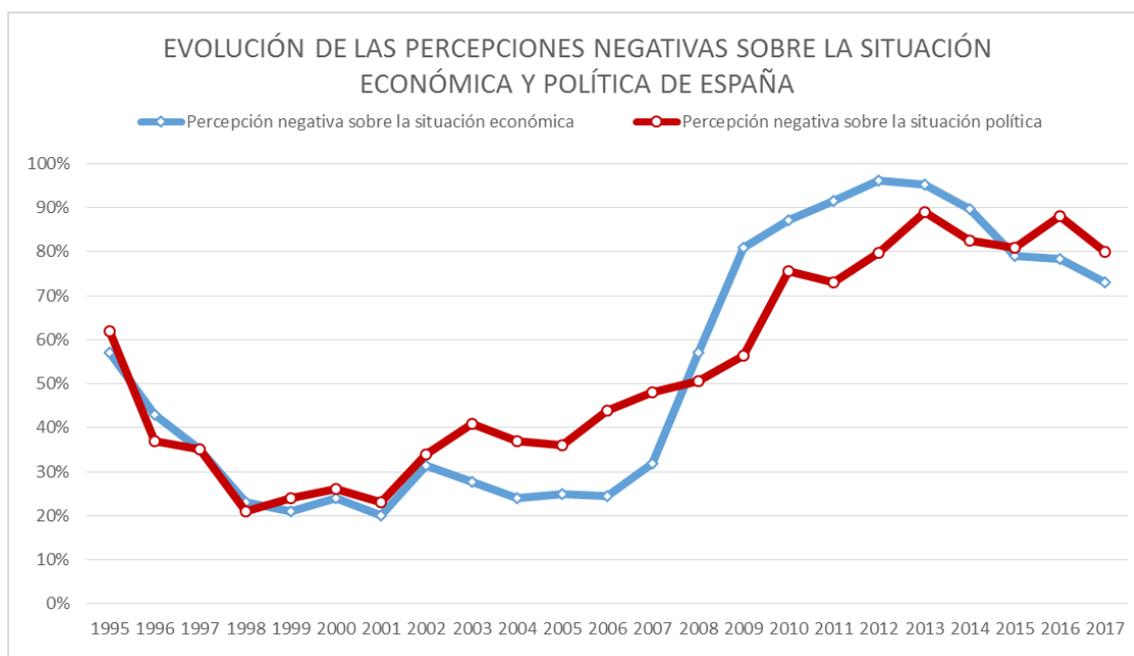
Pero veamos las tendencias sociopolíticas que van a condicionar la resolución de ese dilema. Empiezo por algunos datos significativos de la actitud ciudadana.

En primer lugar, el gráfico 1 señala la opinión ciudadana acerca de la evaluación de la situación económica y política de España, entre los años 1995-2017. Explica claramente las tres fases de la percepción negativa de la situación económica y la situación política, con pequeñas variaciones asimétricas: primero, entre los años 1997 y 2007, una valoración negativa limitada, menor de un tercio de la población; segundo, un ascenso muy pronunciado y rápido en ambos ámbitos a partir del año 2008 y su culminación entre los años 2010 y 2014, que llega al 90% de la sociedad; tercero, una ligera bajada, aunque se mantiene en el 80% de opinión negativa en el caso de la situación política y cerca del 70% el de la económica.

Significa, por un lado, la persistencia de más de dos tercios de personas descontentas y, por otro lado, una limitada disminución de la percepción negativa que alcanza a un tercio de la sociedad. Ese cambio de tendencia

enseguida se ha interpretado oficialmente como inexorable, profunda y acelerada. Estaría derivada de la supuesta mejoría económica y normalización política, e intenta legitimar las políticas gubernamentales restrictivas. Pero, como veremos, esa realidad socioeconómica no ha llegado suficientemente a la mayoría social que así lo refleja en sus percepciones.

Gráfico 1: Evolución de las percepciones negativas sobre la situación económica y política de España



Fuente: Metroscopia, marzo de 2017

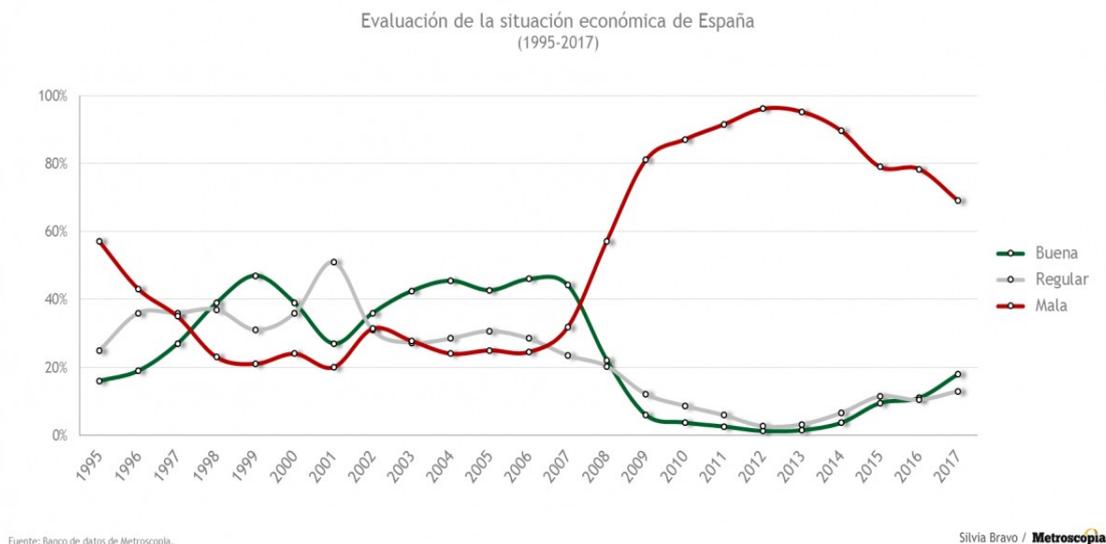
El único dato complementario significativo es la diferencia por edad de la percepción negativa de la situación económica: mayores de 65 años: 65%; jóvenes: 85%. Corresponde con el proceso de mayor precarización y descenso de sus condiciones vitales y expectativas laborales de la gente joven.

En segundo lugar, similares datos aportan también otro estudio (gráfico 2), también del año 2017, de la misma empresa demoscópica, respecto de la evaluación de la situación económica en España, sólo que con un ligero cambio de opciones. Así, desde una media en torno al 25%, entre los años 1997 y 2007, de personas que consideran la situación de *Mala* hay un incremento sustancial de más del 50% adicional con esa opinión a partir del

Frente a la crisis social y nacional. ¿QUÉ PAÍS?

año 2008, llegando a superar el 80% hasta el año 2014. Después, es verdad que se inicia un ligero descenso hasta situarse cerca del 65%.

Gráfico 2: Evaluación de la situación económica de España (1995-2017)



Es decir, se producen dos fases. La primera con un incremento muy profundo, rápido y generalizado de la percepción negativa: es el período álgido del malestar, la indignación y la protesta social; y la segunda con una reducción más limitada, aunque todavía lejos de la valoración precrisis y sin saber el ritmo y la intensidad de su evolución futura. De momento, solo se ha desactivado una minoría de descontentos frente a los problemas socioeconómicos y su gestión política, que puede corresponder a las capas acomodadas o resignadas con un perfil conservador.

No obstante, hay que reconocer un ligero aumento de la visión más optimista, con un sector que califica la situación económica de *Buena*, que pasa de prácticamente del 1% entre los años 2011-2013 hasta cerca del 20% actualmente; e, igualmente, un pequeño incremento de las personas que pasan de una calificación de *Mala* a otra de *Regular*, desde el 2% hasta el 15%, con una ligera reducción de la percepción negativa. Por tanto, todavía persiste una amplia mayoría en torno al 80% con una valoración crítica de la situación económica (dos tercios *Mala* y un 15% *Regular*).

Gran parte de los esfuerzos mediáticos y políticos dominantes buscan, precisamente, controlar, ampliar y acelerar esa normalización o, más bien, evitar la visibilidad del malestar cívico, así como neutralizar su expresión política. Pero sus prácticas para conseguirlo desbordan los métodos ordinarios de la persuasión, la deliberación y el debate públicos y se adentran en la manipulación divulgativa, el autoritarismo y el desplazamiento de la atención y las prioridades a otros campos fabricando otros enemigos, como el nacionalismo periférico, o promoviendo intolerancia xenófoba y racista. El sentido de la realidad, junto con la convivencia y la democracia se debilitan.

En definitiva, en la realidad actual permanece una distancia cualitativa de la valoración negativa de la ciudadanía respecto de la época anterior a la crisis y las políticas regresivas, autoritarias y corruptas. No hay reversión total de la valoración social negativa de la situación económica y menos de la situación política. El cambio de opinión menos duro –*Buena y Regular*- es minoritario y afecta solo a menos de un tercio de la población. Y no se puede afirmar la aceleración de esa tendencia ni la generalización de esta dinámica supuestamente superadora de la opinión crítica y el descontento cívico.

En resumen, inicialmente, en el período precrisis, solo había una cuarta parte de la población descontenta con la dinámica económica y política. Ascendió de forma rápida y generalizada, en una primera fase de crisis socioeconómica aguda y profundas consecuencias y recortes sociales y laborales para la gran mayoría de la sociedad. Luego, en una segunda fase de prolongación de la desigualdad social y la precariedad social y laboral, pero con leves mejoras materiales en algunos sectores de la población, se produce esa ambivalencia: consolidación de la percepción negativa en la mayoría junto con una minoría significativa que ve el panorama positivo. Por tanto, la opinión negativa ha descendido ligeramente, pero una mayoría de dos tercios insiste en ella.

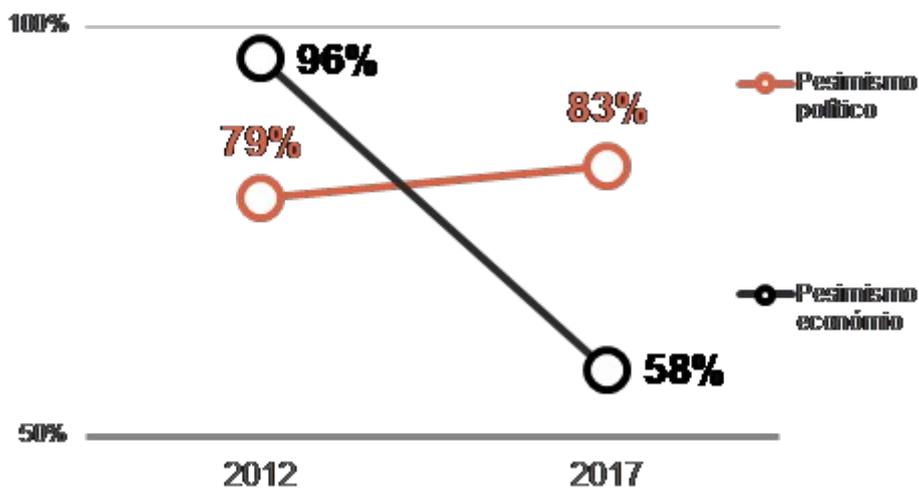
En tercer lugar, profundizo la interpretación con el siguiente gráfico 3, sobre el pesimismo económico y político, también de *Metroscopia*, expuesto en dos versiones para contraponer las perspectivas visuales del fenómeno: una la original y otra de elaboración propia con los mismos datos.

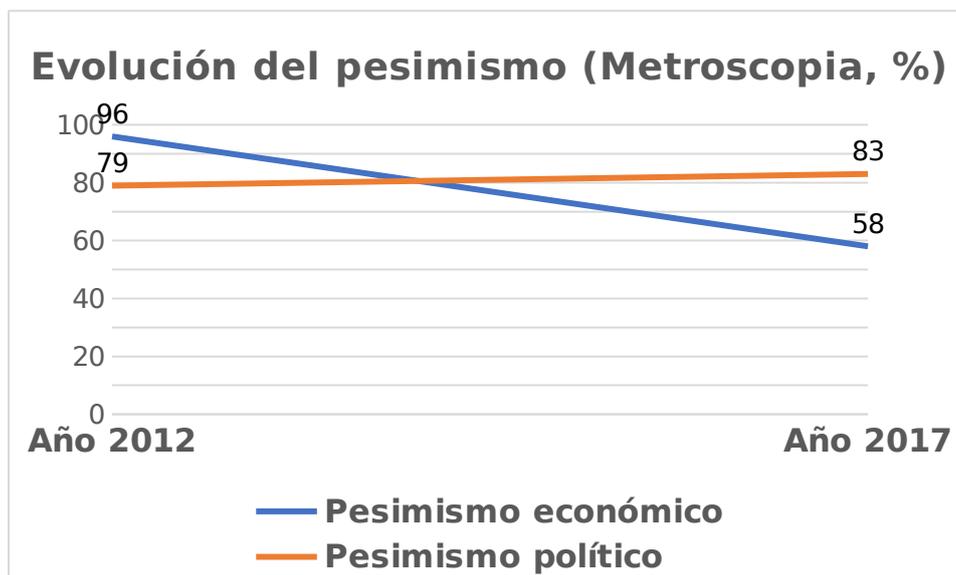
Estas dos versiones parten de los mismos datos, pero como decía, la interpretación de la simple visualización rápida puede ser distinta. Desde el año

Frente a la crisis social y nacional. ¿QUÉ PAÍS?

2012, con el máximo pesimismo económico (96%), se pasa, en el año 2017, al 58%, es decir todavía una mayoría, aunque ha descendido significativamente en más de un tercio. Sin embargo, hay que advertir dos detalles. Uno, la profunda inclinación descendente en la representación del primer gráfico, oficial, que infiere un descenso muy pronunciado y rápido. En el segundo gráfico, de elaboración propia, el descenso es más suave y, además, el dato total se compara con el conjunto de la población a partir de 0, es decir, refleja un espacio mayor que la mitad de la población, que al excluirlo en el gráfico anterior, pareciera que no se visualiza a esa mitad pesimista.

Gráfico 3 (en dos versiones): Evolución del pesimismo (2012-2017)



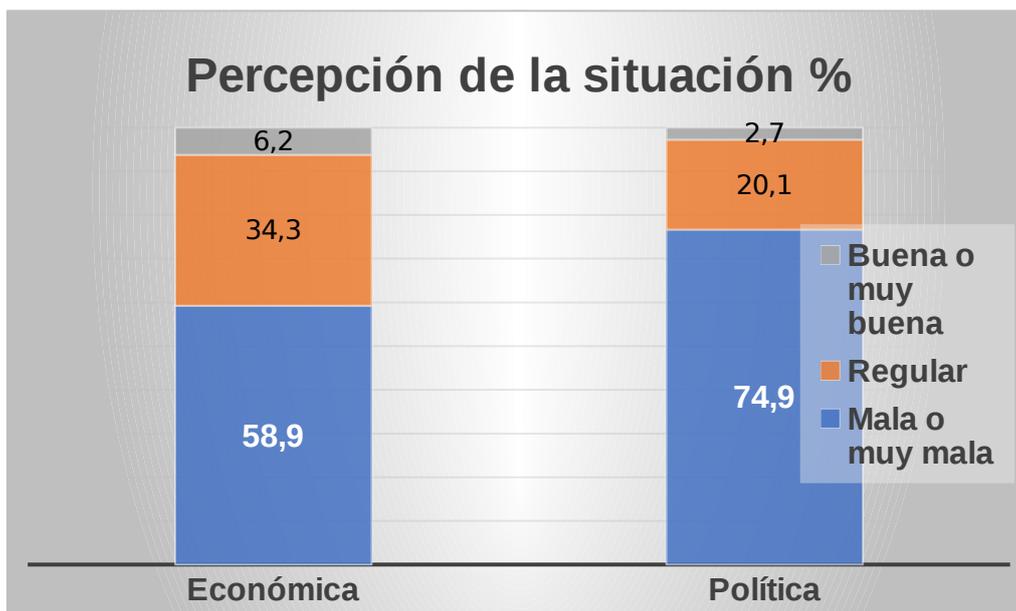


Fuente: *Metroscopia*, noviembre de 2017

Por tanto, el primer gráfico induce a error: acentuar un descenso rápido y generalizado del pesimismo económico (el pesimismo político crece). Esa apariencia científica permite justificar mejor la tesis interpretativa de *Metroscopia* de que el descontento social ha pasado a la historia y se inicia una fase 'post-malestar'. El segundo gráfico corresponde mejor a la representación realista del conjunto de la situación y las tendencias.

En cuarto lugar, avanzo un poco más en el análisis de estas dinámicas con datos del CIS, con una muestra mucho más amplia, según su Estudio 3.207, del último *Barómetro* de marzo de 2018 (gráfico 4). Se trata de la percepción actual de la situación económica y política y la comparación con la opinión de la situación de hace un año y la expectativa para dentro de un año.

Gráfico 4: Percepción de la situación económica y política (%)



Fuente: CIS. *Barómetro* de marzo de 2018 (Estudio 3.207).

La percepción de la situación económica es *Mala o muy mala* para cerca del 59% de la población, similar al del pesimismo económico de *Metroscopia*; pero aquí concreta el importante sector de más de un tercio que la define *Regular*; sólo una minoría del 6,2% la considera *Buena o muy buena*, o sea, es optimista. Los datos de la percepción de la situación política son más graves y contundentes.

Es interesante valorar la percepción de los cambios habidos, según la tabla 1. Un 20% considera que en el último año ha mejorado la situación económica general; probablemente esa parte ha pasado de una opinión de *mala* a *regular* o de *regular* a *buena*; en todo caso, unas minorías. Sin embargo, es relevante el contundente 80% que considera que hoy está *peor* o *igual* (es decir, empeorando todavía más o manteniendo la situación *mala* o *regular*); en ambos casos al prolongarse esa situación se consolida y afecta más gravemente. Igualmente, en el caso de la situación política la percepción es más negativa y alcanza al 96% (las personas que dicen *igual* a una situación valorada de *mala* o *regular*, engrosan esa percepción crítica), y solo un 4% considera que ha mejorado. Es todo un cuestionamiento a las élites gobernantes por la falta de credibilidad de su gestión.

Tabla 1: Perspectiva sobre la evolución de la situación económica y política

Situación respecto a hace un año	Económico	Política
(%):	a	
<i>Peor</i>	26,9	43,5
<i>Igual</i>	51,4	49,3
<i>Mejor</i>	20,0	4,0
Situación para dentro de un año	Económico	Política
(%):	a	
<i>Peor</i>	21,4	29,1
<i>Igual</i>	44,0	44,5
<i>Mejor</i>	21,4	10,2

Fuente: CIS. *Barómetro* de marzo de 2018 (Estudio 3.207).

Por último, es relevante valorar las expectativas de cambio, suponiendo que no se introducen mecanismos transformadores adicionales y que perdura la inercia actual. Sólo un 21% prevé una mejor situación económica y un 10% la política. ¿Cómo interpretar el amplio segmento del 44% en ambos ámbitos que dicen que la situación va a seguir *igual*? Desde la opinión mayoritaria de que las dos situaciones, económica y política, son actualmente *malas* o *regulares*, la previsión de su persistencia para dentro de un año no augura optimismo ciudadano sino pesimismo o incertidumbre.

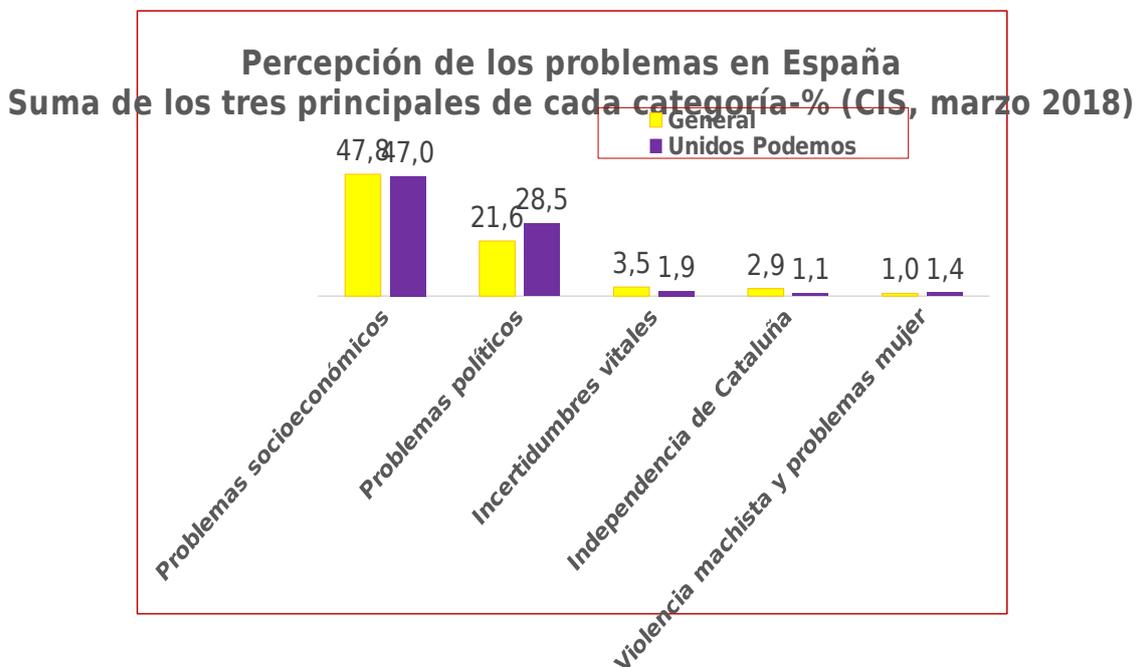
Hay escasa confianza popular en los cambios que pudieran producir las actuales clases gobernantes o los grandes poderes económicos (o por la suerte u otras circunstancias ajenas). Así mismo, denota la existencia de pocas expectativas (o ilusiones) sobre la capacidad transformadora inmediata de la propia sociedad, el movimiento popular o las fuerzas alternativas, con obstáculos poderosos. Se dibuja cierta impotencia. Hay descontento y deseo de cambio, pero con pocas esperanzas inmediatas, sin acabar de ver qué mecanismos pueden producir cambios relevantes. Es un reto para las fuerzas progresistas, incapaces hasta ahora de generar credibilidad en torno a un horizonte y un camino de avance social y democrático que pueda sobreponerse al estatus quo y la inercia actual.

En quinto lugar, detallo la opinión de la sociedad sobre los principales problemas existentes, con datos del citado *Barómetro* del CIS (gráfico 5). La pregunta es sobre los tres principales problemas en España y el propio Estudio expone la suma de las tres respuestas de primero, segundo y tercero.

Desde hace años el principal problema es el paro (que ha descendido un poco, hasta el 65,9%, sumados los tres principales), y el segundo, la corrupción y el fraude (que se ha incrementado algo, hasta el 34,5%). No obstante, aquí los presento agrupados en cinco bloques: problemas socioeconómicos (paro, calidad del empleo, pensiones, sanidad, educación...), políticos (corrupción y fraude, los políticos, el Gobierno y partidos concretos, inestabilidad política...), incertidumbres vitales (inseguridad ciudadana, crisis de valores...), independencia de Cataluña y violencia machista y problemas de la mujer.

Dejo aparte varios problemas con porcentajes de solo unas décimas (entre ellos son llamativos los 'recortes' y la 'reforma laboral', hoy con un impacto evidente y una implementación permanente pero lejanas en su aprobación normativa). Pongo el porcentaje referido a cien, para tener la referencia comparativa habitual. Además, señalo las respuestas de los votantes de *Unidos Podemos* (sin las convergencias catalana, gallega y valenciana, cuyos datos aparecen aparte) para constatar la existencia de algunas diferencias respecto al conjunto de votantes; en particular, por su mayor énfasis en los problemas políticos que la media, junto con mayor preocupación por la violencia machista y los problemas de las mujeres y menor por las incertidumbres vitales. Por otro lado, respecto a la independencia de Cataluña, cuya preocupación es menor que la media, en el caso de *En Comú Podem* asciende a 4,5 puntos, cuadruplicando la de *Unidos Podemos*.

Gráfico 5: Percepción de los problemas en España



Fuente: CIS. *Barómetro* de marzo de 2018 (Estudio 3.207).

En definitiva, persiste una mayoritaria desconfianza respecto de la mejoría de la situación económica y, sobre todo, política. Alcanza a la limitada credibilidad de la gestión institucional (pública y privada) de las élites dominantes para cumplir con su responsabilidad política y el contrato social de garantía del bienestar público, el interés general o el bien común.

Por tanto, existe un **nuevo proceso de indignación social con un bloqueo institucional**. La mayoría ciudadana percibe, recuerda y prevé malestar social y descontento político. Existe actitud crítica, deseo de mejoras socioeconómicas justas y político-democráticas; pero también escepticismo (realista) sobre su realización por la clase política, aunque sin resignación adaptativa. Son ingredientes ambivalentes que junto con la disponibilidad de una ciudadanía activa permiten aventurar una activación cívica con amplia simpatía popular frente al bloqueo impuesto por el poder establecido que cuenta con cierta legitimidad y adaptación resignada de una base social significativa, acomodada y conservadora.

Sin embargo, ante esta dinámica de desgaste especial de la derecha gobernante del *Partido Popular*, debido a su corrupción, autoritarismo y descrédito de su gestión económica y territorial caben, por parte del poder

establecido, otras dinámicas reaccionarias, distorsionadoras o neutralizadoras de la nueva ola de indignación cívica. El bloqueo político y la falta de credibilidad en la política institucional requieren, al menos, un cambio cosmético y retórico incluyendo el recambio, al menos parcial, de la élite gobernante y algunas mejoras relativas.

Está por ver si *Ciudadanos* es el eje hegemónico y si se produce el acuerdo o la subordinación del PP (nuevas derechas) o del PSOE (gran Centro). El *Partido Socialista*, en este contexto de posibilidades de ir hacia adelante (progreso y democracia) o hacia atrás (continuismo renovado), adquiriría una responsabilidad histórica al apostar por una de las dos opciones y ralentizar o no el cambio de progreso. La salida centrista o socioliberal a su actual encrucijada va a influir en su futuro como fuerza relevante, al igual que en otros países europeos. Una respuesta de izquierdas o progresista le conllevaría conflictos con el poder establecido, pero abriría un horizonte de progreso para la mayoría ciudadana.

En consecuencia, junto con la actitud cívica mayoritaria y la activación social progresista e igualitaria, están las mediaciones institucionales y políticas, entre las que no son menores la estrategia de la dirección socialista ante su encrucijada y la consolidación de las fuerzas del cambio y la salida democrática y fraterna al conflicto territorial. Todo ello, frente al proyecto dominante del bloque de poder europeo de una estrategia liberal conservadora, con una democracia débil, una cohesión social frágil y una integración institucional mínima, condicionada por todas las tendencias reaccionarias, autoritarias, antisociales y xenófobas, que confluyen en impedir una alternativa social y de progreso en una Unión Europea más justa y solidaria.

Por último, conviene citar que, respecto de la polémica en décadas atrás, sobre el descenso de la importancia de los problemas 'materiales' en beneficio de los valores 'post-materiales' en las nuevas sociedades postmodernas, avanzadas o de la abundancia, la posición generalizada, incluida la violencia machista, la independencia de Cataluña y las incertidumbres vitales, la problemática central se concentra en el bienestar material y relacional, la adecuada gestión institucional democrática y la seguridad vital. Evidentemente, con sus componentes culturales, simbólicos e identitarios en una visión de las relaciones sociales y trayectorias vitales más

integral, multidimensional e interactiva. Se confirma la tesis realista de que cuando fallan las condiciones básicas de existencia y convivencia de las mayorías sociales hay una reafirmación valorativa en torno a la solución cívica de esa problemática, normalmente basada en la justicia social y la democracia, cuestionada por el poder neoliberal y el ascenso de la actual derecha extrema xenófoba y autoritaria.

3. Se consolidan graves problemas socioeconómicos

A pesar de algunas mejorías macroeconómicas y de empleo, persisten graves consecuencias sociales, económicas y laborales para la mayoría de la sociedad. Se incrementa la desigualdad social, la precarización laboral y la devaluación salarial. Hay riesgos de consolidación de la involución social y democrática. Al mismo tiempo, permanece un amplio descontento popular y se han activado importantes movilizaciones sociales como la feminista y la protesta de pensionistas.

Señalo los datos más significativos sobre esa realidad socioeconómica para sacar posteriormente algunas conclusiones más generales.

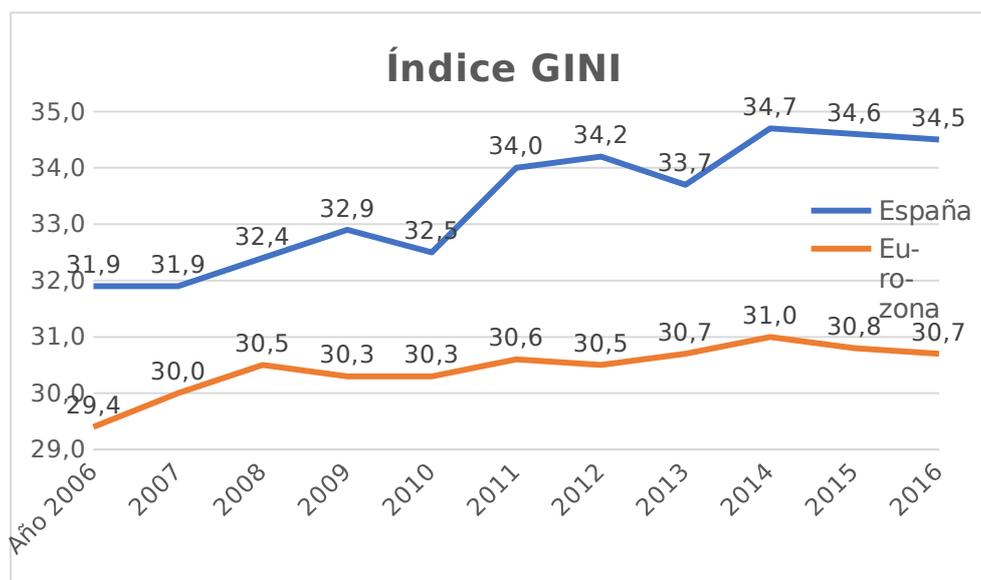
En primer lugar, la evolución de la desigualdad social con el indicador más reconocido y completo, el índice GINI (0, expresa máxima igualdad; 100, máxima desigualdad), con datos de *Eurostat*, la agencia estadística europea.

En el gráfico 6 se exponen los datos de España y la eurozona (19 países) desde antes de la crisis y su desarrollo posterior, con una distancia significativa. A diferencia de la eurozona, cuyo crecimiento de la desigualdad es muy limitado en todo el periodo (apenas un punto), en España se nota un aumento pronunciado de casi tres puntos (cerca de un 10% más), con un ensanchamiento de la brecha existente con la media de la eurozona. La tendencia es ascendente hasta el año 2014 (34,7), en que desciende ligeramente, aunque los parámetros se mantienen altos hasta el año 2016 (34,5), último con datos disponibles.

Dos tipos factores explican esta diferencia de mayor intensidad e incremento de la desigualdad social en España: por un lado, el mayor nivel de desempleo, destrucción de la ocupación, precariedad laboral y devaluación salarial; por otro lado, el menor peso de las políticas públicas protectoras, en

particular prestaciones de desempleo, bajas pensiones y rentas mínimas. Así mismo, hay que constatar esa ligera mejoría de décimas en los dos últimos años, derivada del relativo incremento del empleo y la disminución del paro masivo. Pero, como se ve, el aspecto principal es el mantenimiento y prolongación de una fuerte desigualdad que conlleva graves consecuencias sociales, especialmente para la gente empobrecida y con riesgos de exclusión social.

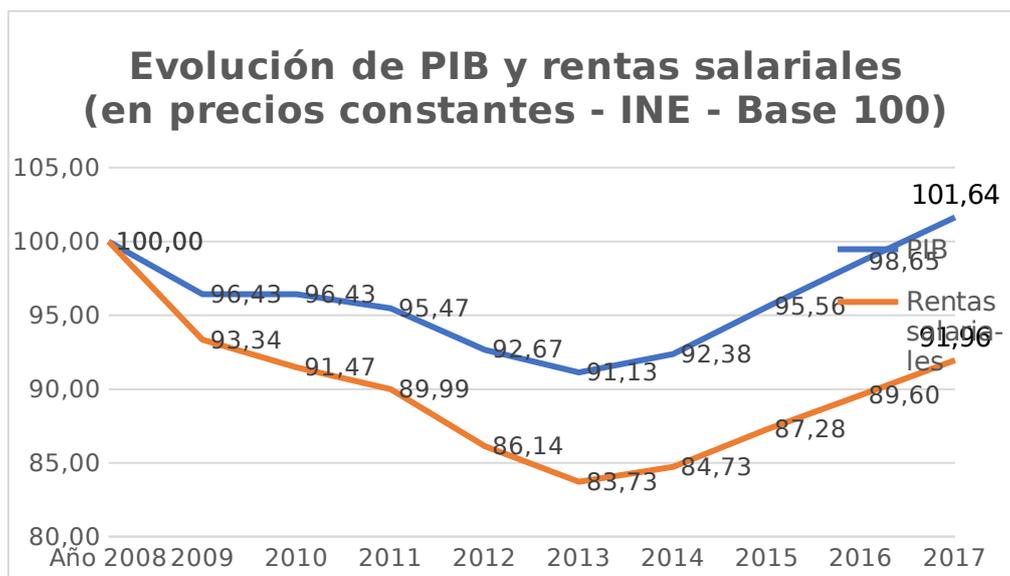
Gráfico 6: Índice GINI de desigualdad social



Fuente: *Eurostat*

Así, el riesgo de pobreza en España, siguiendo con *Eurostat*, en ese mismo año 2016, llegaba al 27,9% (trece millones), cuatro puntos y medio más que la media europea. O que, en 2017, según el INE, diez millones de personas (desempleadas e inactivas que quisieran un empleo) son 'vulnerables ante el empleo', tienen pobreza laboral, con una situación más grave para cerca de la mitad que viven en hogares con ingresos laborales bajos (60% de la mediana).

En segundo lugar, explico la comparación de la evolución del PIB y las rentas salariales en estos últimos diez años, desde el inicio de la crisis económica (gráfico 7).

Gráfico 7: Evolución de PIB y rentas salariales (2008-2017)

Fuente: INE

En el año 2017 (último con datos disponibles), por primera vez (en precios constantes) se ha superado el importe de PIB del año 2008 (101,64 sobre 100); es decir, la producción económica total se ha recuperado a niveles precedentes de la crisis. No obstante, vemos que las rentas salariales todavía están más de ocho puntos por debajo respecto de ese comienzo de la crisis (91,96 sobre 100) y la distancia en relación al PIB actual se ha incrementado hasta casi diez puntos. Significa que el porcentaje de las rentas salariales se ha recuperado algo desde el nivel mínimo del año 2013 (83,73), pero la distancia con respecto al mayor crecimiento del PIB va aumentando y su capacidad adquisitiva sigue siendo menor.

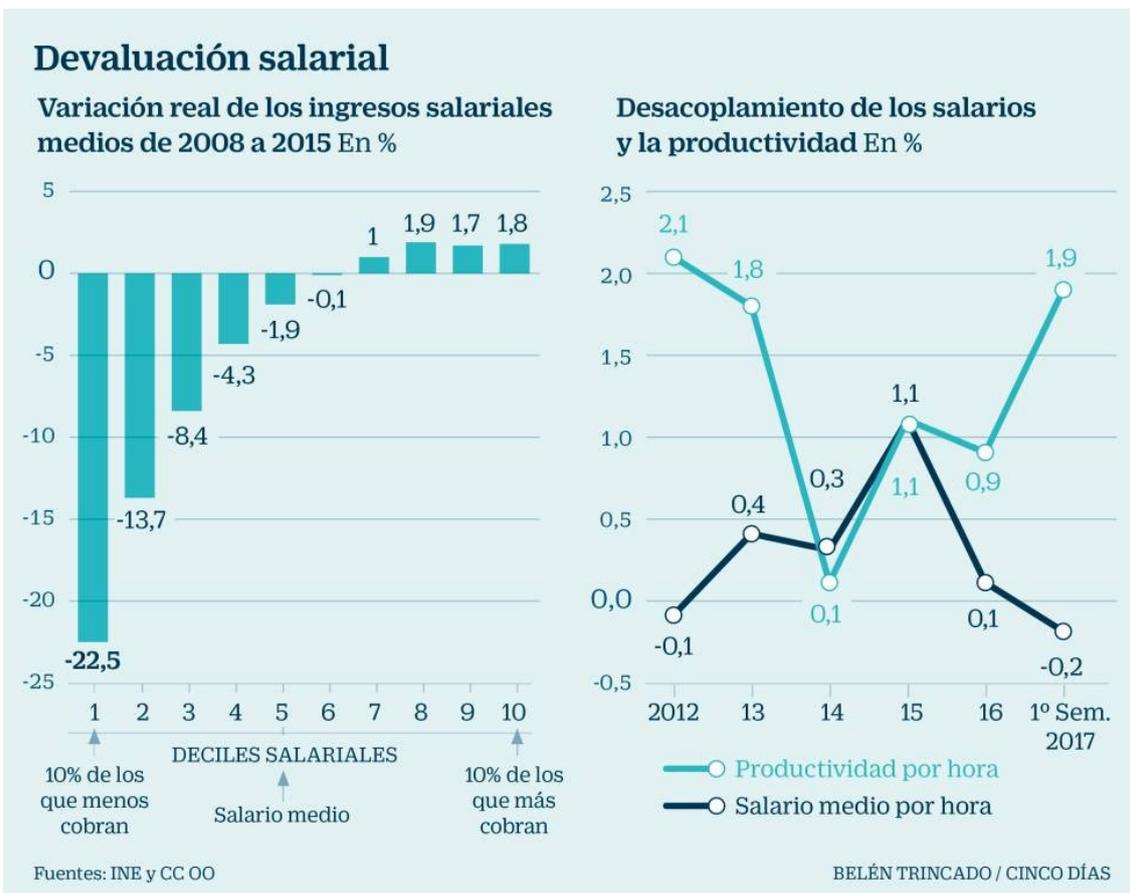
El crecimiento económico revierte fundamentalmente en los beneficios empresariales (y un poco en los impuestos) cuya ventaja comparativa se consolida en detrimento de una distribución justa hacia los salarios. La contención salarial sigue en marcha, a pesar de la reactivación económica. Las clases trabajadoras reciben menos y tienen menor capacidad adquisitiva y dado su menor poder contractual impuesto por las reformas laborales y la

precarización del empleo tienen más dificultades para defender sus condiciones laborales.

En tercer lugar, ese reparto no equitativo al conjunto de las capas asalariadas, además, es muy desigual en relación con los distintos segmentos según su nivel de ingresos, expresados en *deciles* (gráfico 8). Se pueden agrupar en tres segmentos. Primero, hay un descenso pronunciado de los ingresos medios en el 50% de las rentas más bajas (particularmente en el 20% de los que menos cobran con una devaluación salarial media entre el 22,5% y el 13,7%); segundo, se mantienen los ingresos en el 20% las rentas salariales intermedias; tercero, hay un ascenso relativo en torno al 1,8% en el 30% de las más altas.

No obstante, cabe una precisión ya que no todas las personas asalariadas son de clases trabajadoras (aquí no se tienen cuenta personas inactivas y autónomas, ni tampoco las desempleadas que engrosarían el porcentaje de las clases trabajadoras hasta más del 70% de esa población). Así, podemos traducir esa distribución salarial en *deciles* en términos de clases sociales por el criterio convencional (liberal) del nivel de ingresos que, en general, coincide cuantitativamente, según datos de la EPA, con el criterio weberiano-marxista según la cualificación del empleo ejercido y el control, dominio, estatus o posesión de los medios de producción. El salario 'mediano' que es el que refleja el gráfico está en unos 1.600 euros mensuales. Pero aquí, para esa distinción de clase, considero la frontera de los ingresos salariales 'medios', que están cercanos a 1.900 euros mensuales brutos en catorce pagas (exactamente para el año 2016, 1.878 euros, 2.075 para hombres y 1.661 para mujeres); por encima de la cual adjudico un estatus económico de clase media y por debajo de clase trabajadora.

Gráfico 8: Devaluación salarial y desacoplamiento de los salarios y productividad %



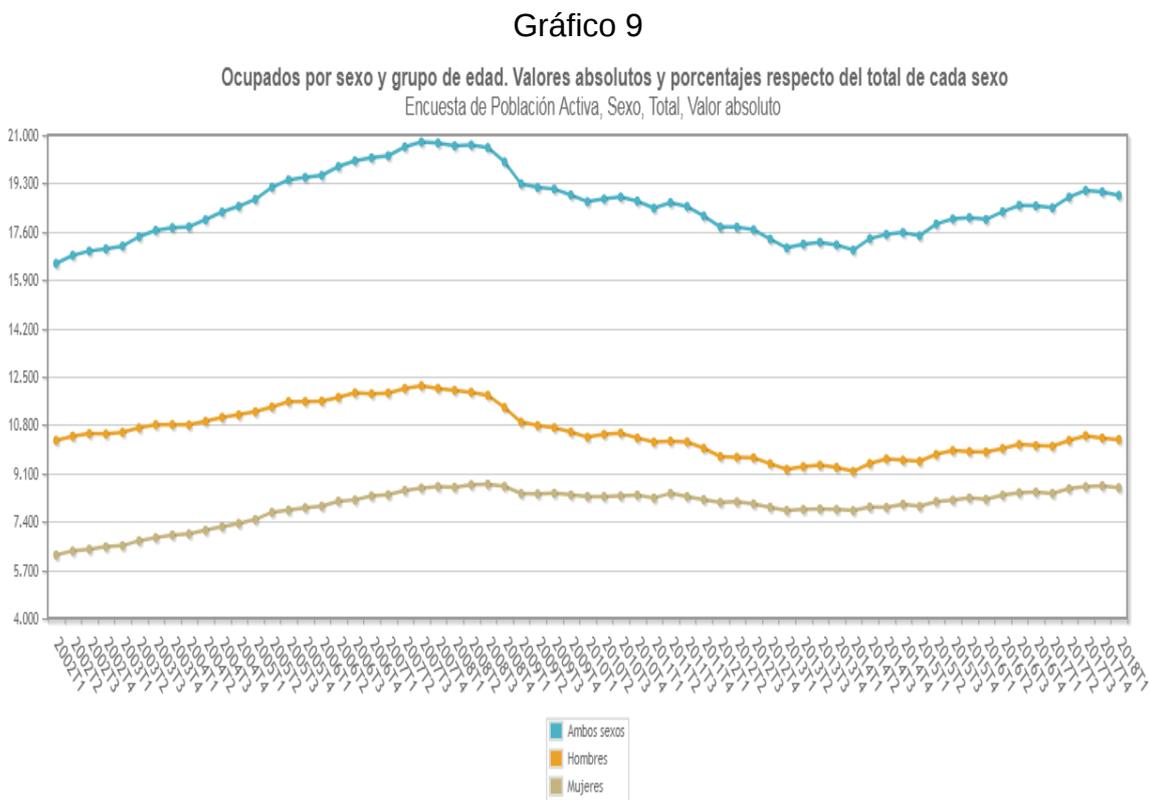
Fuentes: INE, CCOO y Cinco Días.

Tenemos, básicamente, tres clases sociales distintas. Primero, un 60% de clases trabajadoras (en plural), con, al menos, dos segmentos diferenciados: el 30% del sector más precarizado y en empleos poco cualificados, con una fuerte devaluación salarial, que lo componen unos 4,5 millones que cobran menos de 1.200 euros; otro 30%, con una devaluación menor y empleos semicualificados, que lo forman otros 4,5 millones que cobran entre 1.200 y 1900 euros. Segundo, tenemos algo más del 30% de capas asalariadas perteneciente a las clases medias (unos 6 millones) que no han sufrido la devaluación salarial y que en esos ocho años duros incluso han mejorado sus ingresos ligeramente, con una posición económica acomodada no exenta de otros riesgos e incertidumbres. Tercero, una minoría dentro del *decil* de los que más cobran, pero con un peso cualitativo importante y que forman parte de las élites ejecutivas poderosas o clases dominantes, y cuyos ingresos han crecido más (aunque su impacto no aparece en esta estadística).

Frente a la crisis social y nacional. ¿QUÉ PAÍS?

Por último, hay que señalar, según el citado gráfico 8, el desacoplamiento de la evolución de los salarios y la productividad, especialmente en el último año y medio en que sube la productividad por hora (hasta +1,9%) y baja sustancialmente el salario por hora (-0,2%). Es decir, las mejoras tecnológicas y de organización productiva, así como la intensificación del trabajo que incrementan la productividad no revierten en una mejora de las rentas salariales sino de los beneficios empresariales.

En cuarto lugar, comento las tendencias de la ocupación (gráfico 9) y del desempleo (gráfico 10), en valores absolutos y de acuerdo con la EPA, con su evolución entre los años 2002 y 2018.



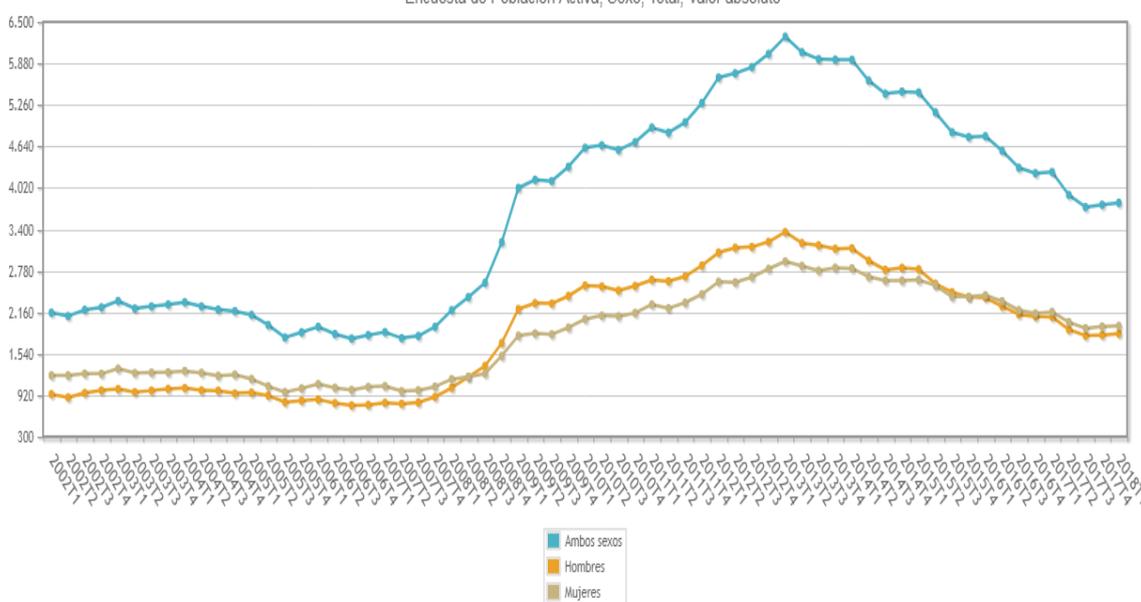
Fuente: INE-EPA

Se suceden tres periodos de prácticamente un lustro cada uno: en el primero (2002/2007), un incremento relevante de la ocupación de casi cinco millones hasta llegar a un máximo cercano a los 21 millones; en el segundo (2008/2014), una fuerte destrucción de empleo de casi cuatro millones, quedándose en un mínimo en torno a 17 millones; tercero, un incremento

moderado de la ocupación que no llega a unos dos millones hasta situarse cerca de los 19 millones. O sea, hay creación de empleo, pero solo llega a suplir la mitad del destruido. La tendencia de su recuperación es clara, aunque la distancia entre ambos sexos –en detrimento del volumen de mujeres- es significativa. Además, el total general y el total masculino –las mujeres han tenido menores oscilaciones- todavía están lejos del nivel precrisis (ello sin contar con la relativa baja tasa de empleo actual: 48,7%).

Gráfico 10

Parados por sexo y grupo de edad. Valores absolutos y porcentajes respecto del total de cada sexo
Encuesta de Población Activa, Sexo, Total, Valor absoluto



Fuente: INE-EPA

El gráfico 10 expone la evolución de los datos de desempleo que presentan unas variaciones más pronunciadas que las de la ocupación y sin que existan grandes diferencias por sexo. Desde 1,8 millones de personas paradas, el mínimo en 2007 (8% de la población activa), hasta el máximo de casi 6,3 millones en 2013 (27%). Es decir, un incremento de cuatro millones y medio para posteriormente producirse una reducción de dos millones y medio y situarse en 3,8 millones en 2018 (16,7%). En este caso, la disminución del total de personas paradas no llega a la mitad del incremento producido con la crisis y los ajustes, con una tasa de paro que todavía es el doble que al comienzo de

la crisis. Estamos lejos de recuperar los valores precrisis, cuando el volumen de desempleo y la tasa de paro todavía eran relevantes y superiores a la media europea.

En definitiva, pueden cronificarse las consecuencias de las llamadas reformas estructurales, sobre todo, en el mercado de trabajo, con la mayor desigualdad en las relaciones laborales, un fuerte sometimiento de la fuerza de trabajo y una prolongación de la precariedad laboral y social. Y el crecimiento económico, por sí solo, no lo resuelve. Este plan neoliberal de salida de la crisis es parcial. Las ganancias empresariales y el poder económico-financiero se recomponen, existen algunas mejorías relativas a partes minoritarias de la sociedad, se recuperan parcialmente algunas condiciones perdidas en el momento más crítico, pero la dinámica mayoritaria de las clases trabajadoras es que se quedan en un peldaño inferior en sus condiciones sociales y laborales, en sus trayectorias vitales. Y lo que es más grave, con mayor desigualdad social, es decir, con más distancias comparativas y menores oportunidades respecto de las capas más acomodadas. Y, particularmente, con mayores desventajas en relación con los núcleos de poder económico y político que pretenden reafirmar su hegemonía institucional a largo plazo. Se abre una nueva fase histórica de nuevo capitalismo (financiero o extractivo) con subordinación generalizada de las capas populares, una mínima cohesión social y una gestión política con una democracia débil.

4. Dinámicas contradictorias y su impacto en el cambio

El diseño liberal conservador conlleva la persistencia de gran parte de las desventajas impuestas a la mayoría social por su gestión regresiva y autoritaria de la crisis, cuyos rasgos principales pretenden consolidar, no revertir. Así, la amplia indignación cívica es la base sociopolítica, democrática y ética para mantener la pugna por impedir esa salida ambivalente de ventajas para los de arriba y desventajas para los de abajo; o para transformar ese modelo institucional y de crecimiento con mayor desigualdad de poder y en las condiciones sociales y laborales de las mayorías populares.

¿Quiénes salen de la crisis y quiénes no?

En consecuencia, **existen algunas mejoras económicas y de empleo respecto del periodo anterior más crítico, pero, al mismo tiempo, mayores desventajas relativas de las clases trabajadoras respecto del poder económico-empresarial.** El discurso dominante, primero crecer -admitiendo la lógica neoliberal- y luego repartir, apenas esconde que el resultado distributivo es más desigual y los niveles de empleo y desempleo están lejos de la época precrisis. Es un engaño; los beneficios de la supuesta recuperación económica se concentran en los de arriba y sigue estando peor compensada la mayoría social.

No obstante, entre las capas populares (clases trabajadoras y clases medias estancadas o en retroceso), existe una diferenciación atendiendo a los dos indicadores básicos de poder adquisitivo de sus ingresos salariales y su situación de ocupación o desempleo.

Por un lado, están las personas que experimentan una ligera mejoría económica en los últimos años respecto del inicio de la crisis y, particularmente, del momento más profundo de la misma. Hay dos bloques diferenciados por el estatus inicial y final.

Uno, de situación acomodada, compuesto por un 40% de la población asalariada, o menos del 30% de la población activa (si consideramos a personas autónomas –con un nivel similar de ingresos- y en desempleo –con un nivel inferior). Tienen relativa estabilidad, cualificación de empleo y estatus de clase media, aunque tengan cierta incertidumbre personal o familiar y en sus trayectorias.

Otro segmento distinto es gente precaria con una mejoría relativa, pero sin salir de una situación crítica. Son, básicamente, los dos millones y medio de nuevas personas ocupadas (con la reducción de diez puntos de la tasa de desempleo) que han pasado del paro a un empleo, normalmente precario, con alta intensidad del trabajo y con salarios reducidos. El número, sobre todo de jóvenes, es algo superior contando con que muchas de ellos están en rotación con el desempleo y la inactividad y en peores condiciones laborales y salariales que las personas empleadas anteriormente. O sea, siguen sin consolidar una trayectoria laboral estable o ascendente. Una parte significativa ha salido del pozo más profundo, pero siguen teniendo un estatus precario de clase

trabajadora, aunque menos malo que en sus peores momentos o respecto a otros sectores en descenso.

Por otro lado, está el bloque empobrecido por la devaluación salarial y más subordinado por la imposición del poder empresarial y la precariedad laboral (incluido el temor al desempleo). Es el bloque mayoritario de clases trabajadoras, de más de dos tercios, al que no le ha llegado todavía la recuperación económica, ni siquiera en sentido comparativo con el periodo más crítico. No tienen recortes adicionales, pero continúan en un peldaño inferior y viven el riesgo de prolongar esa situación de lento y continuado deterioro vital.

Hay tres segmentos de la población activa diferenciados por el distinto punto de partida y el nivel de sus retrocesos materiales que al persistir incrementan su gravedad: los 3,8 millones de gente parada (16%), un millón jóvenes, muchos de ellos de forma prolongada y con escasa protección al desempleo; el 30% inferior por ingresos salariales y condiciones laborales, la mayoría jóvenes, sobre los que recaen los ajustes más duros; el otro 30% intermedio de clase trabajadora, con deterioro de su capacidad adquisitiva y en una situación vulnerable.

Además, entre los años 2010-2017 la capacidad adquisitiva de las pensiones ha caído cuatro puntos, por la diferencia entre su congelación inicial, su subida última del 0,25% y la superior inflación. Afecta a nueve millones y medio de pensionistas, también perdedores de los recortes sociales. Pero el impacto mayor de las dos reformas aprobadas por el Gobierno del PSOE (2011) y del PP (2013), suponen una pérdida media de todas las personas activas anteriores, respecto de sus derechos precedentes, de un 20% cada una de ellas, contando con que su implementación es gradual en los años siguientes. Además, frente a la idea oficial de que las pensiones españolas son generosas, la realidad es que la gran mayoría son bajas. La propaganda de los poderes fácticos para evitar su indignación, dividirlos y que abracen la resignación adaptativa no ha sido suficiente para contrarrestar la decidida movilización y apoyo social. De momento, el Gobierno ha admitido un retroceso parcial y reconocido la subida según el IPC (previsto) para los próximos tres años, sin asegurarla en el futuro ni desactivar el resto de los ajustes regresivos de ambas reformas.

Por último, ya he hecho mención antes a la amplia brecha de empleo y salarial entre hombres y mujeres que cobran de media una cuarta parte menos. Solamente añadir la constatación de la existencia todavía de persistentes diferencias en distintos ámbitos laborales y de empleo, por ejemplo, en la tasa de actividad: 64,3% de los hombres y 52,9% de las mujeres.

Pero las diferencias más significativas en las relaciones salariales y laborales son por edad, afectan a la gente joven popular y, en ese sentido, sobre todo a las mujeres jóvenes. Éstas, habiendo conseguido bastante igualdad en los méritos académicos, un cambio de mentalidades y relaciones interpersonales más libres, con un proceso de empoderamiento vital y mayores expectativas profesionales, se enfrentan a un mayor choque con las evidencias de la precariedad laboral juvenil. A ello se añade las todavía persistentes estructuras machistas y discriminaciones de género que amenazan sus trayectorias vitales. No es de extrañar que sean las mujeres jóvenes, con dificultades en sus procesos de inserción laboral y profesional y problemas adicionales de discriminación de género y acoso sexista, quienes hayan nutrido la respuesta popular más masiva de los últimos años, a través de la movilización feminista. Esa nueva marea por la igualdad y la justicia refleja ese profundo descontento acumulado y esa aspiración al cambio en las relaciones laborales y personales más igualitarias, así como una gestión política e institucional (y judicial) más democrática y feminista, superadora también de las insuficiencias de las políticas institucionales de igualdad y contra la violencia machista.

En definitiva, existen dinámicas contradictorias. Aparte de la minoría elitista del 1% a la que le ha ido muy bien con la crisis y los ajustes económicos, hay un amplio sector acomodado de clase media, en torno al 30%, que ha sorteado las peores consecuencias de la crisis económica, de empleo y devaluación salarial, con menor impacto de las políticas de recortes sociales y laborales. Ha encajado, aun con temor, los momentos de mayores incertidumbres personales y familiares y va cobrando confianza sobre la posibilidad de estabilizar su mejor posición comparativa y continuar en esa senda, relativamente ventajosa, en el actual marco socioeconómico. Para ese bloque es funcional el discurso neoliberal de las derechas de continuismo económico, aunque no todos tienen mentalidad liberal-conservadora. Es la

disputa principal entre las derechas del PP y C's, a los que también apoyan otros sectores populares conservadores. Aunque, una parte es, política y culturalmente, progresista, persiste en su oposición a la degradación democrática o su solidaridad con su entorno, pero tiende a la moderación en los cambios socioeconómicos.

El discurso liberal-conservador, legitimador de las políticas públicas autoritarias y regresivas, no corresponde a la realidad de las mayorías sociales, las clases trabajadoras y parte de las clases medias descontentas.

Por un lado, no es cierto que las ligeras mejorías económicas sean derivadas de las reformas estructurales neoliberales y sirvan para legitimar sus políticas y su gestión. Obedecen, sobre todo, a otros factores externos favorables (expansión monetaria del BCE, control financiero de los intereses de la deuda, inestabilidad de países competidores en turismo, bajo precio de la energía...).

Por otro lado, **no es verdad que la mayoría ciudadana esté saliendo de la crisis social y económica. Cada vez más experimenta la consolidación de lo sustancial de la involución social y democrática pasada:** prolongación de la mayor desigualdad social, precarización del empleo, reducción de derechos sociales y laborales y proceso gradual de desmantelamiento del actual Estado de bienestar (con un tope al gasto público siete puntos inferiores a la media europea).

Ardua tarea por delante para impulsar la imprescindible agenda social por la nueva mayoría parlamentaria de progreso.

El impacto en el cambio

El horizonte europeo, según el plan liberal conservador, es: Estado social de mínimos, democracia débil, subordinación de las clases populares al poder económico-empresarial, neutralización del descontento social y la indignación cívica, así como contención de la activación popular y la capacidad representativa y relacional de las fuerzas progresistas. No es un proceso de reversión del estatus social y político de las mayorías ciudadanas previo a la crisis y la ofensiva neoliberal, al menos para el sur europeo.

Ese plan normalizador, compartido por el bloque de poder europeo dirigido por Merkel, con la colaboración del SPD y Macron, tiene un grave problema: la deslegitimación cívica, especialmente en el sur europeo, derivada de la insatisfacción de las demandas populares y la persistencia de una amplia cultura democrática y de justicia social. Y para imponer su modelo político y económico deben contrarrestarla. En ello están, apoyándose en los condicionamientos y presiones de los populismos de derecha extrema, xenófobos y autoritarios.

En ese sentido, **la socialdemocracia**, cuyas direcciones mayoritariamente (y salvo excepciones como en el caso portugués o británico) han colaborado con esa estrategia dominante, **está en una gran encrucijada con dos opciones por delante**: Abrazar la operación gran centro y el continuismo económico y político, manteniendo solo una ligera retórica progresista con poca credibilidad; o bien, mantener una política de reformas igualitarias y democráticas con alianzas de progreso. **Su decisión va a definir su futuro, así como influir sobre el ritmo y las condiciones del cambio.**

Las fuerzas alternativas tienen un gran reto: definir y consolidar un proyecto de cambio con un fuerte perfil social, vinculado a los problemas y percepciones de la mayoría social y estimulando los procesos de indignación social y activación cívica. El sujeto sociopolítico no se construye solo o principalmente por el discurso de una élite política o ilustrada. Se conforma a través de la experiencia relacional y la articulación popular en el conflicto social y frente a las relaciones de poder, desigualdad y subordinación.

La representación política y la gestión institucional progresistas deben estar interrelacionadas con la actividad de movimientos sociales, grupos populares y tejido asociativo, con una vinculación y arraigo entre la gente, con una democracia participativa. La pugna por el tipo de modelo social europeo y una construcción equilibrada e integrada está abierta. La soberanía popular y la diversidad nacional se deben articular con un horizonte de cambio europeo, basado en una ética universalista de los derechos humanos, unas relaciones económicas y políticas democráticas y solidarias y un sistema de cosoberanías y gobernanzas multinivel. Existen posibilidades para avanzar en un cambio de progreso. Debe partir de dos ejes centrales de la cultura progresista europea: igualdad (o justicia social) y libertad (o democracia). Es decir, una democracia

Frente a la crisis social y nacional. ¿QUÉ PAÍS?

social y económica avanzada y participativa, en una Europa más justa y solidaria.

8. Valoración teórica de la interpretación populista⁸

El presente trabajo aporta algunas reflexiones para avanzar en una teoría alternativa desde la valoración crítica del populismo, con su interpretación de 'pueblo' y la construcción de movimiento popular. Como se sabe, es una doctrina influyente en dirigentes de Podemos, eje de las fuerzas del cambio. Las necesidades prácticas y estratégicas de las fuerzas alternativas son muy grandes y la capacidad teórica pequeña. Además, está acompañada de una gran fragmentación e inadecuación con la realidad actual, con la correspondiente dificultad para ejercer una función de 'desvelamiento' o interpretación crítica que sirva para la transformación.

Parto de la exigencia colectiva de una elaboración y un debate teórico específico, vinculado con el cambio político pero superador del inmediatismo de la acción social y política cotidiana. Nos atañe, particularmente, a la intelectualidad progresista, lamentablemente, la mayoría de ella condicionada por esquemas del pasado e intereses del presente. El objetivo no es elaborar una teoría completa o una mezcla ecléctica de las teorías disponibles. La oportunidad es dar un impulso a la teoría social y política que favorezca la transformación sociocultural, económica e institucional y facilite la cohesión de las fuerzas del cambio.

La interpretación la hago desde la *hermenéutica social* y el *análisis crítico del discurso* (Alonso, 1998, y 2009; Beltrán, 2016; Ricoeur, 1999; Van Dijk, 2000), así como desde el *realismo crítico e histórico* con la revalorización del sujeto y su experiencia (vivida e interpretada) como agente de cambio de las relaciones de poder y la hegemonía política y cultural (Benítez, 2016; Domènech, 2016; Gramsci, 1978, y 2011; Jessop, 2008; 2017a, y 2017b; Tilly, 1984; 2004; 2009, y et al., 2005; Thompson, 1977; 1979; 1981, y 1995).

⁸ Comunicación al Encuentro inter-congresos del **Comité de Investigación sobre Movimientos sociales, acción colectiva y cambio social**, de la *Federación Española de Sociología* (FES), Madrid (CIS y UNED), 31 de mayo y 1 de junio de 2018. Una primera versión académica se publica por *Fundación Betiko*, especializada en el estudio de movimientos sociales.

En este texto explico dos aspectos. Primero, una valoración crítica de la ambigüedad ideológica y el idealismo discursivo de la teoría populista. Segundo, un nuevo enfoque crítico, social y realista para interpretar la dinámica de los movimientos sociales y populares.

Ambigüedad ideológica e idealismo discursivo de la teoría populista

La teoría populista de E. Laclau (1978 y 2013), Ch. Mouffe (2003, 2007 y 2012) y ambos (1987), como teoría del conflicto, aporta, respecto de las teorías funcionalistas y el consenso liberal o el determinismo economicista, criterios interpretativos más realistas para analizar el proceso de crisis sistémica, protesta social y conformación de un sujeto sociopolítico de cambio, experimentado esta última década en España. Pero presenta importantes limitaciones, no solo para interpretar el proceso sino, sobre todo, para facilitar una orientación estratégica al mismo.

La primera insuficiencia de la teoría populista es su ambigüedad ideológica: *El populismo es, simplemente, un modo de construir lo político* (Laclau, 2013: 11). O bien: *Por 'populismo' no entendemos un 'tipo' de movimiento –identificable con una base social especial o con una determinada orientación ideológica- sino una 'lógica política'* (ídem.: 150).

Hay una diversidad de movimientos sociales con rasgos comunes de tipo 'populista' (polarizado) pero son muy distintos, incluso completamente opuestos, por su carácter 'sustantivo', su sentido respecto de la libertad y la igualdad de las capas populares. Ese carácter 'indefinido' del papel y la identificación ideológico-política de un movimiento popular es el punto débil de esa teoría populista. Es incompleta porque infravalora un aspecto fundamental. Vale poco una teoría que es solo una 'técnica' o una lógica procedimental (antagonismo) compatible con movimientos populares contrapuestos por su contenido. La garantía de basarse en 'demandas' salidas del pueblo, sin valorar su sentido u orientación, es insuficiente. Ese límite no se supera en el segundo paso de unificarlas, nombrarlas o resignificarlas (con significantes vacíos) con un discurso y un liderazgo cuya caracterización social, política e ideológica tampoco se define. El 'momento' populista es secundario; lo principal es si hay crisis política por y con dinámicas igualitarias-emancipadoras.

La particularidad en España es que los límites de esa teoría se han superado y completado por el contenido cultural, la experiencia sociopolítica y el carácter progresista y de izquierdas de unas élites asociativas y políticas, dentro de un movimiento popular democrático con valores de justicia social; es decir, por el tipo de actor (o sujeto) existente.

La segunda insuficiencia de Laclau es el 'idealismo discursivo', la sobrevaloración del papel del discurso en la construcción de la realidad sociopolítica.

Desde mi punto de vista, el enfoque realista e histórico de E. P. Thompson, tal como he desarrollado en otros textos (Antón, 2006a, 2006b, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2018), es de los más sugerentes para explicar los procesos de conformación de los sujetos sociales y políticos y cómo superar la dicotomía estructuralismo-posestructuralismo desde una óptica relacional de las propias capas populares y su experiencia y con una actitud transformadora.

Superando el esquema dicotómico anterior, el proceso real no sería interpretable adecuadamente desde el enfoque idealista-postmoderno (discurso, identidad y lucha popular) ni desde el determinista-estructuralista (clase, conciencia de clase, lucha de clases) –que también sería idealista siguiendo a Thompson-. La conformación del sujeto como factor de cambio y la dinámica sociopolítica habría que interpretarla desde el realismo crítico, relacional e histórico (thompsoniano o gramsciano): experiencia relacional (participación en el conflicto social, posición en las relaciones sociales y 'costumbres en común' y diferenciadas), conciencia social (pensamiento, subjetividad e interpretación de la gente común y las élites) y sujeto sociopolítico (construido a través de su práctica relacional y cultural). Las tres facetas forman un conjunto social interconectado e inseparable, solo es posible separarlo analíticamente.

Por otra parte, defino las limitaciones del enfoque populista de Laclau y Mouffe: por efecto péndulo de su acertada crítica al esencialismo y el reduccionismo del determinismo economicista, pasan al extremo de infravalorar la realidad social, económica e institucional o subsumirla en una concepción discursiva y contingente de la política. Ese enfoque idealista o postmoderno les

dificulta la interpretación y, sobre todo, la elaboración de una teoría y una estrategia transformadoras enraizadas en esa realidad.

Desde una posición crítica al idealismo postmoderno hay que clarificar un par de conceptos. La palabra 'significado' se refiere al contenido discursivo del análisis de un texto; el significante 'sentido' contiene un criterio, juicio o significado colectivo que está en un discurso, pero, sobre todo, en una práctica social. Y puede estar más o menos expreso o latente en el comportamiento del grupo social. Al tener por objeto el sentido de los hechos sociales, la interpretación es más compleja y debe considerar a ambos procesos, discursivo y práctico-relacional, incluyendo no solo las mentalidades y la dinámica social sino su socio-génesis, su evolución y los factores que la condicionan. En esa comprensión de la interacción de los dos elementos y su trayectoria está la base interpretativa de la hermenéutica social, más completa, multilateral e interactiva que el idealismo postmoderno o el determinismo estructuralista.

En consecuencia, la teoría populista es incompleta, como análisis y 'orientación' para avanzar en la igualdad-libertad-solidaridad; o, para conseguir hegemonía y conquistar el poder.

Laclau engloba o clasifica a todos los movimientos populares bajo el mismo concepto de 'populistas', atendiendo a una particularidad: su polarización con el poder... para alcanzarlo. En consecuencia, ese punto de partida es insuficiente y no desvela o critica lo principal: el papel sociopolítico-cultural o sentido ético-ideológico de un movimiento popular (y el poder). El aspecto fundamental de la realidad sociopolítica sobre la que clasificar e interpretar a los movimientos populares debe ser su significado en el eje igualitario-emancipador o autoritario-regresivo. No es sobre la vieja tipología izquierda/derecha dada la confusión sobre el significado de izquierda; pero sí sobre su sentido político-ideológico e histórico en relación con la igualdad-libertad-fraternidad o las relaciones de dominación. El análisis (científico) de la 'realidad' se debe complementar con una actitud política-ética transformadora. Además, esa realidad se debe seleccionar e interpretar desde un enfoque social y crítico o, si se prefiere, ético-normativo.

En ese autor hay también una infravaloración del contenido político-ideológico o ético de un movimiento popular y, en consecuencia, del tipo de cambio político que promueve. Esa pluralidad de realidades en que se concretaría su teoría demuestra una desventaja, no un elemento positivo o conveniente. Es incoherente al juntar tendencias con diferencias y antagonismos de sus características principales. Esa comparación basada en el 'mecanismo' común refleja su ambigüedad ideológica y confunde más que desvela la realidad tan diferente, incluso opuesta, de unos movimientos u otros (ya sea Le Pen con Podemos, el nazismo con el PCI de Togliatti, el populismo latinoamericano con la Larga Marcha de Mao o los Soviets, o el etnopopulismo y el racismo con los nuevos movimientos sociales y de los derechos civiles).

¿Para qué sirve meterlos todos en el mismo saco de 'populistas'? ¿Para destacar la validez de una teoría por su 'universalidad', su amplia aplicabilidad histórica? Pero, esa clasificación, qué sentido tiene; ¿solo el de resaltar un 'mecanismo' constructivo, el del conflicto nosotros-ellos, en oposición al consenso liberal y en vez de la clásica lucha de clases? Esa diversa y amplia aplicabilidad no demuestra una teoría más científica (u objetiva) sino menos rigurosa y más unilateral respecto de lo sustantivo: su sentido político liberador.

Esa ambigüedad político-ideológica refleja su debilidad, su abstracción de lo principal desde una perspectiva transformadora: analizar e impulsar los movimientos emancipadores-igualitarios de la gente subalterna. Para ello la teoría populista sirve poco y distorsiona. Como teoría del 'conflicto' (frente al orden) es positiva en el contexto español, con actores definidos en ese eje progresista-reaccionario. Partir de los de abajo le da un carácter 'popular'. Pero lo fundamental de su papel lo determina según en qué medida conecta y se complementa con un actor sociopolítico concreto, con su cultura, experiencia y orientación sustantiva... igualitaria-emancipadora (como en España). Aquí, sus insuficiencias se contrarrestan con el sentido progresivo (justicia social, democracia...) de la ciudadanía activa española y sus líderes, incluido los de Podemos, que se han socializado en la cultura progresista, democrática... y de izquierda (social).

Laclau pone de relieve algunas deficiencias de la clásica interpretación estructural-marxista y su lenguaje obsoleto. Pero tampoco es realista; comparte

su idealismo, aunque se va al otro extremo constructivista. Y, sobre todo, infravalora elementos internos sustantivos (éticos o ideológico-políticos) para evitar su conexión con actores autoritarios-regresivos. Es su inconveniente y la crítica principal.

Así, el enfoque procedimental de la teoría populista es incompleto para definir una orientación sustantiva político-ideológica o estratégica y construir un tipo de poder democrático y emancipador. Y para rellenar ese vacío cada sector populista debe echar mano de una política o ideología al uso, presente en la sociedad y de carácter más o menos reaccionario o progresista (o centrista, nacionalista, estatista, de extrema derecha, izquierdista...). Es decir, la 'lógica' política (polarización nosotros/ellos e idealismo discursivo) es insuficiente para caminar hacia un horizonte transformador para la gente subalterna. Al menos, debe definirse e incorporar valores clave como la igualdad, la libertad, la fraternidad y la democracia (o bien, sobre la desigualdad, la dominación, la segregación y el autoritarismo), así como desarrollar una posición solidaria, integradora e intercultural ante los actuales conflictos nacionales, la diversidad cultural y contra la tendencia xenófoba y prepotente de la demonización del 'otro'. Pero esa mezcla da lugar a populismos concretos diversos a los que hay que juzgar, precisamente, por su 'sentido' político, no por su lógica. Los campos políticos principales no se clasifican por cuáles son populistas o cuáles no, sino por si la fuerza sociopolítica que representa cada polo desempeña un papel democrático-igualitario-solidario o una función autoritaria, discriminatoria y segregadora.

Por tanto, dada la importancia de las necesidades políticas y estratégicas del movimiento popular en España, la diversidad de corrientes de pensamiento entre las fuerzas alternativas y, específicamente, la tarea de cohesión y consolidación de la nueva representación en torno a Podemos y el conjunto de sus aliados y confluencias, es imprescindible un esfuerzo cultural y un debate teórico para avanzar en un pensamiento crítico que favorezca la transformación social. Aun sin luces largas (estrategia global) hay que enfocar mejor con las luces cortas (análisis concreto, arraigo con la gente), contando con la experiencia y las mejores tradiciones de los movimientos emancipadores de los dos últimos siglos.

En definitiva, la cuestión analítica y política principal es si un movimiento popular es reaccionario o progresivo, autoritario o democrático (y democratizador), opresivo o emancipador, etc., y adoptar una posición política sobre ese eje político-ideológico. Son secundarios otros rasgos como el emocional o el liderazgo; importa escuchar, dialogar y representar bien a la gente. La teoría populista de Laclau es una teoría del 'conflicto', más adecuada que el 'consenso' liberal, respecto del carácter de la actual pugna sociopolítica... en España (y dejando al margen el conflicto territorial ante el que hay que destacar la convivencia y la fraternidad). Pero tiene unos inconvenientes de fondo, particularmente su ambigüedad ideológica, que no le permiten aportar suficiente claridad interpretativa y orientación política a las tareas estratégicas del movimiento popular (en España, Europa o Latinoamérica). La reafirmación en ella (salvando aspectos parciales) no es un avance respecto de un pensamiento crítico sino un lastre teórico a superar. Su déficit hay que corregirlo con una teoría política que priorice un enfoque social y crítico, un proyecto sustantivo para un proceso emancipador-igualitario. Es una tarea difícil y compleja, la mejor intelectualidad europea está, cuando menos, perpleja, pero dadas las necesidades del cambio político de progreso es necesaria abordarla. Esa es la pretensión de estas reflexiones.

Un nuevo enfoque crítico, social y realista

La caracterización del 'momento' populista como expresión del conflicto de nuevas fuerzas populares frente a las viejas élites tradicionales, aparte de la acertada clasificación en un campo o en otro de dichas fuerzas, es un asunto analítico y normativo secundario. Visto desde el poder establecido es un problema de descenso de la legitimidad pública de la élite política normalizada o clase gobernante, es decir, de su necesidad estratégica de recomponer su credibilidad y, por tanto, su poder. Es una situación de crisis política, más o menos profunda, que puede llegar a la transformación del régimen político (y económico y nacional). Como todas las crisis, son una oportunidad para el cambio al estar debilitadas las estructuras de poder.

Pero, dentro de las dinámicas sociopolíticas emergentes y sus pugnas y equilibrios con el poder establecido (la clase o fracción dominante) para establecer una nueva hegemonía, hay que explicar dos cosas: la profundidad

del cambio y el doble (o diverso) 'sentido' transformador. Es decir, si las tendencias nuevas solo llegan a una remodelación superficial de las élites gobernantes y el sistema político o alcanzan modificaciones profundas de los núcleos del poder institucional, socioeconómico y nacional-territorial. Y respecto de su trayectoria y orientación si van en un sentido democrático-igualitario-solidario o en un sentido autoritario-regresivo-segregador (o con fórmulas intermedias o mixtas según qué aspectos).

Fenómenos populistas se han producido en regímenes políticos inestables, es decir, sin la hegemonía de una clase gobernante potente y creíble y que ha incumplido su función colectiva. O sea, que ha frustrado con su gestión los fundamentos de legitimidad ciudadana y cohesión política y nacional derivados del cumplimiento del contrato social o pacto colectivo de seguridad y bienestar colectivo.

Por tanto, junto con la base social de descontento popular emerge una o varias dinámicas de reajuste o recomposición de esa clase política o régimen institucional, con mayor o menor nivel de ruptura o continuidad con el viejo orden y la vieja élite política gobernante. Estos procesos se pueden dar, no solo en países desestructurados institucionalmente, sino en los Estados más avanzados y/o democráticos (como EEUU., Reino Unido y Francia, o bien, Holanda, Austria y Suecia); al igual que en otro momento los Estados 'modernos' del Eje (Alemania, Italia y Japón) aun con fuertes fracasos históricos respecto de sus expectativas imperiales o hegemónicas y un pasado de gran descontento social, a menudo, con importantes movimientos de izquierdas. Así, el contexto es diferente al del típico populismo latinoamericano con unas clases gobernantes más frágiles y fragmentadas, aunque con unos desafíos nacionales, institucionales y de cohesión social también relevantes.

Dos elementos de fondo son comunes: crisis de legitimidad de las élites político-institucionales y grandes retos geoestratégicos, socioeconómicos y nacionales. La vieja clase política (o el sistema institucional) es incapaz de abordarlos bien y necesita una mayor movilización popular y de recursos estructurales para recomponer la nueva élite y la nueva hegemonía o reequilibrio del poder. El populismo, por tanto, es una lógica de acción política

antagonista y discursiva frente a las viejas élites políticas con la tarea de instaurar un nuevo orden hegemónico.

Hasta ahora, prácticamente no he definido el sentido de las oportunidades de cambio con esa crisis y la nueva movilización política. No obstante, lo principal para el poder establecido y las fuerzas emergentes y, especialmente, para el análisis y la posición política y estratégica de progreso es el peso (u oportunidad como relación de fuerzas) de la tendencia hacia una salida igualitaria-democrática-solidaria u otra reaccionaria-regresiva-autoritaria. Es decir, los procesos históricos y los campos políticos se definen, fundamentalmente, por su sentido sustantivo, no procedimental. La tarea de las fuerzas del cambio de progreso es el debilitamiento del poder establecido de las clases poderosas, regresivas y autoritarias (incluido la presión derechista-xenófoba), y el empoderamiento 'popular' democrático-igualitario. Ese es el eje principal de la polarización en los últimos siglos, por supuesto con diferencias en cada campo y con zonas intermedias y transversales.

Y no es un asunto menor el papel contradictorio y ambivalente que juega la socialdemocracia u otros actores intermedios (pertenecientes a los de arriba y a los de abajo y, según qué temas y momentos, al medio), así como la necesaria diferenciación entre la derecha y la extrema derecha. Otra cosa es la 'composición social' de una fuerza oligárquica, de derecha o extrema-derecha, que puede apoyarse en sectores populares o de clase trabajadora (descendientes) o su supuesto perfil 'social' pero divisionista y segregador respecto de otras capas populares (inmigrantes, extranjeros). Y aunque cuenten, desigualmente, con apoyos 'populares' o sean más o menos patrióticos o 'protectores'. O sea, su valoración política y ética no depende, sobre todo, de su composición y su perfil (que son un síntoma significativo), sino del 'sentido' de su trayectoria sociopolítica y cultural y su proyecto de sociedad, aspectos que conforman su identidad real.

Los poderes establecidos liberal-conservadores y todo su aparato académico y mediático no ven mal esa caracterización polisémica de los distintos populismos: son todos los que cuestionan la gobernabilidad de su poder, del 'sistema' político. Enlaza con su lógica de mezclar y desprestigiar a 'ambos extremos'. Pero esa delimitación de campos, poder liberal-conservador

frente a 'extremistas' o antisistema de ambos colores –izquierdistas y derechistas- es nefasto desde una óptica transformadora progresista. No deja ver los grandes conflictos políticos y de valores de igualdad, libertad y fraternidad contra los que, a veces, hay coincidencias entre la extrema derecha y la derecha liberal. Por tanto, desorientan sobre las estrategias políticas y las alianzas emancipadoras.

En definitiva, hay que superar (aparte de las teorías funcionalistas, liberal conservadoras o socioliberales) el enfoque populista, del simple antagonismo ligado al idealismo discursivo postmoderno, así como el determinismo economicista, de la sobrevaloración de las estructuras económicas e institucionales que se imponen a la propia gente como actor sociopolítico y conllevan un inevitable futuro. Hay que desarrollar un enfoque realista, social y crítico con el acento puesto en la importancia del propio sujeto, de sus condiciones de vida y sus contextos relacionales de dominación y subordinación, de su experiencia y su subjetividad, de su práctica social y su diferenciación cultural y política. Sobre esa interpretación se podrá elaborar una estrategia de cambio de progreso más clara y acertada.

Bibliografía

- Alonso, L. E. (1998). *Una mirada cualitativa en sociología. Una aproximación interpretativa*. Madrid, Fundamentos.
- (2009). *Controversias sobre el individualismo contemporáneo*. Madrid, UAM.
 - Antón, A. (2006a). *Precariedad laboral e identidades juveniles*. Madrid, GPS-Fundación Sindical de Estudios.
 - 2006b). *El devenir del sindicalismo y la cuestión juvenil*. Madrid, Talasa.
 - (2011). *Resistencias frente a la crisis. De la huelga general del 29-S al Movimiento 15-M*. Valencia, Germanía.
 - (2013). *Ciudadanía activa. Opciones sociopolíticas frente a la crisis sistémica*. Madrid, Sequitur.
 - (2014). *Sujetos y clases sociales*. Madrid, *Fundación 1 de Mayo*, Estudio 83, marzo (41 pp.).
 - (2015). *Movimiento popular y cambio político. Nuevos discursos*. Barcelona, UOC.

- (2016). *La democracia social hoy. Un nuevo ciclo sociopolítico por la democracia y la igualdad*. Madrid, Editorial Académica Española.
- (2018). El sujeto de cambio. En *La clase trabajadora*, VV.AA. Madrid, Akal.
- Beltrán, M. (2016). *Dramaturgia y hermenéutica: para entender la realidad social*. Madrid, CIS.
- Benítez, P (2016). La actualidad política de E. P. Thompson. Multitud y 15-M. En J. Sanz, J. Babiano y F. Erice (eds.), *E. P. Thompson. Marxismo e Historia social*. Madrid, Siglo XXI (pp. 299-328).
- Domènech, X. (2016). La condescendencia de la posteridad: lucha de clases, clases y conciencia de clase. En J. Sanz, J. Babiano y F. Erice (eds.), *E. P. Thompson. Marxismo e Historia social*, Madrid, Siglo XXI (pp. 115-151).
- Gramsci, A. (1978). *Antología*. México, Siglo XXI.
- (2011). *¿Qué es la cultura popular?*. Valencia, Universidad de Valencia.
- Jessop, R. (2008). *El futuro del Estado Capitalista*. Madrid, La Catarata.
- (2017a). *El Estado: Pasado, Presente; Futuro*. Madrid, La Catarata.
- (2017b). *La renovación del pensamiento de Gramsci: entrevista con Bob Jessop*, por Carlos Prieto y Juan Carlos Monedero. Público, 26 de abril (40 pp.). En línea: <http://www.publico.es/opinion/renovacion-pensamiento-gramsci-entrevista-bob.html>
- Laclau, E. (1978) [1977]. *Política e ideología en la teoría marxista. Capitalismo, fascismo, populismo*. Madrid, Siglo XXI.
- (2013) [2005]. *La razón populista*. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
- Laclau, E. y Mouffe, Ch. (1987). *Hegemonía y estrategia socialista hacia una radicalización democrática*. Madrid, Siglo XXI.
- McAdam, D., Tarrow, S. y Tilly, CH. (2005). *Dinámica de la contienda política*. Barcelona, Hacer.
- Mouffe, Ch. (2003) [2000]. *La paradoja democrática*. Barcelona, Gedisa.
- (2007). *Retorno a lo político*. Buenos Aires, FCE.
- (2012). *El desafío de Schmitt*. Buenos Aires, Prometeo.

Frente a la crisis social y nacional. ¿QUÉ PAÍS?

Thompson, E. P. (1977) [1963]. *La formación histórica de la clase obrera. Inglaterra: 1780-1832* (tres tomos). Barcelona, Crítica.

- (1979). *Tradición, revuelta y consciencia de clase*. Barcelona, Crítica.

- (1981). *Miseria de la teoría*. Barcelona, Crítica.

- (1995). *Costumbres en común*. Barcelona, Crítica.

Tilly, Ch. (1991) [1984]: *Grandes estructuras, procesos amplios, comparaciones enormes*. Madrid, Alianza.

- (2007) [2004]: *Contienda política y democracia en Europa 1650-2000*. Barcelona, Hacer.

- (2010) [2009]. *Los movimientos sociales, 1768-2008. De sus orígenes a Facebook*. Barcelona, Crítica.

9. El dilema del gobierno socialista⁹

Los principales problemas que encara el nuevo Gobierno socialista, una vez desalojado el *Partido Popular* del poder gubernamental, reafirmar una mayoría parlamentaria alternativa e iniciar unos mínimos pasos regeneradores, son dos: superar de forma justa la prolongada crisis social y económica y las políticas neoliberales regresivas, y encauzar el conflicto catalán y territorial desde una posición dialogada y democrática. Voy a analizar, sobre todo, este segundo punto en el marco de esta etapa transitoria hacia el escenario político definitivo tras las elecciones (municipales, autonómicas, europeas y generales) pendientes y las opciones estratégicas que subyacen para determinar este inestable periodo provisional.

La cuestión territorial es un elemento crucial para la estrategia socialista de construir un camino intermedio entre el nacionalismo independentista y el españolismo conservador e inmovilista de las derechas centralizadoras.

Los límites de la estrategia socialista

Empiezo por Cataluña y la posición del PSC, para explicar su conexión con el PSOE, la estrategia socialista y las expectativas de cambio. Sánchez e Iceta, acertadamente, pretenden, al menos, desactivar la enorme crispación política, legitimar una oferta de aproximación a concretar a medio plazo (ampliar el autogobierno, reformar la Constitución y leyes orgánicas) y crear una esperanza de convivencia (sin medidas punitivas y reforzando la bilateralidad). Todo ello es positivo en sí, aunque también esté vinculado con el objetivo adicional de la dirección socialista de mejorar su representatividad electoral y su poder institucional. Busca encarar mejor las reformas consiguientes en la siguiente legislatura, cuyo alcance no está determinado y estaría condicionado por las decisiones sobre los nuevos equilibrios y las alianzas de preferencia.

El pacto del PSC con la derecha catalanista de Unió, en una especie de compromiso *berlingueriano*, no ha dado los resultados esperados; su tarea era

⁹ Publicado por *Nueva Tribuna*, 31-7-2018

y es ensanchar su campo propio para aspirar a ser centro hegemónico y articulador de un acuerdo (a la italiana) con la parte autonomista de la derecha catalana y condicionar a la parte moderada del PDeCat y la 'realista' de ERC. Su confianza es evolucionar hacia un nuevo catalanismo político cultural, aunque dejando en un segundo plano o moderando el imprescindible cambio en las políticas sociales y económicas, necesario para la mayoría popular catalana. Es decir, con la contención y subordinación de *Catalunya en Comú-Podem* y la opción transformadora que representa.

Pero su voluntad está, además, condicionada por los límites fácticos y los intereses electorales del PSOE para ser determinante en el resto de Estado, es decir, para no desligarse de la 'responsabilidad de Estado' y la estrategia conjunta con PP y C's que culminó en la aplicación del art. 155.

En lo socioeconómico ese plan no es muy alejado del modelo socioliberal de la tercera vía (laborista) o el nuevo centro (socialdemócrata alemán), solo que en un contexto de mayor gravedad de la situación socioeconómica de la mayoría social y con su mayor responsabilidad directa en la gestión regresiva de la crisis. Su fracaso pasado y reciente, incluido el del Gobierno Zapatero-Rubalcaba, ha sumido en una fuerte crisis a la socialdemocracia europea (particularmente la francesa, la griega y la italiana), salvo cuando se han enfrentado como 'izquierda' a la derecha (Portugal, Reino Unido). Es la actual encrucijada del PSOE. Su ventaja es que, dado el actual bloqueo y el fracaso de las dos principales estrategias contendientes -unilateralidad e inmovilismo con represión / judicialización-, tiene margen para desandar esa peligrosa polarización y generar esperanza.

Cuáles son los límites. Sin un fuerte compromiso con el giro de progreso de la política social y económica es difícil una política integradora y pluralista en lo nacional y en el desarrollo del autogobierno. Las mediaciones son importantes. Una parte independentista no es nacionalista o no lo es por motivos identitarios sino como respuesta instrumental más favorable en lo socioeconómico. Si el diagnóstico de los motivos de la grave situación y el malestar social es *España nos roba*, la solución está clara: la independencia como mediación institucional para salir de la crisis y garantizar la mejora socioeconómica del pueblo catalán. Para el bloque independentista es irrelevante que la dirección político institucional y económica esté en manos de una derecha neoliberal, con las

mismas constricciones fácticas, determinación estratégica y acuerdos europeos que la derecha española. Y lo que ha sabido eludir: su responsabilidad directa en esa crisis y sus políticas regresivas.

La transferencia de responsabilidad de la derecha catalana

La derecha neoliberal e independentista catalana (llena de corrupción) ha tenido relativamente éxito en la transferencia de responsabilidades, en su gestión discursiva de trasladar a otra esfera, a la competencia nacional y la división popular, la respuesta social y económica. El enemigo son los 'otros', España y los españoles, en vez de los poderosos de ambos ámbitos, subordinados al bloque de poder europeo (y mundial). Esa idea tiene credibilidad en la mitad de los catalanes, aderezada con el inmovilismo de Rajoy y la (supuesta) irreformabilidad del Estado. Precisamente, el mayor realismo y sensibilidad social de ERC le lleva a una aguda confrontación con *Junts per Catalunya* y ahora la *Crida*, no solo por la hegemonía del bloque independentista sino por abrir nuevas posibilidades de acuerdos más transversales y operativos y menos regresivos en lo social.

La cuestión es que, de la otra mitad, gran parte de las clases trabajadoras castellano hablantes, han tenido una reacción defensiva previsible ante el peligro inminente de la secesión, con la percepción de un riesgo de incertidumbre vital e identitaria. Han optado por priorizar el amparo y la protección estatal, en este caso a través de la opción mayoritaria de Ciudadanos, no manchada de corrupción y responsabilidades de gestión. Así, el profundo y amplio malestar cívico (en Catalunya y España) por la grave situación social y económica ha estado mediatizado y sin salida institucional. El continuismo de las políticas públicas y la inercia neoliberal la consolida.

La intensificación del conflicto nacional ha fracasado para las dos estrategias extremas -inmovilismo y secesión-. Esa dinámica no es una opción viable para cada una de las dos partes, aunque sea parcialmente funcional para la cohesión y la preponderancia de sus principales actores en cada campo. Es época de distensión y diálogo, aunque sin perspectivas claras. Y la reacción defensiva identitaria unionista tampoco aporta una solución en este campo social. La aminoración de esa polarización abre la posibilidad de poder

expresar más directamente la necesidad de una agenda social efectiva. Solo que, en el PSC y ERC, teóricamente progresistas o socialdemócratas, no les es cómoda esa prioridad social por sus alianzas y compromisos respectivos con los distintos poderes económicos e institucionales.

En todo caso, junto al bloqueo interesado por ambas derechas, esas izquierdas socialistas y republicanas, cada una con sus motivos específicos, mantienen una orfandad estratégica para abordar la cuestión social, lo que puede llevar también a la frustración cívica por la ausencia de respuestas socioeconómicas suficientes. Es su desafío histórico, con evidente influencia en las condiciones y los ritmos del cambio de progreso. Y hace necesaria una tercera posición en lo social y lo nacional, que hoy representa con mayor claridad, aunque sin suficiente capacidad representativa, los *comunes*. Todavía hay un gran trecho para conformar un nuevo acuerdo progresista con una fuerte agenda social y una solución negociada y razonable para la cuestión nacional.

Pero eso le llevaría al PSC-PSOE a un nuevo pacto tripartito de izquierdas en Cataluña (que fuese mayoritario respecto de la suma de ambas derechas) y un gobierno de progreso (con *Unidos Podemos* y sus aliados) en España, con un debilitamiento representativo de las derechas, comprometido con un cambio sustantivo, social y plurinacional. Por tanto, el pacto parlamentario por el desalojo del Gobierno de la derecha del PP permite el cuestionamiento de la estrategia de las derechas españolistas, neoliberal y uninacional, junto con el consiguiente bloqueo social y territorial.

Pero el boicot a ese camino intermedio, incluido un nuevo *Estatut*, parece que está cantado para PP y C's. Ellos creen, aunque sea dudoso, que esa posición extrema de nacionalismo español conservador (también frente a la inmigración) les es funcional para recuperar su hegemonía en el resto de España y consolidar el bloque unionista bajo su dirección, debilitando a las fuerzas progresistas en los dos ámbitos. La normalización institucional, incluida la imprescindible reforma constitucional y la estabilidad gubernamental, sería difícil. Se trasladaría a la siguiente legislatura con nuevos equilibrios que cada parte se apresta a mejorar, lo que dificulta hoy acuerdos sustantivos reales.

El ensanchamiento electoral del *Partido Socialista*

En el ámbito estatal se han empezado a dar pasos positivos, la mayoría limitados para el bienestar mayoritario de la gente y simbólicos, que tienden a buscar el ensanchamiento electoral del *Partido Socialista*. Pretende garantizar su preponderancia en los comicios e instituciones locales y autonómicas y, especialmente, en el próximo gobierno que salga de las elecciones generales. La finalidad práctica de los cambios beneficiosos para la mayoría social se subordina a la capacidad retórica conseguida para ese objetivo partidista de recuperar parte de su anterior electorado huido por el centro o por su izquierda. La actividad discursiva o publicitaria predomina sobre los cambios reales y su dimensión práctica para la gente, condicionados por ese doble movimiento y sus compromisos fácticos con los eufemismos de 'estabilidad económica' o 'responsabilidad de Estado'. Veamos los condicionamientos y, sobre todo, las insuficiencias de sus pretextos para no encarar los pasos necesarios para generar una dinámica y un programa de reformas sustantivas.

Por un lado, hay que reconocer que hoy no hay suficientes apoyos parlamentarios y europeos para introducir cambios sustantivos necesarios en materia social y económica. Las derechas, incluida la vasca y la catalana, tienen mayoría. Es la justificación principal para no abordar medidas relevantes: incremento sustancial del techo de gasto y la fiscalidad progresiva, derogación de las reformas laborales, financiación autonómica suficiente para servicios públicos -sanidad, educación, dependencia, rentas sociales...-, firmeza ante la desigualdad social, la devaluación salarial y la precariedad del empleo, contundencia -no solo declarativa o punitiva- en las políticas de género, cambio de modelo productivo-energético con nuevas especializaciones productivas y sostenibilidad ambiental...

En todos esos aspectos el Gobierno anuncia medidas parciales con abundante embellecimiento mediático, mayor ante las críticas exacerbadas de las derechas y los foros económicos. La cuestión es combinar pasos concretos e inmediatos que ataquen las situaciones más gravosas de la gente, junto con los caminos y la garantía de cambios más ambiciosos tras el deseable cambio institucional, electoral y de clima sociopolítico.

Pero lo que esconde ese pretexto de 'no hay condiciones' es la falta de determinación para crear desde ya las condiciones sociopolíticas e

institucionales suficientes para su realización tras las próximas elecciones locales y generales: mayor apoyo parlamentario progresista, negociación europea, activación cívica y alianzas políticas y sociales firmes de las fuerzas de progreso. Es decir, la definición de una estrategia y una voluntad con un programa de cambio sustantivo reuniendo las fuerzas políticas y sociales necesarias. Pero la incógnita mayor de la dirección socialista es su indeterminación calculada sobre su proyecto futuro y las alianzas preferentes correspondientes.

O sea, **el camino gubernamental actual, especialmente en los campos socioeconómico y territorial, es compatible con una bifurcación futura hacia dos tipos de salida, ya presentes en estos dos años de bandazos y divisiones socialistas y que son incompatibles: una opción de gran centro** (a la francesa corregida, no tanto a la alemana, dirigida por la derecha y en otro contexto), **u otra de cambio de progreso** (a la española o valenciana, superadora de la portuguesa). Para cualquiera de las dos y, por tanto, funcional para cada una de ellas, vale su cálculo de incrementar la hegemonía socialista frente a los dos competidores directos, *Ciudadanos* y el grupo confederal de *Unidos Podemos-En Marea-En Comú Podem*. Es su interpretación de ser izquierda: poder girar y aliarse con el centro derecha o con las fuerzas del cambio de progreso. O hacerlo al mismo tiempo, en unas cosas (sustanciales y retóricas) hacia la derecha y otras cosas (secundarias y simbólicas) hacia su izquierda.

Trata de tener más margen de maniobra, de centralidad, debilitando la influencia de las otras dos partes, en la aplicación de su actual plan preelectoral, así como en la gestión negociada del programa y el reparto del poder gubernamental, una vez pasada la transitoriedad o provisionalidad de la actual fórmula de gobierno monocolor sin pactos claros y alternativos de gobierno. Es el objetivo inmediato socialista de conseguir mejorar sus equilibrios representativos y de apoyos institucionales o la gestión compartida (asimétrica) en las elecciones municipales y autonómicas y europeas de 2019, con el posible experimento del adelanto de las andaluzas.

Su alternativa inmediata es ganar representatividad a costa de sus competidores. La salida de su encrucijada, hoy con opciones ambivalentes, es doble: hacia el continuismo de fondo o hacia el cambio real, aunque no

necesariamente incompatibles en todos los campos, proporciones y momentos. Para no descarrilar en estos continuos giros prácticos y simbólicos y tener coherencia política y retórica debería tener una orientación estratégica clara, cosa dudosa. Parece que ésta no consiste en un proyecto socioeconómico y territorial definido, más allá de corregir con algunos gestos y medidas parciales el fuerte derechismo del Gobierno de Rajoy. O bien, lo esconde y supedita al objetivo estratégico partidista: ganar influencia electoral y poder. Pero una vez superado el bipartidismo y siendo difícil la estabilidad de un gobierno monocolor, es decir, estando clara la necesidad de pactos, esa indeterminación por la preferencia estratégica y de alianzas ni ayuda a fortalecer un campo propio ni genera confianza suficiente para articular una alianza duradera. Lo sustantivo: no hay preferencia ni apuesta futura por una alianza de progreso. Y la alianza centrista es desechada por la actitud de C's. El resultado: cambiar algo, para que (casi) todo siga igual. El riesgo: prioridad por su interés partidista y la escenificación mediática y actitud solitaria y prepotente con las fuerzas del cambio.

La indeterminación estratégica socialista y la opción de gran centro

Por otro lado, está la opción de *Ciudadanos*, con la necesidad actual de su readaptación estratégica y discursiva. Debería suavizar su extremismo ultraliberal, centralizador y antinacionalista y corregir su expectativa y su soberbia de ser la fuerza (casi) exclusiva del centro derecha, con el debilitamiento del PP y el *sorpasso* al propio PSOE. Su apuesta derechista por ganar la mayoría parlamentaria (con lo que quede del PP) es difícil que fructifique; pero, sobre todo, su radicalización centralista obstaculiza la colaboración socialista. Haría más difícil la consecución de esa operación gran centro (a la francesa) que da por supuesto un fuerte debilitamiento socialista y un perfil centrista regenerador. Solo cabría un gran centro (a la española) tras su fracaso representativo (quizá ya en las elecciones locales), al menos relativo respecto de sus expectativas hegemónicas del llamado centroderecha, y su readecuación estratégica y discursiva, consiguiendo un giro programático hacia el continuismo económico y territorial. Es lo que ya hizo, admitiendo una posición subordinada en un Gobierno socialista, pero con un plan económico y

territorial continuista y la contrapartida del aislamiento de las fuerzas y la dinámica del cambio de progreso.

Por tanto, ese refuerzo de la centralidad socialista busca aumentar las distancias con las fuerzas del cambio, la no dependencia excesiva de los acuerdos municipales y autonómicos con *Unidos Podemos* y sus aliados y atraerse una parte desactivada de su electorado. Supone desarrollar ligeros cambios legislativos y políticos por el nuevo gobierno, no tanto para iniciar un camino significativo, aunque fuese lento, hacia unas reformas sustantivas, como muestra su posición ante el techo de gasto; sino para, con el pretexto de la ausencia de apoyos parlamentarios suficientes hoy, instalarse en la adaptación de una política de gestos contradictorios, con las expectativas de algunos cambios y la garantía de estabilidad social, económica e institucional. Es decir, de justificación de la renuncia a cambios sustantivos para la gente y legitimación de una vía de propaganda para ganar apoyos sin compromisos explícitos. Supone la indefinición y la dificultad de conformar un nuevo contrato social de progreso y quedar a la espera de una operación hegemónica de gran centro.

Por tanto, el plan gubernamental socialista subordina su acción política al objetivo del rédito partidista dando por supuesto ese nivel de legitimación existente y su ensanchamiento electoral en los dos frentes al mismo tiempo. El principio de realidad o, mejor, la mirada estrecha sobre los condicionamientos inmediatos, junto con el consenso con las estructuras de poder, harían abandonar la actitud transformadora y una estrategia firme para ganar, conjuntamente, las fuerzas de progreso a las derechas e imprimir un cambio real. Así, ahora, sin las derechas vasca y catalana, no se podrían abordar los cambios socioeconómicos, y la oposición fáctica -interna y externa- y de las derechas impedirían avanzar en la plurinacionalidad. Resultado: cambios limitados, abundante retórica embellecedora, asentamiento en el poder institucional... y continuismo respecto de los graves problemas y conflictos sociales y democráticos.

Ahora bien, ese posibilismo de la dirección socialista no es del todo realista. Está prejuiciado, como todo el análisis justificativo anterior de que los números parlamentarios y la dinámica sociopolítica supuestamente normalizadora no eran suficientes para sustituir a Rajoy y garantizar una alternativa progresista.

O que solo era posible su pacto centrista con *Ciudadanos* y la completa subordinación de *Unidos Podemos* y sus aliados. Pero, sobre todo, evita poner las bases políticas para la derrota de las derechas y la victoria de las fuerzas progresistas, que den paso a un cambio, auténticamente de progreso en lo social y lo nacional, con un fuerte apoyo social que afronte los obstáculos fácticos, económicos, europeos e institucionales.

El reto sin abordar por la dirección socialista es la ausencia de una estrategia firme para superar el enquistamiento de la cuestión social y la cuestión nacional, la tentación del aislamiento político de las fuerzas del cambio, sin una actitud colaborativa clara, y la pretensión de normalización social, con el cierre total y definitivo de la dinámica de cambio sustantivo, socioeconómico e institucional abierto esta última década. Hay un conflicto analítico con implicaciones políticas. De él se puede derivar la socialización forzada de una visión posibilista de la realidad que acentúe la simple normalización institucional y la adaptación ciudadana. Pero, sobre todo, hay una encrucijada estratégica con impacto para el futuro de progreso, el papel de la socialdemocracia y los desafíos para las fuerzas alternativas.

Esa perspectiva gubernamental no es un modelo de renovación socialdemócrata para Europa, con unidad popular y progresista, en una Europa más justa y solidaria; sino una opción de adaptación negociada a la pertenencia a la nueva clase política dominante europea bajo hegemonía alemana (centroeuropea) y el eje Merkel-Macron, con la subordinación del SPD y la socialdemocracia ibérica. O sea, un gran centro (derecha) europeo.

El cálculo idealista de esa nueva tercera vía, más socioliberal y jerárquica que auténticamente progresista y democrática, es que ese papel algo autónomo y periférico no llega al reformismo progresista de base popular de antaño y se queda en leves modificaciones superficiales, culturales o cosméticas. Por tanto, no es suficiente para legitimar socialmente un amplio cambio sociopolítico con la fuerza cívica y democrática necesaria para enfrentarse a los poderosos y promover cambios relevantes en beneficio de las mayorías sociales. Es decir, solo da para estabilizar un camino solo simbólico y de gestos y una corriente política indecisa o confusa que difícilmente puede representar un futuro mejor para las mayorías populares.

Este camino transitorio, por tanto, no es totalmente unitario, colaborativo y de confianza entre las fuerzas favorables al cambio gubernamental. No hay un acuerdo estratégico sobre los objetivos de cambio, el respeto mutuo y la colaboración leal. La indeterminación política, la geometría variable, el control de los ritmos y el calendario monopolizados por el presidente Sánchez no generan confianza suficiente ni superación de la incertidumbre entre actores políticos y sociales, por mucho de que vayan cubiertos por buenas palabras, pequeños acuerdos y gestos de diálogo y consenso.

En ausencia de relevantes planes conjuntos o unitarios beneficiosos para ambas partes y, sobre todo, para la gente común y con una interpretación y orientación compartida es difícil tejer las condiciones para ensanchar el campo progresista en detrimento de los auténticos adversarios de las derechas. Por encima sobrevuela y condiciona la voluntad socialista de dar la vuelta al casi empate representativo del campo progresista y de izquierdas, asentando un nuevo reequilibrio hegemónico, nostálgico de un bipartidismo renovado (por la derecha) y corregido (por la izquierda, pero sin contrapesos fuertes de poder) y con mayor autonomía de la dirección del *Partido Socialista* respecto de sus dos lados y la movilización popular.

La ambivalencia clásica de la socialdemocracia, condicionada entre la representación de las mayorías populares y su dependencia de los núcleos de poder, derivaría en un nuevo discurso amable para la gente a nivel mediático y una política real continuista, incapaz de satisfacer las principales demandas populares y democráticas, o sea, un giro social y una reforma plurinacional. No se movería del consenso europeo liberal-socialdemócrata, sin implementar una salida justa de la crisis social y económica, ni transformaría la funcionalidad neoliberal desigual e insolidaria para promover una opción social, integradora y democrática en el ámbito estatal y el europeo. Sería una opción débilmente democrática y socialmente fallida respecto de las necesidades sociales y democráticas de amplias mayorías ciudadanas.

La tendencia al desencanto y la frustración volvería a arrastrar la credibilidad de la dirección socialista y, lo que es peor, podría favorecer la recomposición y dominio de las derechas, incluso con riesgos de refuerzo conservador y autoritario. Es fundamental la responsabilidad de la dirección socialista sobre cómo encara esta encrucijada. Se derivan la esperanza o la

frustración social. Y, en todo caso, constituye un desafío estratégico para las fuerzas del cambio: apostar, junto con la activación cívica, por acuerdos sólidos de progreso que corrijan la ambivalencia socialista.

10. Nueva etapa en Cataluña¹⁰

La encrucijada y los tipos de respuestas que hoy se viven en Cataluña respecto del modelo social y territorial son un motivo de reflexión estratégica y teórica. Esa experiencia contiene importantes enseñanzas y supone un fuerte impacto para una transformación sociopolítica profunda en España (y los países del sur europeo). Por otro lado, con el nuevo Gobierno socialista y el desalojo del PP se ha iniciado un nuevo ciclo político, con un nuevo clima para abordar la cuestión social y el conflicto territorial.

En primer lugar, explico la encrucijada catalana y las características del nuevo escenario, haciendo hincapié en la necesidad de superar la dinámica de bloques nacionalista y combinar una posición solidaria-integradora en lo nacional con una imprescindible agenda social sustantiva. En segundo lugar, analizo el dilema del nuevo Gobierno socialista, haciendo referencia a su posición respecto del problema social y, sobre todo, problema territorial y cómo afecta al cambio de progreso en Cataluña y España.

En Cataluña se han producido, en distintos momentos históricos, experiencias sociopolíticas y culturales muy valiosas para cambios de progreso en España, emancipatorios e igualitarios. No hace falta remontarse a su tradición republicana, a su papel en la lucha por la democracia o al carácter avanzado de sus movimientos sociales, desde el movimiento obrero y sindical hasta los movimientos feminista, ecologista, vecinal o pacifista y anti-Otan (por cierto, uno de los territorios y temas donde los movimientos sociales ganaron un referéndum al poder establecido).

En esta última fase, desde una perspectiva transformadora, hay que partir de la amplia, pacífica y democrática movilización social, simbolizada por el 15-M, como expresión del conjunto de protestas sociales y laborales por la democratización y los derechos sociales, contra la precariedad y frente a las políticas regresivas y el autoritarismo con los que la clase gobernante (europea, española y catalana) ha respondido a la grave crisis social, económica e institucional. Desde sus distintos sectores populares, intelectuales y de las izquierdas se han realizado muchas aportaciones políticas, fruto de inspiración

¹⁰ Este texto es la suma de dos artículos editados en *Público* (5-8) y *CTXT* (8-8-2018).

para el conjunto de las fuerzas progresistas y alternativas del Estado. Desde una situación 'externa' pero con esa motivación de aprendizaje y comprensión para las tareas del cambio en España, me atrevo a realizar las siguientes reflexiones.

La realidad nacional de España es diversa y mixta

Su plurinacionalidad es compleja. La metáfora nación de naciones es incompleta. No hay cuatro (o más) naciones homogéneas a confederar, separar o someter. La identidad española está presente en todas ellas (incluido Cataluña y Euskadi), con variadas fórmulas de pertenencia intermedias, mixtas o mestizas. Son sociedades diversas y plurales en lo identitario nacional con muchos elementos comunes e iguales derechos cívicos.

En el caso de Cataluña una mayoría en torno al 70%, según distintas encuestas, incluidas las del CEO -el CIS catalán-, tiene un sentido de pertenencia doble catalán-español o español-catalán. Es decir, son minoría las personas que se sienten solo catalanas (en torno al 20%) y más minoría las que se sienten solo españolas (inferior al 10%). Si en el terreno político se abusa de la identificación de dos bloques, casi paritarios, como 'unionistas' o 'independentistas', la identificación identitaria es más abierta, con una tercera posición mixta e intermedia mayoritaria.

Por tanto, las identidades nacionales en el interior de esos espacios son más diversas y complejas, así como su interacción democrática e intercultural y su convivencia o mestizaje cívicos. La relación entre ellas en los distintos territorios y la articulación democrática del conjunto es una cuestión crucial para la construcción de una ciudadanía cívica, un país igualitario o una relación fraterna entre sus pueblos.

Además, **no puede haber una solución democrática y solidaria si no es a través de un fuerte contenido social, favorable para las capas populares**. Es decir, si no hay un debilitamiento de las derechas de los dos ámbitos y su respectivo proyecto, *Ciudadanos* y *Partido Popular*, por un lado, y *Junts per Catalunya*, la antigua *Convergencia* de Jordi Pujol, por otro. Su carácter dominante en lo social es compartido: neoliberal y regresivo, con una estrategia sistemática desde el año 2010 y unos efectos antipopulares. Y en lo

nacional cada una de las dos partes se ha deslizado hacia un nacionalismo excluyente, con fuerte aparato institucional, económico y mediático detrás y en competencia. Predomina su respectivo plan homogeneizador en torno a un nacionalismo prepotente, sea bajo una identidad española conservadora y uninacional, sea bajo una supuesta identidad catalana, esencialista y antiespañola.

Esa pugna exclusivista entre identidades nacionales oscurece su posición similar en lo socioeconómico y les sirve para mantener su política neoliberal y antisocial y legitimar su poder. Hay división en la opción institucional: independencia, porque *España nos roba* e impide avanzar económicamente y como pueblo; o unidad estatal, como garantía del crecimiento económico y seguridad y normalización política. Las dos derechas nacionalistas hacen frente a su crisis de legitimidad social y buscan la continuidad de una política neoliberal y el refuerzo de su poder en cada ámbito. Es, sobre todo, la lucha entre dos fracciones de las clases dominantes, diferenciadas por su interés corporativo nacional, capaces de representar otros objetivos legítimos y a distintas capas populares y de izquierda. Pero, a pesar de esa transversalidad en la composición social, ni su gestión y su modelo socioeconómicos, ni sus élites dirigentes vinculadas a los grupos de poder económico-institucional, ni sus talentos político-culturales impositivos, unilaterales y poco respetuosos con el pluralismo ofrecen un perfil progresista y 'popular'.

Por tanto, **en la sociedad catalana y española se han producido dos procesos contrapuestos con emergencias nacionalistas de ambos bloques de poder neoliberal, catalán y español**, dirigidos por élites dominantes (económicas e institucionales), radicales en su posición nacionalista y su expresión simbólica pero representantes de los intereses del gran poder económico. Al proceso independentista del nacionalismo catalán se ha opuesto un emergente nacionalismo español en Cataluña y en el resto de España, conservador, unionista y con gran apoyo estatal. Se ha producido un choque de ambas estructuras de poder y de legitimidad democrática, con el apoyo a cada una de ellas de casi la mitad de la sociedad catalana, y junto con dos relatos contrapuestos.

Superar el bloqueo existente

Existe un bloqueo político. Por un lado, persiste la incapacidad fáctica para imponer la vía unilateral a la independencia, la construcción operativa de la república catalana, sin suficiente legitimidad democrática, reconocimiento internacional o apoyo económico, así como su dificultad operativa y legal para instrumentar unilateralmente su poder casi-estatal de la administración de la *Generalitat*, incluido las fuerzas de seguridad de los *Mossos d'esquadra*. Por otro lado, la débil legitimidad de la imposición estatal y el inmovilismo del *estatus quo* territorial, con el interés instrumental de las derechas estatales de consolidar la conformación de un electorado definido por un españolismo conservador y reaccionario e impedir una dinámica de progreso en ambos ámbitos.

Las dos tendencias son poderosas y su confrontación es funcional para ellas. Así, sus beneficios mutuos hacen prever un largo camino para una salida negociada. Pero algo empieza a cambiar en este tema. Por una parte, hay una mayor flexibilidad, con nuevos gestos y retórica, por parte del nuevo Gobierno socialista, tras la exitosa moción de censura avalada por el grupo confederal *Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea*, junto con *Compromís* y las fuerzas nacionalistas vascas y catalanas. Por otra parte, existe un mayor realismo en una parte del bloque independentista (ERC y PDeCAT) respecto de sus límites fácticos y democráticos, descartando la aplicación inmediata de la vía unilateral para la secesión; aunque todavía con la hegemonía del núcleo político en torno a Puigdemont y su nueva articulación de la *Crida Nacional per la República*, como instrumento para imponer su liderazgo legitimista, su estrategia de confrontación y la subordinación de ERC.

Pero, cabe preguntar **¿Cuáles son los puntos débiles de esa polarización instrumental de ambas derechas desde dos nacionalismos-estatistas excluyentes?** Son dos, uno en cada campo. En el ámbito nacional la pluralidad de la propia sociedad catalana, con una identidad mayoritaria mixta catalana-española o española-catalana. Es decir, la identidad exclusivamente española es minoritaria y la identidad nacional sólo catalana es algo más amplia, pero también minoritaria. La cristalización en dos campos políticos antagónicos, independentista y unionista, es, en cierta medida,

sobrevenida, forzada e instrumental. No es la dinámica más favorable para el bienestar económico, social y cultural de las mayorías. Pero, también hay diversidad de las identidades nacionales en el conjunto de España y en muchos de sus territorios. Por tanto, España necesita de un proyecto de país de países más abierto y democrático, incluido una reforma constitucional de corte federal con componentes confederales y respetando la voluntad democrática de cada pueblo. Su expresión es necesaria, especialmente, cuando persiste el desacuerdo y hay que regular una salida democrática pactada.

Es decir, **la realidad de un Estado uninacional y centralizador no responde a la situación diversa y plurinacional de España, ni tiene suficiente legitimidad democrática e identitaria. Tampoco para resolver el problema catalán.** Es imprescindible articular las soberanías compartidas o cosoberanías, de forma similar a las del ámbito europeo, así como las gobernanzas multinivel, incluido el municipalismo, cada vez más importante.

En el ámbito social y económico se ha producido un agotamiento y deslegitimación de las políticas de austeridad y recortes sociales. Hay un deseo mayoritario de las clases populares de garantizar un presente y un futuro mejor en las condiciones laborales y de empleo y las prestaciones y servicios públicos, así como en los derechos sociales, civiles e igualitarios básicos. En particular, han sido expresivas las recientes movilizaciones sociales por la igualdad de las mujeres y unas pensiones dignas. Es un tema que requiere una urgente agenda social de reformas sustantivas, que la actual confrontación institucional e identitaria la subordinaba, aplazándola *sine die* o inventando caminos falsos- Su realización es clave para conseguir la clase política una mayor legitimidad cívica y avanzar en un nuevo ciclo de progreso.

La pugna por un país integrado y transversal en lo nacional, bajo criterios de convivencia democrática e intercultural, y socialmente avanzado, forma parte de la mejor tradición del catalanismo progresivo y las izquierdas democráticas. Pero esta tercera posición, defendida por *En Comú Podem* y en parte por el PSC, debe superar el actual reto político, la consolidación de ese camino transformador doble, social y nacional, y avanzar en las correspondientes respuestas estratégicas y teóricas. Su experiencia y

sus lecciones son decisivas para desarrollar el cambio de progreso en España (y la U. E.).

El nuevo escenario catalán

El fracaso de la construcción inmediata de una República independiente catalana refleja una realidad desigual entre el Estado español y el bloque independentista en relación con la capacidad respectiva de poder y de legitimidad democrática. Esa ofensiva fallida en la implementación operativa de un Estado propio, ahora se reinterpreta como un ensayo general del que extraer enseñanzas tácticas. Dicho de otra manera, la élite independentista ha cometido un error de apreciación de la relación de fuerzas y de estrategia política, basadas en su (supuesta) capacidad de imposición unilateral de la independencia. Para el independentismo la nueva etapa consiste en mantener esa retórica y ese emplazamiento de confrontación junto con una gestión más comedida, con un equilibrio no fácil, hasta otra fase en que esté más claro el desequilibrio ventajoso en la relación de fuerzas, de legitimidad democrática y de capacidad de poder, para acceder a un Estado propio.

Los últimos hechos indican, por un lado, la persistencia de su objetivo de implementar un Estado independiente y, por otro lado, una evaluación más realista de sus dificultades y un camino más operativo y menos frustrante. Tras el cambio de clima político del nuevo Gobierno socialista y su oferta de transitar hacia una fórmula intermedia y gradual, se trata de analizar la posibilidad de andar cierto trecho del camino hasta otra etapa por determinar por todas las partes.

Supone un reajuste de diagnósticos y estrategias, así como una adecuación a los intereses electorales a corto-medio plazo (elecciones municipales y generales) a reforzar por cada parte, en este nuevo proceso dialogado, de emplazamiento discursivo y forcejeo de poder. Puede durar hasta, al menos, alumbrar un nuevo Gobierno estatal, tras las próximas elecciones generales, y una nueva configuración del poder municipal, sobre todo en Cataluña, con el Ayuntamiento de Barcelona como símbolo e institución de referencia.

El irrealismo independentista

Empiezo por el componente idealista. El bloque independentista tiene una gran base estructural de poder institucional, económico y cultural. Sin embargo, la confianza desmedida en el efecto político-práctico de la decisión jurídica unilateral del *Parlament*, sobre la base de un poder fáctico propio ya constituido, pero con soberanía limitada, ha devenido en una sobrevaloración de la capacidad de ambos ámbitos, formal y de poder, para construir la República independiente. Más claramente, cuando la legitimidad democrática como mayoría parlamentaria era mínima y como mayoría social insuficiente.

Por tanto, **ha habido una sobrevaloración de la capacidad operativa de las formas jurídicas para implementar un proceso real de secesión y culminar la construcción de un poder estatal independiente.** El bloque independentista ha dado por supuesto que este último ya estaba (casi)constituido a falta de la formalidad jurídica soberana, infravalorando la capacidad real del poder estatal, sus instituciones, incluido el poder judicial y las fuerzas de seguridad, así como sus vínculos europeos y económico-financieros. Pero, además de la sobrevaloración de su (contra)poder y sus ventajas en la relación de fuerzas con el Estado, su principal error (interesado) ha sido la infravaloración de su limitada legitimidad ciudadana, escondida tras la sobrevaloración del relativo éxito de la consulta del 1-O como movilización social masiva. Es decir, se ha producido una desconsideración de la oposición social de casi la mitad de las personas catalanas. Ello conlleva una escasa valoración del pluralismo y la gestión intercultural o nacionalmente transversal.

En ese contexto, y aun tenido una base de poder y de legitimidad significativas, **la intensificación discursiva y movilizadora del bloque independentista también ha demostrado sus límites fácticos y democráticos para extender su hegemonía a través de este proceso e imponer unilateralmente un Estado independiente.**

Además, adelantan la tarea de articular un nuevo *procés* sin renunciar al objetivo estratégico de la independencia, incluso unilateral, modulando las tácticas y los ritmos. Por un lado, 'acumulando más fuerzas fácticas', intentando autonomizar más la gestión del aparato institucional, incluido el de las fuerzas de seguridad -*Mossos*- y el mediático -*TV3*-, y un mayor control económico; y, por otro lado, incrementando su legitimidad democrática, con

nuevos emplazamientos discursivos y/o de diálogo, con la finalidad de conseguir una mayoría social cualificada y la absorción de otros sectores próximos como los *comunes*.

En el fondo, es la reedición de la misma estrategia fracasada, sin que la nueva etapa de diálogo con el Gobierno socialista pueda hacerla permisible o engañarlo astutamente con esa finalidad. Es decir, los avances en el clima político y la gestión autonómica, así como sobre aspectos estructurales, como la mejora de la financiación autonómica y mayores competencias estatutarias están envueltas en el choque-dialogado por superar dos situaciones que explican el relativo estancamiento. Por un lado, la persistencia del actual bloqueo de poder, asimétrico a favor del Estado, pero con múltiples resortes del *Govern*. Por otro lado, el empate representativo en la sociedad catalana.

El resultado es el desarrollo de esos dos proyectos contrapuestos: ganar poder y ganar legitimidad social, con un doble objetivo. Uno, independizar gradualmente el poder de la *Generatitat* (para que las decisiones jurídicas y parlamentarias sea más operativas), frente a la reacción consiguiente de reforzar el poder del Estado de derecho con reformas sociales y democráticas. Dos, conformar nuevas mayorías a través de la socialización o nacionalización intensa (en un sentido u otro) para garantizarlos.

De mantener el bloque independentista esa intención de construir un Estado propio, con la amenaza de la imposición unilateral, con las variables actuales no habría una base estable social e institucional a medio plazo, al menos hasta la realización de una consulta clara, hoy desechada por la amplia mayoría parlamentaria del PSOE, C's y PP.

Por otra parte, en Cataluña se ha roto un consenso muy amplio y de larga trayectoria desde la transición política. Es el llamado catalanismo basado en el autogobierno definido en el *Estatut*, que se rompió con el bloqueo a su reforma soberanista, muy mayoritaria en la sociedad y en el *Parlament* y el Congreso, por parte del PP y el Tribunal Constitucional en el año 2010, fuente del actual conflicto. En esa centralidad catalanista-autonomista han existido tendencias más o menos moderadas y nacionalistas (CIU/ERC) o más o menos progresistas, federalistas o soberanistas (PSC/PSUC-ICV/*En Comú Podem*). Ha habido un pacto institucional o compromiso histórico, gestionado

hegemónicamente por la derecha nacionalista (CIU) y, ocasionalmente, por el tripartito progresista y transversal en lo nacional (PSC/ERC/ICV).

No obstante, ese equilibrio está agotado y no vale la simple reedición de ese pacto entre las izquierdas y las derechas catalanas, tal como parece que quieren Sánchez e Iceta. En primer lugar, por la pugna rupturista de los dos bloques extremos, dirigidos por las derechas neoliberales respectivas (Arrimadas/Rivera/Casado y Torra/Puigdemont), gestoras de la reciente involución social. En segundo lugar, porque la solución a la fuerte crisis social y territorial conlleva un acuerdo razonable e intermedio en lo nacional, en el que mejore socialmente una amplia mayoría ciudadana. Es un camino de acercamiento que los sectores más realistas de ambos campos empiezan a considerar, pero está necesitado de una mayor relevancia de una agenda social sustantiva. Sin embargo, a ello se opone el neoliberalismo de ambas derechas, todavía más mientras puedan utilizar el pretexto de que afrontan la crisis social con más nacionalismo de cada parte.

Junto con el bloqueo de las capacidades de poder de ambos bloques principales, **el sentido de la realidad de su práctico empate social y electoral en que se ha dividido la sociedad catalana o, mejor, su clase política, se va imponiendo.** La dinámica de deshielo y el comienzo de diálogo iniciado a raíz del nuevo gobierno socialista de Sánchez, con los apoyos del grupo confederal de *Unidos Podemos-En Marea-En Comú Podem* y las fuerzas nacionalistas catalanas y vascas, ha abierto un nuevo escenario, sobre la base del equilibrio actual: insuficiente capacidad fáctica (institucional, económica, internacional, mediática) y democrática (mayorías ciudadanas amplias) para imponer la independencia de forma unilateral; dificultad para la simple normalización institucional con significativa deslegitimación del continuismo estatal y deseo catalán mayoritario de mayor autogobierno y articulación democrática.

Con el antagonismo político-institucional (casi) absoluto solo cabe ganar o perder, vencer o ser vencido. La intensificación del conflicto, con la dinámica de acción-reacción, es el método de los aspirantes a vencedores para someter o marginar a los vencidos. Ha terminado la etapa de la *Declaración Unilateral de independencia* (DUI), para hacerla efectiva de forma inmediata, así como la aplicación del artículo 155 de la Constitución con la suspensión de la

Generalitat. La nueva etapa parte de la constatación de los equilibrios de poder existentes y su continuidad, incluido los procesos judiciales.

La amenaza retórica independentista no es suficiente para modificar esa relación de fuerzas, al menos a corto plazo, aunque tenga otras funciones de cohesión del bloque, liderazgo de un grupo dirigente y erosión de la legitimidad contraria a largo plazo. El bloque estatalista del PP y C's, con exhibición de su poder, casi solo ha utilizado un relato plano: la instrumentación de su poder bajo su interpretación de la ley vigente, el aval a la judicialización en vez de la política, el diálogo o la retórica argumentada.

En una sociedad diversa como la catalana con una mayoritaria corriente social intermedia, mixta o transversal (en torno al 70%) en su actitud identitaria catalana-española e hispano-catalana la polarización entre los dos bloques políticos extremos tiende a imponer una dinámica para reducir los campos intermedios y mestizos a uno de los dos más puros u homogéneos: el catalán(antiespañol) o el español(anticatalán). De momento no se han conformado dos comunidades diferenciadas, cerradas y antagónicas. Hasta ahora, a pesar de la gran crispación político-mediática y conatos de conflicto civil, la fractura es, sobre todo, política y no convivencial, promovida por las élites institucionales de cada lado. Con esa división se pretende reducir la diversidad y forzar cada identificación nacional mixta en posicionamiento político-institucional instrumental definido hacia uno de los dos campos: Estado independiente o Estado español.

La trayectoria de polarización nacional-institucional ha tocado techo

Esa trayectoria de confrontación nacionalista-institucional ha tocado techo. Los principales actores mantienen sus objetivos. Pero, tras el bloqueo a la independencia efectiva, con la demostración de la capacidad de coerción del Estado y la constatación de la legitimidad paritaria de ambos bloques, se ha iniciado una nueva etapa, con un distinto clima político: el diálogo, la tregua táctica o el aplazamiento de los choques frontales estratégicos frenan esa dinámica perversa y favorece un contexto menos dramático para la búsqueda de unas condiciones y acuerdos, al menos, parciales, transitorios e implícitos.

Por tanto, es difícil que, a corto plazo, se modifiquen las principales claves de poder y legitimidad, los proyectos de articulación territorial y social y las alianzas. Pero, **cuáles son las estrategias de progreso para modificar el *statu quo*, con una ventaja relativa en la legitimidad representativa y respecto de la capacidad de poder.**

En primer lugar, como primer paso de distensión y/o nueva acumulación de fuerzas, es importante la desactivación de la tensión política y ciudadana, promover pequeños aunque relevantes desplazamientos cívicos electorales (el marco de las elecciones municipales es distinto al de las autonómicas), institucionales (va a ser relevante el control del Ayuntamiento de Barcelona y la configuración de los grandes ayuntamientos de su área metropolitana) y de movilización social de base y expresiva en el campo social y el nacional. No todo es conflicto o forcejeo; es preciso retomar los puntos intermedios de entendimiento que gozan de un consenso amplio, establecer treguas y aparecer como portadores del interés común.

Supone, por un lado, que cada parte, mantiene similar retórica (República catalana o unidad estatal, aun con reformas constitucionales) y una competencia abierta, electoral y de legitimación. Y cada actor se plantea cómo ensanchar su respectiva base social, los acuerdos políticos posibles y, sobre todo, cuál es la fuerza dirigente dentro de cada bloque y en la conformación de nuevas alianzas, junto con el debilitamiento de los competidores.

O sea, entramos en un escenario, al menos hasta las elecciones municipales y, más tarde, las generales donde la prioridad política de cada fuerza es de competencia, de intentar colocarse como fuerza hegemónica en los acuerdos con los grupos más afines que expresen un proyecto legitimador y clarificador de mayorías suficientes (60% de la población, dos tercios del *Parlament*), y siempre explorando sacar ventajas relativas. Pero, por otro lado, existe la pugna soterrada, discursiva y práctica, de relato y gestión política e institucional, por ejemplificar el mejor proyecto para la gente, la representación del interés general de la ciudadanía (o del pueblo) y la superación del bloqueo existente, particularmente en lo social.

En el medio o largo plazo, por parte nacionalista, siendo consciente de haber tocado techo en apoyos sociales, acarician el objetivo de conseguir esa supremacía electoral con el propio autodesarrollo, es decir, consolidando su

tarea de homogeneización cultural, prácticamente de una generación, utilizando los resortes institucionales, educativos y mediáticos. Ello sin contar otras variables sociopolíticas, económicas y demográficas (desarticulación de la UE, nueva crisis social y económica, inmovilismo o reaccionarismo del Estado, aunque el mito de su irreformabilidad se ha debilitado, socialización a gran escala de la población no autóctona...). Pero, para ello deben neutralizar los sectores intermedios representados hoy por los *comunes* o el PSC o, bien, negociar con ellos unas condiciones y un ritmo compartidos, al menos para un periodo más extenso, con el aplazamiento de la construcción de la república o la imposición práctica de la independencia unilateral.

Por tanto, conviene distinguir dos aspectos del nuevo *procés*. Uno, sus objetivos legítimos a medio plazo, la retórica o la ficción jurídica sobre el cambio inmediato y estructural del poder y el ejercicio de la soberanía frente al Estado. Dos, el reajuste de su estrategia, dada la realidad de los apoyos sociales casi paritarios de ambos bloques respecto del sistema estatal-institucional y la demostración de la capacidad operativa del Estado frente a la desobediencia y la unilateralidad del *Govern* y el *Parlament*.

Así, el bloque independentista, por un lado, debería acumular (astutamente) más poder, aunque incluso el PSOE señala unas líneas rojas en su reforma constitucional que lo impiden. No es un asunto de palabras, aunque se hable de soberanías compartidas o cosoberanías y consulta popular o derecho a decidir la posición constitucionalista con sus límites está clara: subordinación del autogobierno a la voluntad del conjunto de España y su poder (soberanía) estatal, oposición a la autodeterminación y a la independencia.

Por otro lado, incrementar la legitimidad ciudadana para sus posiciones. Y volvemos a su punto débil: para la mitad de la población catalana el discurso independentista de que una República catalana va a mejorar la vida de la gente (con el discurso de *España nos roba*), particularmente, en su bienestar social no tiene credibilidad, cuando ha sido su élite política neoliberal quien ha aplicado más fervientemente los recortes sociales. Además, se siente menos protegida nacional y culturalmente que permaneciendo en el Estado español, al menos renovado y con más autonomía y mayor sensibilidad social. Ésta es la puerta abierta actualmente tras echar a Rajoy del Gobierno.

Superar la confrontación de bloques con el desarrollo de una tercera posición

Cobra más verosimilitud la posibilidad de un arreglo compartido, aunque limitado y frágil, que disminuya el conflicto, mejore la situación de las capas populares y sea razonable para todas las partes. De ello depende, en gran medida, la credibilidad y amplitud de un tercer espacio progresista, transversal y mayoritario. Hay una pugna por su conformación y liderazgo, por un lado, entre *Partido Socialista* y *En Comú Podem* y, por otro lado, por ERC respecto a cada uno de ellos. Pero existe también un interés común de las tres partes para ensancharlo a costa del debilitamiento de los otros dos bloques hegemónizados por las derechas neoliberales y compartir mayor autonomía respecto de ellos. No obstante, esta cuestión no está clara por la dependencia del proyecto estatal del PSOE, sin la prioridad por una alianza de progreso, y la prioridad participativa de los republicanos en el bloque independentista.

La superación del conflicto nacional y el estancamiento de la preponderancia de esos dos bloques solo es posible con el desarrollo de una tercera posición con arraigo en la sociedad y en las instituciones. Junto con un acuerdo negociado en lo nacional, para superar el conflicto y la prioridad del antagonismo nacionalista-institucional entre los dos bloques, sería necesario un fuerte impulso popular alternativo, con la preferencia por un acuerdo tripartito transversal en lo nacional y de progreso o de izquierdas en lo social, aunque, de momento, no encuentra mucho eco en la dirección socialista ni en la republicana.

Es la propuesta actual de *los comunes*, compatible con el PSC y ERC, siempre que refuercen su representatividad, que necesitaría abrirse paso como la opción más adecuada frente a la doble crisis socioeconómica e institucional-territorial. Sería otra fase de reequilibrio del escenario, los objetivos y las alianzas que no parece que alcance la estrategia cortoplacista y electoral de la cúpula socialista y su contención en ambos aspectos por las presiones fácticas, o la dependencia independentista de la dirección republicana.

La necesaria agenda social sustantiva

En todo caso, **una solución intermedia entre el *estatus quo* y la independencia solo cabe realizarla con un consistente Gobierno de progreso en España y un acuerdo amplio en Cataluña**, al menos para dos de las cuestiones cruciales que afectan también al conjunto, como son el cambio de modelo territorial, ya comentado, y una agenda social sustantiva que explico brevemente.

Primero, es necesaria una nueva regulación estatutaria y constitucional, venciendo la rigidez centralista y españolista reaccionaria de las derechas, atendiendo a los derechos nacionales legítimos de Cataluña (y otras zonas), estimulando la participación popular progresista y avanzando a un modelo plurinacional y un proyecto de país, con gran diversidad interna y diferente a la idea dominante en el nacionalismo conservador español.

Segundo, es imprescindible una financiación autonómica suficiente, la más necesaria para el gasto social, aparte de la garantía para unas pensiones públicas dignas. Para ello España (con ingresos públicos de 37,9% del PIB en 2017) tiene un margen de cerca de 8,5 puntos del PIB respecto de la media de la eurozona y habiéndose rebajado un punto desde 2014.

La actual norma del timorato techo de gasto, propuesta en primera instancia y de forma unilateral e impositiva por el Gobierno socialista, no resuelve el segundo aspecto y resta credibilidad a las promesas a largo plazo sobre el primero. **La reorientación de la política económica y social es decisiva para avanzar en la resolución del problema territorial catalán, cuando el principal gasto autonómico es el social** (sanidad, educación, servicios sociales, dependencia, vivienda...). Las mejoras sociales (incluidas en campos como el empleo decente, las políticas de género o las pensiones dignas) deben ser significativas. De lo que se trata no es la consolidación de los recortes, la desigualdad y la precariedad, con el apaño de algunas pequeñas mejoras parciales. Esa situación está amparada por toda la legislación anterior de prioridad a la 'estabilidad' económica y las políticas liberal-conservadoras. Supone, por tanto, cuestionar ese marco, promover unos contundentes cambios legislativos (incluidas las reformas laborales y la LOMCE), negociar con Bruselas de acuerdo con las necesidades del país, y dar señales claras ahora de caminar hacia un cambio de progreso tras las próximas elecciones

generales, abandonando la tentación de gran centro o pactos con las derechas y abriendo una etapa de hegemonía progresista.

La negociación de un nuevo techo de gasto y los presupuestos de 2019 deben elaborarse para dar respuesta a las necesidades sociales más urgentes, muchas de ellas articuladas por la financiación de las comunidades autónomas (y ayuntamientos) que deben tener un incremento significativo. Esa firmeza en lo social y esa expectativa por el cambio de progreso es imprescindible para ganar credibilidad ante las capas populares catalanas y españolas. Además, señala un objetivo político central: garantizar a medio plazo un acuerdo más sólido y profundo de progreso. Por tanto, en este debate económico y presupuestario los aspectos centrales sobre los que hay que guiarse son las necesidades sociales y la estrategia política y el impacto sociopolítico, no tanto las variables macroeconómicas, a renegociar de forma realista con las instituciones europeas.

Por otro lado, las reticencias neoliberales *neoconvergentes* respecto del necesario giro social, con el incremento del gasto público social y los correspondientes impuestos, deberán afrontar que hay otra opción real. Así, para la mejora del bienestar de la ciudadanía catalana, se pueden incrementar sustantivamente los recursos de la *Generalitat* en un contexto español solidario, que no es la independencia y sí una solidaridad igualitaria y democrática más amplia de los pueblos de España a costa de los poderosos.

La nueva dinámica solo será posible desde la activación de las energías sociales y populares progresistas de la sociedad, por desarrollar un nuevo marco de convivencia democrática y frente a la involución social; por avanzar en un proyecto de país de países con un nuevo patriotismo cívico. **Todo ello con la combinación de esos dos ejes. Uno, integrador, solidario y democrático en lo nacional** y, en última instancia, legitimado con la consulta ciudadana correspondiente, tanto si hay acuerdo suficiente como si hay un desacuerdo relevante. **Dos, firme e igualitario en lo social, con un empleo decente, la garantía de un crecimiento económico sostenible medioambientalmente y la reversión de los recortes sociales,** mayores todavía en Cataluña que en la media de España y promovidos por el mismo consenso regresivo de la austeridad. En resumen, con **un mejor Estado de bienestar y la garantía práctica de los derechos sociales, laborales y de**

empleo, con servicios públicos de calidad, así como la atención a los cuidados y la acción tenaz por la igualdad de género y contra la discriminación de las mujeres.

En definitiva, en el actual contexto de polarización de bloques nacionales y predominio de política neoliberales y a pesar de las dificultades para su implementación, la opción más razonable, democrática y realista es una tercera posición en Cataluña, integradora y solidaria en lo nacional y progresista e igualitaria en lo social, junto con un cambio de progreso en España. Las dos dinámicas en ambos ámbitos se complementan y se necesitan.

11. El 'etnopopulismo' de Puigdemont¹¹

La derecha independentista catalana es nacionalista y neoliberal. Sus expresiones políticas *neoconvergentes*, desde el PDeCAT y *Junts per Catalunya* hasta el actual proyecto de la *Crida Nacional per la República*, bajo el liderazgo de Carles Puigdemont, han acentuado a través del *procès* su proyecto independentista. Han promovido una fuerte polarización frente al Estado español, un nacionalismo radical no inclusivo y en confrontación con la otra mitad de la sociedad catalana no independentista. Así mismo, han generado una gran activación movilizadora, discursiva y retórica.

Paralelamente, las derechas unionistas del *Partido Popular* y *Ciudadanos*, están intentando consolidar un movimiento nacionalista de carácter españolista y conservador, dentro y fuera de Cataluña, para oponerlo al proceso independentista. El anterior Gobierno de M. Rajoy se ha caracterizado por sus políticas socioeconómicas neoliberales y regresivas, así como por el inmovilismo institucional y las medidas autoritarias y represivas respecto del conflicto catalán. Además de su rigidez neocentralista y antinacionalista (periférica), su último giro de gran nacionalismo exclusivista dirige su mirada contra la inmigración.

La confrontación institucional-nacionalista, dirigida por ambas derechas, ha pasado su fase más álgida. Algo ha empezado a cambiar en los dos conglomerados no homogéneos. Por un lado, el desalojo del poder gubernamental del PP de Rajoy, con una crisis de poder y relato de las derechas, tentadas de profundizar un giro derechista y de nacionalismo reaccionario. Así mismo, el nuevo Gobierno socialista, cuyo presidente Pedro Sánchez ha sido investido por las fuerzas alternativas y nacionalistas, ha abierto un nuevo clima político, con expectativas de un talante más social y un abordaje más dialogante de la cuestión territorial.

Además, superando el bipartidismo, persiste una gran corriente popular crítica, representada por *Podemos*, *Izquierda Unida* y sus aliados y convergencias (catalana, gallega, valenciana... y agrupaciones municipalistas), con un proyecto de país de países diferenciado, democrático y plurinacional y una apuesta decidida por la democracia social y económica; es decir, existe

¹¹ Publicado en *Mientras Tanto* nº 171, septiembre de 2018

una tercera posición distinta a la de las dos derechas y susceptible de colaboración y competencia con el proyecto socialista para promover un cambio de progreso en España.

Por otro lado, se ha iniciado en el bloque independentista una reflexión interesante para reajustar su estrategia a la nueva realidad y a sus dificultades para imponer de forma unilateral la República. Dejo al margen la valoración detallada de las posiciones de *Esquerra Republicana de Catalunya*, más realistas en la búsqueda de salidas a la cuestión nacional y con mayor sensibilidad en lo social y que, según algunas encuestas, puede acceder al liderazgo independentista en el medio plazo. Y me centraré en la crítica al sector hoy dirigente del *procés* y liderado por Puigdemont / Torra: su intensificación nacionalista e independentista busca mantener su hegemonía y esconder su responsabilidad en la grave cuestión social existente en Cataluña. Es, pues, una estrategia instrumental de una élite gobernante para conservar su poder institucional y económico, sus políticas neoliberales y su hegemonía político-cultural.

Su fragilidad es que no responde a la diversidad nacional catalana ni a las necesidades socioeconómicas de la mayoría social. Tampoco se asienta en una valoración realista de las relaciones de fuerzas en España y Europa. *El objetivo real no sería la construcción de una República independiente (el fin) en pugna con el Estado español sino alimentar un procés (el medio) con la combinación de un discurso de emplazamiento rupturista y una gestión autonómica adaptativa y ventajosa, que garantice la auténtica finalidad de mantener su hegemonía institucional y la continuidad de sus políticas neoliberales con la subordinación de las capas populares y los demás agentes sociales y políticos.*

Tras esta pequeña síntesis del contexto, el objeto de estas reflexiones es la valoración de los fundamentos ideológico-políticos del nacionalismo catalán representado por el liderazgo de C. Puigdemont, en el marco del conflicto nacional y social en Cataluña y España.

Sin llegar al extremo de otros nacionalismos excluyentes, xenófobos y autoritarios de varios países europeos o al antagonismo total con otras naciones o sectores de distinto origen étnico-cultural, esos rasgos de confrontación nacionalista-institucional de ambas derechas se pueden

interpretar bajo la lógica de un nacionalismo no inclusivo, también llamado etnopopulismo, basado en el conflicto *nosotros / ellos* que busca la supremacía nacional en una sociedad plural. Es una polarización nacional singular, vinculada a la realidad plurinacional española, aunque más cerca del populismo autoritario y de derechas de C. Schmitt que del populismo democrático y de izquierdas de E. Laclau.

Este ensayo explica en qué sentido se puede hablar de etnopopulismo para analizar el nacionalismo radical de Puigdemont y la actual élite dirigente del bloque independentista, así como la reacción españolista de las derechas unionistas; por qué la lógica populista es incapaz de ofrecer una salida al conflicto social y nacional en Cataluña, y cuáles son las principales limitaciones del enfoque nacional-populista y las estrategias políticas que priorizan la independencia y esa construcción nacional.

La conclusión es clara: es necesaria una tercera opción política, integradora-transversal en lo nacional e igualitaria-solidaria en lo social, junto con el desarrollo de una teoría social, crítica y realista, para garantizar la superación de esa dinámica de confrontación hegemónica por ambas derechas exclusivistas, neoliberales y regresivas y abrir una nueva etapa de cambio de progreso, democrático y solidario, en Cataluña y en España.

El populismo como lógica de antagonismo y construcción discursiva

Comienzo por precisar algunos conceptos. ‘Popular’ es distinto de ‘populista’. Algunos autores lo confunden y a todo tipo de descontentos sociales y movimientos populares y nacionales los llaman populistas. Desde el poder establecido para descalificarlos. Desde ámbitos progresistas para visibilizar y reconocer un proceso que, dada la crisis y confusión de distintas formulaciones de izquierda, en una situación de orfandad teórica, anuncia dos rasgos básicos: su carácter popular y su tendencia ascendente.

La palabra ‘popular’ también está sujeta a la disputa por su significado. Incluso derechas europeas han formado el *Grupo Popular* en el Parlamento europeo y en España se llaman *Partido Popular*. No obstante, todavía en el lenguaje habitual la palabra popular se asocia a la gente común, a los de abajo,

a las clases trabajadoras y capas medias (estancadas o descendentes), diferenciados de las élites dominantes y oligarquías. Es menos confusa y tiene menos contraindicaciones que el significante 'populismo', y es más flexible y realista para describir el actual proceso sociopolítico que el convencional de clase social homogénea, el de individualismo liberal o el de la fragmentación postmoderna.

Sin embargo, *populista no tiene solo esa acepción sociodemográfica e indefinida políticamente, sino que posee un sentido teórico de antagonismo e idealismo discursivo, como preponderancia constructiva de la política y el sujeto. También tiene un sentido político más polisémico y problemático al estar asociado a todo tipo de corrientes sociopolíticas, desde la extrema derecha a la extrema izquierda pasando por el centro y el nacionalismo.* Además, incorpora no solo a movimientos 'populares' (de capas dominadas) sino a procesos de composición mixta, popular y oligárquica o de clases dominantes, así como nacionalistas (o neo-imperialistas).

Por tanto, para el enfoque populista la palabra 'pueblo' (o 'nación') y 'popular' no hace referencia a la pertenencia (real) a una situación o estatus social y económico de subordinación. Tampoco a una experiencia relacional y cultural de la gente común o popular de subalternidad y en conflicto con las capas dominantes (sean el 1% o, más realista, el 20%) con unos intereses, demandas y expresiones sociopolíticas y culturales diferenciados.

Para el enfoque populista son significantes cuyo significado se ha construido discursivamente por el relato, los mitos o la adhesión política promovidos por una élite. Es decir, el pueblo catalán sería no el que vive y trabaja (e interactúa) en Cataluña, concepto inclusivo con su ciudadanía civil y social reconocida, sino las personas que son (esencialmente) o se sienten (subjetivamente) catalanes nacionalistas (independentistas), excluyendo de ese significado a los no nacionalistas.

Con la prioridad de ese discurso y el consiguiente esfuerzo de socialización cultural o nacionalización identitaria, el etnopolulismo o el nacionalismo exclusivista puede construir una realidad virtual de cierre identitario, despreciando la realidad real de la interacción social concreta de la gente y su conformación sociopolítica a través de su experiencia relacional, sus vínculos sociales o su práctica político-cultural e interpretativa.

Por tanto, es insuficiente esa lógica procedimental de lo político como construcción discursiva del sujeto. Del determinismo esencialista o estructuralista se pasa a la indeterminación posestructuralista. Supone un reduccionismo del ámbito propio de lo social y la relación de fuerzas sociales, políticas y estructurales, según los contextos y trayectorias. Para esa versión idealista postmoderna es secundario la propia experiencia de subordinación de la gente, sus prácticas sociales y culturales, vividas e interpretadas. Lo importante sería la intensificación de la nacionalización del relato, controlando, eso sí, todos los aparatos de poder cultural, mediático e ideológico. La deriva peligrosa es el fanatismo y la imposición autoritaria de una doctrina y su aplicación.

Hay que precisar bien el carácter sustantivo de cada tendencia sociopolítica llamada populista, en los ejes principales en que se han dividido los campos político-ideológicos en los últimos siglos: autoritario, reaccionario, regresivo, segregador y dominador, o bien, democrático, progresista, igualitario, solidario y emancipador. Entre esos dos campos hay zonas intermedias, pero no vale la transversalidad como opción global. Existen intereses compartidos y objetivos comunes de toda la humanidad. Pero, en situaciones de desigualdad y dominación la solución no es el consenso centrista. La actitud cívica debe ser la confrontación frente a las oligarquías poderosas, opresoras o élites dominantes, en defensa de las capas subalternas, oprimidas o 'populares', con unos valores de igualdad, libertad y fraternidad.

En definitiva, la teoría populista es una lógica política basada en dos elementos: el antagonismo entre dos polos (*nosotros / ellos; abajo / arriba*), y la construcción de la política y del sujeto social a través, sobre todo, del discurso de un liderazgo. O sea, al igual que el marxismo clásico, conserva la dialéctica hegeliana; pero a diferencia de su materialismo, da un vuelco hacia el idealismo (hegeliano o postmoderno) en la interpretación y la configuración de la política. Hay una minusvaloración de la realidad social, que se considera fragmentada y pasiva, y una infravaloración de la interacción sociopolítica y cultural y la experiencia de los distintos actores. No se valora suficientemente la relación de fuerzas y las condiciones sociohistóricas, económicas y estructurales de los actores concretos. Las bases sociodemográficas y sus intereses son secundarios. La realidad se construye con el discurso (de la

élite), con los mitos y relatos que, en la medida que hay gente que los asume, permiten la constitución del pueblo. Es la política, entendida como discurso de una élite (o representación popular), el agente activo.

Con ocasión de la crítica acertada al marxismo mecanicista o el determinismo economicista (no tanto al determinismo político-institucional y étnico-cultural que suelen practicar), el enfoque populista se pasa al extremo contrario del constructivismo idealista, basado en la voluntad y la subjetividad, hacia el culturalismo como palanca transformadora a gestionar desde las instituciones públicas conquistadas desde esa hegemonía cultural previa.

Por tanto, la lógica populista ofrece un rasgo común dialéctico-procedimental —antagonismo e idealismo discursivo—, pero no es una ideología política —como el socialismo, el liberalismo, el republicanismo, el conservadurismo o el nacionalismo—. Y es compatible con (casi) todas ellas. Así, como estrategia y teoría política es incompleta o ambigua y necesita explicitarse acompañada con partes, más o menos eclécticas, de esas ideologías tradicionales. Junto con el carácter de cada uno de los dos polos —dominantes y dominados (y otros intermedios o mixtos)—, el tipo de interacción y los objetivos de su trayectoria dan lugar a distintos populismos, algunos antagónicos entre sí, precisamente por lo sustancial, por su distinto sentido político o nacional y su actitud más radical (hacia un extremo u otro) o más moderada (centrista o transversal).

La lógica populista, incapaz de ofrecer una salida al conflicto en Cataluña

En lenguaje de E. Laclau (y de C. Schmitt), el choque en Cataluña sería entre dos nacionalismos o etno-populismos excluyentes y polarizados, contruidos discursivamente, que han sido capaces de arrastrar y representar a sectores populares relevantes, para recomponer su doble hegemonía cultural e institucional, con su representación política respectiva. Sería un perfecto ejemplo de validez de la lógica dialéctica del antagonismo (populista, nacionalista o marxista) para explicar los procesos políticos. Aparte del populismo de derechas y el populismo de izquierdas, tendríamos el populismo de confrontación nacionalista o, más bien, los nacionalismos de confrontación

populista. Todo bajo la dialéctica del antagonismo *nosotros / ellos* y la supremacía del discurso en su construcción, es decir, de la dialéctica de contrarios y el idealismo hegeliano o postmoderno en la conformación de ambos sujetos.

Sin embargo, la tesis aquí mantenida matiza esa interpretación y es la contraria en su conclusión normativa: la incapacidad de la lógica populista para explicar y ofrecer una salida de progreso al conflicto nacional y social en Cataluña y con el resto de España. Ese es el enfoque relevante para las fuerzas del cambio y sectores progresistas y alternativos.

Por supuesto, esa dinámica de polarización contiene elementos de antagonismo y se puede interpretar desde diversas teorías del conflicto social y político, incluido el enfoque populista... de derechas. Pero ambos actores principales, el bloque independentista —*Junts per Catalunya / ERC / CUP*— y las derechas españolistas —*Ciudadanos* y *PP*— reniegan de esa nominación y esa teoría explicativa y legitimadora. Su retórica dominante es nacionalista y liberal, junto con formas rupturistas.

Aparte de la insuficiencia del pensamiento liberal, hay que superar el discurso de 'clase' y el discurso de 'nación', pero también la interpretación populista que, afortunadamente, tiene poco peso entre las fuerzas del cambio en Cataluña. La mirada principal durante el *procés* ha sido la nacionalista de ambos lados, que, aunque con rasgos comunes, no hay porqué asimilarla a la teoría populista. Dicho de otra forma, la lógica populista, la dialéctica idealista de lucha de contrarios, hegeliana o postmoderna, tiene cierto parecido con (parte de) la realidad, pero es abusivo encajar toda la lucha nacionalista (o la lucha de clases y popular) bajo ese enfoque extremo, antagonista e idealista, con polos abstractos. Tampoco sirve para explicar bien la realidad catalana y menos para aportar una estrategia igualitaria y emancipadora.

Podríamos decir que su lógica de confrontación tiene más que ver con la polarización política y discursiva de C. Schmit, como ideólogo del populismo de derechas (extremo), con la supremacía e imposición étnica y nacional frente a los otros, que del populismo de izquierdas (o socialista, progresista y de clases dominadas) de E. Laclau y Ch. Mouffe, con su dicotomía *abajo / arriba* o *democracia / oligarquía*. O sea, la confrontación entre nacionalismos autoritarios y xenófobos, dominantes en el centro y este de Europa, así como la

experiencia nefasta en la I Gran Guerra mundial, los nazi-fascismos de los años treinta y cuarenta del siglo pasado o las guerras de los años noventa en la antigua Yugoslavia, están asociadas más a la versión del nacionalismo excluyente o etnopopulismo de extrema derecha que al populismo de izquierda. Pero, son, sustantivamente, conflictos (étnico)nacionalistas (o inter-imperialistas).

No obstante, al menos en el ámbito social y en la convivencia ciudadana en España y en Cataluña, la intensificación de la segregación, el autoritarismo y la supremacía nacional y racista no han llegado a esos extremos de imposición institucional neofascista o fanatismo identitario generalizado. Por tanto, el populismo de extrema derecha (o la acusación a ambos de fascismo) tampoco es aplicable al grueso de la gestión de los dos campos en conflicto, los dos bloques de poder representados por Puigdemont-Torra / Arrimadas-Rajoy y Rivera-Casado, aun con excesos verbales de algunos de sus dirigentes. Sería necesario que la dinámica conflictiva subiera otro peldaño cualitativo en la agudización de la confrontación nacional y la segregación sociocultural, cosa hoy improbable, salvo para la deriva antinmigración.

En consecuencia, *políticamente, es contraproducente nombrar igual — populismo— o establecer un campo común (emergente) entre fuerzas progresistas (incluso centristas y de izquierda radical) y la nueva extrema derecha o tendencias xenófobas y autoritarias, por el simple hecho de representar una polarización de élites nacionales distintas entre sí.* Algunas coinciden en cierto soberanismo patriótico y son opuestas al consenso europeo de la austeridad y a la construcción europea con déficit democrático y la subordinación de los países periféricos bajo la hegemonía liberal-socialdemócrata (alemana). Son reajustes y nuevas jerarquizaciones entre las élites políticas nacionales en el proceso de construcción de una nueva clase política europea, liberal-conservadora, hegemónica y de matriz alemana.

El motivo de sumarlas para aparentar supremacía histórica o intelectual tiene poco recorrido y credibilidad para definir objetivos, aliados y estrategias, cuando lo sustantivo es el antagonismo tan fuerte entre esas dos tendencias contrapuestas por su modelo social y democrático. Y, en todo caso, sobre qué estrategia de cambio se implementa para conformar una tendencia contrahegemónica por una Europa más social y democrática.

Un ejemplo que explica esos límites analíticos, políticos y teóricos del enfoque populista lo tenemos, precisamente, en Cataluña, en su interior y en relación con el Estado español. Es uno de los territorios europeos de mayor antagonismo y confrontación política en los términos nacional-estatal, no en lo social, que ha aparecido subordinado. Se ha conformado una unidad en cada campo nacional-estatalista sin la clásica transversalidad catalanista, entrada en crisis; o sea, esa polarización ha conseguido absorber su respectiva transversalidad en lo social (capas trabajadoras, élites acomodadas, poder económico e institucional), aun con algunas asimetrías. Al mismo tiempo, ha habido una dificultad para la alianza social progresista de las capas populares frente a ambos poderes establecidos y transversal y mestiza en lo nacional.

Esa realidad entrecruzada añade complejidad analítica y estratégica. Así, el discurso y la identificación, ciudadana y de las élites, con el enfoque populista son muy pequeños tanto por los dos bloques principales — independentista y constitucionalista—, cuanto por la tercera posición, social, integradora y solidaria, de los *comunes* (y parte del *Partido Socialista*). Esta tercera identidad política tiene fuertes raíces históricas, culturales y sociopolíticas. En los últimos tiempos se ha tenido que reafirmar en la superación de los dos bloques nacionalistas en confrontación, y desarrollar una actitud transversal basada en la convivencia intercultural y diferenciada del exclusivismo de las dos tendencias dominantes. Así, la opción más unitaria tiene dos componentes: la apuesta por una menor división nacional en la sociedad catalana, con la implementación de una solución dialogada y democrática; la prioridad de una agenda social favorable a la mayoría de las capas populares.

Esa posición es lo contrario del antagonismo *nosotros / ellos* del nacionalismo o etno-populismo de ambas derechas. Así, *ninguna de las tres tendencias está necesitada de una nominación populista por mucho que, especialmente, el grupo de poder que representa Puigdemont haya practicado con su procés su particular versión de nacionalismo etno-populista.*

La independencia se subordina a la hegemonía nacional, no al anticapitalismo

Aunque exista una diferencia entre nacionalismo e independentismo que, por ejemplo, afecta a sectores de la CUP, anticapitalistas, o de la anterior dirección de *Podem* (A. D. Fachín y su equipo), su participación en la dinámica de confrontación independentista ha estado subordinada al proceso de antagonismo nacionalista impulsado por Puigdemont. La apariencia de conflicto radical del marxismo revolucionario de esos sectores es lo más asimilable a su nacionalismo antagonista, aunque se justificase como paso intermedio hacia la revolución social.

Efectivamente, la mayoría de esos sectores se declara formalmente 'internacionalista', no nacionalista, y su proyecto dicen que es anticapitalista o revolucionario: ya sea desde el enfoque leninista de la *revolución por etapas*, una primera democrática y otra segunda socialista, o para aprovechar el (supuesto) eslabón débil de la cadena imperialista de la UE; ya sea por la doctrina trotskista de la *revolución permanente*, integrando los dos componentes en un programa de transición hacia el socialismo. Pues bien, su estrategia está fundamentada en un error analítico favorable al voluntarismo y una actitud seguidista tras el nacionalismo, verbalmente rupturista con el Estado, pero con un poder institucional regresivo y exclusivista que queda embellecido.

No está claro que una República catalana hegemonizada por la derecha neoliberal esté más cerca de la revolución social, incluso de un Estado de bienestar más avanzado. Ni que la prioridad independentista y el antagonismo identitario genere unos valores y vínculos solidarios y una experiencia compartida para incrementar la relación de fuerzas para vencer a las derechas y generar la capacidad conjunta para avanzar en un Estado renovado y plurinacional más justo y, en todo caso, democrático. Ni que la acción propagandística para construir realidad política transformadora sea asimilable y capaz de contrarrestar la acción discursiva del gran poder mediático y cultural del bloque neoliberal que dirige el independentismo.

O sea, si el *procés* independentista, para la derecha neoliberal catalana, es una dinámica de afirmación de su poder de clase frente al Estado y contra el riesgo popular de desestabilizar su hegemonía, la versión izquierdista del *procés* pretende independizarse del Estado para, seguidamente, desbordar a

su derecha nacionalista neoliberal. Hasta ahora es más demostrable lo primero que lo segundo.

Es decir, hay una ruptura entre la supuesta estrategia revolucionaria anticapitalista y una táctica subordinada a la tarea independentista. Aparte de la dificultad de que sea factible la independencia, queda por demostrar el realismo y la coherencia de ese supuesto paso, como positivo o transitorio para pasar a la siguiente fase de desplazar a las élites nacionalistas neoliberales y sustituirlas por la auténtica representación popular que dirija un proceso hacia una República socialista. Incluso si ese primer proceso diese indicios de desestabilización social o rebelión popular abierta se enfrentaría al objetivo principal del bloque de poder independentista: reforzar su hegemonía de clase dominante. En todo caso, desde un mayor aislamiento nacional todavía sería más difícil superar las constricciones fácticas y económicas, estatales, europeas y mundiales.

Desde luego, las diversas experiencias históricas de enlazar la lucha democrática o de liberación nacional con procesos revolucionarios pro-socialistas no tienen nada que ver con la situación catalana. Ni la posibilidad inmediata de construir una democracia socialista en el actual corazón europeo capitalista. Las estrategias de cambio de progreso son más complejas y, sin desconocer la historia, presuponen un esfuerzo teórico y, sobre todo, práctico, de experiencia y convergencia de las fuerzas progresistas y alternativas.

En ese sentido, hay que distinguir las distintas situaciones de poder y el papel de la acción político-discursiva o de propaganda electoral. Las clases dominantes tienen un gran control del poder económico e institucional (el Estado, que solo parcialmente es un instrumento neutro). Necesitan legitimación social y ahí tiene un papel crucial su capacidad para inculcar su relato, mantener su hegemonía cultural y su versión del sentido común. La burguesía ascendente ya tenía el control de muchos recursos económicos y mercantiles y su revolución era 'política', y asentada en el poder económico, social y cultural, contra la aristocracia del Antiguo Régimen.

No obstante, las capas populares, sin casi control económico ni de poder gubernamental e institucional (o muy poco y periférico como la representación parlamentaria, la gestión de algunos municipios y la participación, cogestión o gobernanza dependiente en algunos organismos y empresas públicas...),

tienen que construir ese (contra)poder relacional, esa capacidad transformadora y de influencia que deviene de su masividad cívica y su posición activa y democrática en las relaciones sociales, político-electorales y económicas. La vía ordinaria es acceder al poder institucional por la legitimidad democrático-electoral, con los discursos y programas representativos de su base social. Pero como están más en desventaja en las relaciones de poder, deben contrapesarla con mayor participación y activación democrática que la simple expresión electoral.

Por otro lado, las sociedades asisten a distintos cambios socioculturales en muchos campos, a veces, por delante de sus clases gobernantes y de su poder institucional. Se abren brechas de legitimidad de las élites dominantes y dinámicas de cambio. Pero estamos hablando de cambios estructurales del poder estatal, de bloques históricos alternativos, de la contrahegemonía popular frente a los poderosos; y eso son palabras mayores para la permisividad del potente bloque de poder neoliberal y reaccionario.

En los procesos de descolonización y de movimientos populares de liberación, aparte de ciertos apoyos económicos internos, recibían el apoyo de otro gran poder fáctico internacional: el bloque soviético, comandado por la URSS (y China). Hoy día, los movimientos progresistas europeos no cuentan con el aval significativo de poderes estatales e internacionales, económicos y políticos. Desde el punto de vista geoestratégico no hay aliados fiables, ni siquiera para una transformación profunda hacia una Europa social avanzada. O sea, la base fundamental del cambio es la propia gente común de cada país y la solidaridad europea, así como su capacidad de activación democrática y alternativa.

Hacia una vía con credibilidad transformadora

Quizá, la experiencia más avanzada en el cambio político pacífico y democrático, en las últimas décadas en Europa, aparte de los intentos de la socialdemocracia clásica con el capitalismo de 'rostro humano' y el Estado de bienestar, ha sido el eurocomunismo de los años setenta, especialmente el italiano en el culmen de su influencia, y el programa común de izquierdas francesas (PSF y PCF) en los primeros años ochenta. Como se sabe, esas

estrategias de cambio gradualista no fructificaron ante la contraofensiva neoliberal, la financiarización de la economía y la globalización desbocada, promovidas por el bloque de poder mundial (y europeo).

Su idea de conseguir, poco a poco, capacidad representativa y hegemonía cultural para trasladarla o convertirla en hegemonía política fue frenada por las fuerzas liberal-conservadoras y los poderes fácticos. Es decir, hubo una sobrevaloración del cambio político a través del programa o el relato de una élite política y su traducción electoral, así como de la eficacia legitimadora del desplazamiento hacia un discurso más centrista y de alianza de compromiso histórico con las derechas para (supuestamente) ampliar el campo electoral y acceder al poder gubernamental. Esas estrategias fracasaron.

Son aspectos que luego reeditaron la tercera vía (laborista) o nuevo centro (del SPD alemán y luego del PD italiano), desde el socioliberalismo y la gestión institucional; pero tampoco les permitió reforzar su representatividad y su capacidad de cambio progresista. Y ya con la crisis económica llevó a la mayoría de la socialdemocracia europea, especialmente la gobernante como en los casos de Grecia, Francia o España, a abrazar o acatar las políticas neoliberales antisociales y gestionar, con grandes déficits democráticos, los planes regresivos con una profunda crisis estratégica, de relato y de legitimidad.

En definitiva, para las capas dominantes la actividad cultural, discursiva o mediática es un complemento a su poder efectivo, a efectos de cohesión nacional y legitimación social. Es lo que, hábilmente, ha sido capaz de desarrollar la derecha independentista. Y, en otro sentido, las nuevas derechas extremas (empezando por Trump) o los nuevos centros (Macrón).

Para las capas populares, ante la ausencia de poder económico-institucional alternativo, la subjetividad es todavía más importante, en la medida en que la integran en sus vidas, porque es una vía para conformar sujeto de cambio y fuerza sociopolítica. Pero con una función más compleja y difícil, así como con la exigencia de insertarla en las condiciones, experiencias y cultura de la gente. Las ideas y sentimientos deben estar conectados e incorporados por sectores relevantes de las clases subalternas que son las que construyen, con su práctica relacional, su capacidad transformadora.

El (contra)poder no lo construye el discurso, sino la gente con su acción cívica. Y como tiene sus dificultades por sus desventajas respecto de su menor poder económico y con solo un poco de poder institucional, debe aprovechar al máximo sus ventajas: su masividad, su interacción y su expresión democrática. La subjetividad, la razón y la pasión, los discursos, teorías y relatos interactúan con su experiencia vivida e interpretada, con su comportamiento y sus sueños y aspiraciones. El dilema estructuralismo / posestructuralismo ha envejecido, es rígido y hay que superarlo con un enfoque más relacional, interactivo e histórico.

Lo importante es la experiencia relacional de las mayorías ciudadanas, no solo vividas sino también pensadas, interpretadas y compartidas; es la existencia lo que conforma el sujeto, no su supuesta esencia o su posición objetiva. Su interacción o práctica sociocultural construye vínculos, experiencias y demandas compartidas, superando su fragmentación y conformando objetivos y dinámicas comunes. Es la combinación de la diversidad de unas realidades muy singulares y específicas con trayectorias y retos compartidos por intereses comunes frente a poderosos y dominadores.

Entre las izquierdas hay dos tipos de errores contrapuestos. Por un lado, el posibilismo adaptativo a la dinámica impuesta por el poder, el socioliberalismo a veces complementado o disfrazado de idealismo culturalista y transversalidad centrista. Por otro lado, el idealismo discursivo y el voluntarismo irrealista, en sus distintas versiones populistas, eurocomunistas o marxistas radicales.

En resumen, la solución viene desde el realismo crítico, la superación del idealismo y el determinismo o materialismo vulgar (también idealista), poniendo en primer plano al actor o sujeto social, a la gente real y concreta, a sus condiciones vitales, experiencias relacionales, culturas compartidas y aspiraciones comunes, así como a su diversidad y su plural interpretación.

En conclusión, aunque desde cierta teoría populista se llame a este proceso 'etnopolulismo', para demostrar su máxima aplicación empírica al incorporar los conflictos nacionalistas, esos sectores marxistas partidarios de la lucha de clases tampoco la han reivindicado. Les bastaba el eclecticismo entre su marxismo (de clase) y su prioridad al objetivo independentista

hegemonizado por el nacionalismo radical, y sin interés identitario en esa simbología populista.

El formalismo populista, su lógica de antagonismo *nosotros / ellos* y la construcción discursiva de la política y su sujeto, ha estado asociado a varios proyectos políticos nacionalistas, principalmente a la derecha neoliberal de Puigdemont. Además, la reacción españolista de las derechas unionistas también ha recurrido a esa polarización nacionalista excluyente. E incluso la izquierda radical independentista, desde su marxismo revolucionario, también la ha practicado.

Pero reivindicar ese enfoque populista, cuando su contenido sustantivo principal es el antagonismo nacionalista con la construcción de un 'pueblo' homogéneo definido por su identidad catalana o española, no clarifica la interpretación de la realidad y no ayuda a la estrategia doble de las fuerzas del cambio y de progreso en Cataluña, integradora en lo nacional y de confrontación respecto de lo social.

No es de extrañar que la hipótesis *Podem* no se haya podido consolidar bajo la hegemonía de ese plan de etnopolulismo independentista. Así, el nuevo liderazgo de *Catalunya en Comú-Podem*, en torno a figuras como Xavi Domènech, Ada Colau o Viçens Navarro o, en otro sentido, con la participación de ICV, se ha conformado desvinculado, práctica y teóricamente, de esos enfoques etno-populistas o nacionalistas exclusivistas. En todo caso, todavía queda un trecho para desarrollar una teoría alternativa crítica y realista que supere el marxismo economicista y determinista y el etnopolulismo antagonista e idealista y, por supuesto, diferenciado del socioliberalismo dominante en la socialdemocracia.

12. **Recomposición de élites y activación cívica**¹²

En diversos países europeos y EE. UU. existen fuertes presiones derechistas, autoritarias y xenóforas. Pero todavía no hay cambios institucionales drásticos hacia un sistema político totalitario protagonizados por tendencias nazi-fascistas, con una sustitución total del sistema representativo y la clase gobernante, y menos de las estructuras de poder económico e institucional (al menos, hasta la disolución impredecible de la UE). Todavía, el desgaste de la vieja clase política ha sido sustituido por una renovación parcial de la élite gobernante y una recomposición del propio poder establecido. El ejemplo francés es paradigmático (y el estadounidense); también, con su singularidad, el italiano -Berlusconi ya inventó el moderno populismo hace un cuarto de siglo-.

Existen tendencias significativas de progreso, pero no hay una crisis de poder en los principales Estados europeos con la inevitabilidad de un cambio sustantivo, institucional, socioeconómico o territorial de carácter democrático-progresista o de transición revolucionaria. No hay derrumbe del sistema económico (salvo los retos medioambientales) ni hundimiento de los regímenes políticos liberales europeos. Sí hay, además de la crisis socioeconómica, territorial, institucional europea y geoestratégica a nivel mundial, una crisis de legitimación social de las élites gobernantes, con la recomposición de la representación política y la pugna por la implementación de las estrategias socioeconómicas y sobre la calidad democrática del poder institucional.

Se puede hablar de crisis sistémica, socioeconómica, política e institucional, como dificultad para una normalización legitimadora de la sociedad respecto de sus élites gobernantes, que gozan de limitada credibilidad y confianza popular. No obstante, **la salida a esta crisis y su sentido no están dados. Las reacciones y las opciones se bifurcan en una doble dinámica: por un lado, en el eje democrático-progresista frente al autoritario-regresivo; por otro lado, en el reajuste de la jerarquización de las élites dominantes y privilegiadas de distintos países en el plano nacional-europeo-mundial para consolidar su hegemonía con la dicotomía entre una posición y**

12 Dos fragmentos se han publicado en *Nueva Tribuna* (22-8) y *Rebelión* (23-8-2018).

valores solidarios, de integración social y convivencia democrática u otros de supremacía nacional o étnica, segregación y racismo. En ese sentido, los movimientos nacional-populares, aparte de su lucha por la soberanía y sus legítimos derechos, se deben identificar por su posición en cada uno de los dos ejes.

Así, hay fenómenos distintos en muchos aspectos, con diferentes sentidos políticos: de derecha (extrema) como los de Trump, Le Pen o Salvini; de centro liberal, como Macron, o de centro postmoderno como el *Movimiento cinco estrellas*. Expresan un punto común para la recomposición de la representación política: apelar al 'pueblo' atendiendo al desgaste de las viejas élites. El resultado dominante: una reconfiguración de nuevas élites, pero sin cambiar lo sustancial de las viejas estructuras de poder institucional y económico-financiero o pactando con ellas (el caso de Trump y su arreglo con el *Partido Republicano* está claro). Así, frenan dinámicas democrático-igualitarias-solidarias y reafirman su supremacía nacional e identitaria a nivel interno o su reacción defensiva respecto de otros poderes externos, en el marco de una globalización desregulada.

Es un proceso de relegitimación social de similares poderes fácticos y élites dominantes aprovechando parte del descontento popular contra el poder establecido (cohesionando el 'nosotros') pero encauzándolo contra otros objetivos o adversarios (segregando el 'ellos'), sean personas refugiadas, inmigrantes o extranjeras. Y, al mismo tiempo, reafirmando su autoridad frente a los poderes de otros países y la imposición de una nueva jerarquización, interna y externa, frente a los desarreglos de una globalización desbocada y neo-imperialista de Trump, con el conflicto y el permiso de China.

Por tanto, la derecha extrema arrastra a una parte de la base popular autóctona bajo la hegemonía de esas nuevas-viejas élites dominantes; pero el aspecto principal no es su carácter populista (popular e indeterminado), sino su función y su práctica política autoritaria: una recomposición a su favor del sistema representativo, evitando salidas igualitarias-solidarias o de progreso; es decir, reforzando las viejas estructuras de dominación lejos de la supuesta liberación del pueblo expresada desde el victimismo. Y su política social, económica y fiscal, salvando algunas medidas proteccionistas parciales y muchas veces contraproducentes para su base social trabajadora, también

está clara: favorable a la desigualdad con mayores ventajas a los ricos y poderosos (el ejemplo de Trump, con su contrarreforma sanitaria y su reforma fiscal regresiva también lo dice todo).

Por otro lado, algunas voces de izquierda, incluso radicales, de cada lado nacional, han querido enmarcar esa tensión entre las dos tendencias y bloques de poder en el esquema convencional de lucha entre el pueblo oprimido y la oligarquía opresora o prepotente. La diferencia es que si en el campo nacionalista el opresor era el Estado español (y en general España) y el oprimido el (todo) pueblo catalán, en el campo españolista el conflicto se definía entre la clase trabajadora (de origen español) y la burguesía (de origen catalán). Pero, tampoco estamos ante la dinámica de los procesos de descolonización o antiimperialistas, de la liberación de un pueblo oprimido frente a una potencia dominante extranjera, asimilando el conflicto nacional a la lucha de clases subalternas frente a opresoras.

La parte española tiene un mayor componente institucional-estatal (con toda su capacidad de coerción de la fuerza y la ley) y menor el de un nacionalismo cultural español conservador, pero más difuso y heterogéneo, que es lo que empieza cristalizar. En el caso de Catalunya, junto con la incipiente reafirmación identitaria española, tiene mayor peso el movimiento nacionalista catalán, pero también con un gran aparato institucional y de poder paraestatal (la *Generalitat* con toda la administración autonómica), lejos del mito de una nación oprimida sin recursos estatales. Su construcción discursiva o cultural se asienta en una amplia estructura económica y de poder institucional y social.

El enfoque populista no define el carácter sustantivo de un proceso político

Ante la indeterminación del enfoque populista abstracto, rellenado en el caso del etnopopulismo de Puigdemont de antagonismo nacionalista, un proyecto emancipador debe realizarse a través de la polarización democrática frente a los poderosos, articulados en diversos sistemas político-económicos y estructuras sociales (llámense Estado, capitalismo neoliberal, patriarcado, imperialismo globalizado, etc.). **El objetivo es una agenda social, en el más amplio sentido de la palabra, beneficiosa para las clases populares,**

diversas en su posición de subordinación socioeconómica, nacional, de género y étnico-cultural... La interrelación entre una defensa firme de los derechos nacionales, civiles y sociales, con una gran talante cívico y democrático, constituye una tradición positiva de las izquierdas catalanistas.

En Cataluña, al igual que en el resto de España, en parte debido a la cultura cívica, democrática, pluralista e integradora de ambas sociedades, no se ha llegado a ese nivel de prepotencia xenófoba y exclusivismo nacionalista en las mayorías ciudadanas, de cierre identitario frente a los 'otros', existente en otros países; aunque haya discursos y tendencias problemáticas hacia la ruptura de la convivencia y la interculturalidad que hay que contrarrestar. El conflicto y el fanatismo del lenguaje se ha polarizado más en el ámbito político y sus brazos mediáticos, en sus componentes más extremos tras su objetivo de una intensa socialización cultural. Su finalidad: la distribución más ventajosa del poder institucional como marco más favorable para la hegemonía de cada élite dominante y la mejora económico-social y cultural de los *demos* diferenciados: independencia o unidad estatal (más o menos uninacional o federal / confederal y democrática).

En todo caso, si la dialéctica de antagonismo se basa en un indeterminado *nosotros / ellos*, la cuestión básica es la clarificación del sentido de la pugna por el carácter sustantivo de cada polo del conflicto y su trayectoria y finalidad. Así, la confrontación en el populismo de derechas o extrema derecha (o el etnopopulismo) se produce entre naciones o identidades (étnicas o culturales) con exclusión o sometimiento de los 'otros'. La transversalidad o el consenso, muchas veces forzados, se realiza en el interior de ese campo propio nacional-identitario; es decir, las élites de cada bando exigen la subordinación de la oposición o la neutralización del disenso interno, social o político.

Cabe la ordenación distinta del tablero de la polarización. Si la pugna es entre *abajo / arriba*, entendida como clases populares frente a poderosos u oligarquías, es decir, similar a la vieja lucha de clases subordinadas frente a las élites dominantes, el componente transversal y solidario se produce entre las distintas identidades nacionales o socioculturales frente al adversario común, los poderosos. Es la experiencia clásica de los frentes populares y de la resistencia antifascista, o la actual de la convergencia de movimientos sociales

y cívicos progresistas frente a las oligarquías privilegiadas y reaccionarias de los de arriba.

En definitiva, **el procedimiento, la técnica o la lógica política del antagonismo y la construcción discursiva de ‘pueblo’ no es suficiente para definir el sentido político de un proceso y el carácter de los sujetos concretos y su interacción. Hay que valorar los dos polos del conflicto, el carácter de los actores principales y su orientación, trayectoria y finalidad.** No es suficiente la caracterización sociodemográfica del adversario (élites, los de arriba) o su posición política abstracta (poder establecido, enemigo externo). Para explicar el sentido de un movimiento popular o de un proceso de pugna política, hay que expresar sus características según el contexto. El perfil político de ambos contendientes tiene que ver, fundamentalmente, con el tipo de interacción, con la práctica y experiencia de su contienda sociopolítica y el sentido de su proyecto transformador: reaccionario-autoritario-desigual-segregador o progresista-democrático-igualitario-solidario.

Por ejemplo, en el análisis de las tendencias actuales, el apuntar críticamente al poder establecido neoliberal puede recoger síntomas de descontento popular pero la apuesta de la derecha extrema xenófoba y prepotente es diametralmente opuesta a la opción crítica desde el campo progresista y cívico. Por mucho que desde distintos ámbitos se quiera utilizar la misma nominación de populismo (o extremismo), esa asimilación (funcional para el poder establecido) genera confusión al no definir la singularidad y el contenido sustantivo de cada una de las dos (o más) tendencias sociopolíticas en conflicto. Por tanto, dificulta la elaboración de una estrategia igualitaria-emancipadora.

Igualmente, hay que valorar la profundidad (o superficialidad) y la radicalidad (o moderación) de la oposición al poder establecido (liberal) y el alcance de la alternativa socioeconómica y de poder, en los dos sentidos extremos. Tenemos la experiencia de entreguerras: nazi-fascista totalitario, o progresista, de los aliados y frente-populista. Así, ahora, se han formado tendencias relevantes de extrema derecha o neofascistas, también llamadas populistas (de derechas). Han conseguido ampliar una ofensiva xenófoba y racista, con componentes autoritarios y de nacionalismo exclusivista. No

obstante, todavía no hay una sustitución de las actuales democracias liberales (con neoliberalismo rampante) por regímenes totalitarios o de toda la clase política gobernante liberal, ni una guerra abierta entre naciones o grupos de ellas, aunque no hay que descartar el incremento de esos peligros en Europa y a nivel mundial.

Los actuales populismos de derechas, aparte de sus conexiones con los poderosos, comparten una base popular (como en general durante estos siglos los grandes partidos de derechas, conservadores, liberales o demócratacristianos y, en particular, los nacionalistas). Pero eso, siendo un síntoma importante, no es lo relevante para su identificación. Expresan y se apoyan en un amplio descontento popular -particularmente de clases medias autóctonas descendentes y capas populares conservadoras- contra las élites gobernantes que han implementado políticas regresivas y antisociales o, según ellos, antinacionales. Sin embargo, están dirigidos por fracciones pro-oligárquicas que les dan un sesgo decisivo.

Su función principal no es satisfacer demandas populares, cosa que sí hacen parcialmente -incluso recoger símbolos progresistas y de las izquierdas y llamarse socialistas-. Su tarea es resolver un problema de legitimidad social de determinadas oligarquías gobernantes para asentar su poder, dividir a las capas subordinadas e impedir una salida democrática y de progreso. **Por tanto, el carácter sustantivo de los dos populismos es antagónico: uno puede ser reaccionario, autoritario, dominador y segregador; otro, progresista, igualitario, emancipador y solidario.**

El sentido de la desafección y la rebelión popular hay que discernirlo, no por la mayor o menor participación de capas subalternas u oprimidas, cosa que sí es significativa, sino por la composición del conjunto de actores, el tipo y el papel de su fracción dirigente y su pugna / negociación con el poder establecido neoliberal y el aparato estatal, sus bloques sociopolíticos y el sentido de su interacción. Así, hay que precisar el carácter de sus demandas, su experiencia social y democrática, el tipo de adversario -la oligarquía... los 'otros'-, la calidad ética -derechos humanos- de sus sectores más relevantes y su trayectoria respecto de los valores universales básicos de igualdad, libertad y fraternidad (y laicidad).

Por tanto, **al llamar populistas (aun con el adjetivo de derechas) a estas nuevas tendencias neofascistas, de extrema derecha y en todo caso con rasgos autoritarios y xenófobos, se las embellece al poner en primer plano un rasgo (la vinculación al pueblo) que es secundario para explicar su carácter sustantivo** y, sobre todo, para tener una actitud crítica y de rechazo a las mismas, sin caer en la tentación de aparecer en el mismo campo supuestamente ascendente de la historia.

Además, dada la funcionalidad para el poder neoliberal de desprestigiar a todo tipo de oposición social y embellecer su propia posición, supuestamente universalista, utilizando calificativos como populistas, extremistas o fascistas, es todavía más necesaria esa distinción entre las corrientes de derecha extrema autoritarias y segregadoras y las tendencias igualitarias, democráticas y solidarias.

En resumen, desde una mirada crítica progresista, los movimientos mixtos, populares y de élites poderosas, con dinámicas de derecha extrema o neofascistas, así como los movimientos nacionalistas exclusivistas, xenófobos y autoritarios, como mínimo, no deberían ser nominados con el mismo significante, populista, que genera confusión. Ni considerarlos del mismo campo político o pertenecientes a similar proyecto que las tendencias sociopolíticas progresistas (incluso con componentes liberales de los poderosos, como los aliados antifascistas en la IIª Guerra mundial). Y, al contrario, **si persiste la identificación pública de esas corrientes derechistas, segregadoras y autoritarias con ese significante, populista, es contraproducente la autoidentificación con esa palabra, incluso aunque se le adjetive de izquierdas, democrático o progresista.** La pugna por la resignificación auténtica es improductiva, más cuando la imagen pública se construye no con el sentido sustantivo de su función, su carácter y su interacción sino con elementos problemáticos, secundarios, indeterminados y procedimentales (antagonismo e idealismo discursivo), compatibles con una pluralidad de corrientes políticas contrapuestas.

La activación cívica, no la apariencia de ganar, clave para avanzar

Los deseos y la apariencia ganadora no son suficientes para ganar. Es necesaria la amplia participación democrática y popular. El estímulo de aparecer con los ganadores es insuficiente y a la larga contraproducente. La motivación para la participación cívica y democrática debe estar incrustada en la mejora de la situación real de la mayoría social, en las aspiraciones ciudadanas de libertad e igualdad. A veces, el optimismo histórico y cierto utopismo son positivos y necesarios, siempre de forma comedida y como complemento de dos criterios básicos para definir una estrategia política emancipadora: el realismo analítico y la voluntad transformadora fundada en las demandas cívicas y una ética de los derechos humanos.

La subjetividad popular, con sus aspiraciones e ilusiones, es fundamental para el cambio. El problema viene cuando la pertenencia al campo ganador o su simple apariencia sustituye a la activación cívica, fundamentada en las demandas populares, como motor de cambio, realista y justo.

Esa inevitabilidad ganadora de la estrategia o la teoría propias se ha utilizado por todas las corrientes políticas e ideológicas, particularmente por el marxismo, al menos hasta el derrumbe del bloque soviético, para ganar credibilidad y cohesión. Tiene efectos de generar creencias e identidad colectiva en torno a un liderazgo, ofrecer garantías de acceso al poder y conquistar (o prometer) ventajas. Pero esa actitud tiene poco recorrido, justo hasta la presencia de dificultades e incoherencias, con el riesgo de pérdida de confianza popular.

El problema adicional hoy es el rellenar esa imagen ganadora a través de la pertenencia a una dinámica histórica común, el populismo (o el nacionalismo), donde se integran tendencias antagónicas, desde la derecha extrema hasta la izquierda, pasando por corrientes nacionalistas, junto con otras con objetivos democrático-igualitarios o, simplemente, centristas y populares. Esa particular pretensión de avanzar a través de la apariencia ganadora, sumando tendencias contradictorias por su sentido político, tiene una base frágil y no sirve para el objetivo deseado de fortalecer la dinámica de un cambio de progreso.

Es el objeto de esta reflexión, todavía más pertinente ante los síntomas de estancamiento de las fuerzas del cambio y, en todo caso, de la necesidad y la dificultad de una colaboración crítica con el *Partido socialista*, cuya disposición

estratégica y de alianzas no está clara, y afín de poder garantizar el cambio político y gobiernos de progreso. A pesar de que el concepto de ganar se va desplazando a un ganar compartido con otras fuerzas progresivas, o sea, el sujeto político y su representación institucional se complejiza, la cuestión a debatir es la inconsistencia de algunos argumentos deterministas sobre quién, en base a qué y por qué va a ganar y sus efectos contraproducentes.

Ampliar la base social del cambio, pero democrático y de progreso

En su origen, en el siglo XIX y primeros del XX, así como en general en Latinoamérica y en EE. UU. (con Roosevelt y recuperado por Sanders), esa palabra populista conllevaba una base social más amplia (campesinado, autónomos, pequeño-burguesía y clases medias) que la clásica clase obrera industrial, así como un sentido social liberal-progresista, anti-oligárquico y popular-nacional antiimperialista. Es el significado menos restrictivo que todavía tiene allí ese significante.

Es bueno dirigirse y representar a las amplias mayorías sociales... aunque no necesariamente en todo y siempre. El totalitarismo y el nacionalismo excluyente también han gozado de mayorías ciudadanas. Por tanto, no es el criterio único. Influye también el contenido ético-político de las decisiones mayoritarias, su actitud ante los valores universales que podemos definir como los derechos humanos. Es una tensión entre ética (con deliberación compartida) y democracia (participativa y pluralista).

No obstante, en la cultura europea y tras la experiencia nazi-fascista y de la actual extrema derecha, el populismo tiene una connotación autoritaria y todavía es más importante la diferenciación y el antagonismo con esa corriente política. Y la pugna del populismo de izquierdas por la resignificación y/o apropiación del auténtico sentido de populismo no tiene mucho interés frente a la confusión interpretativa y política generada por esa palabra polisémica.

Dividir los campos sociopolíticos entre, por un lado, populistas, metiendo en él esas reacciones oligárquicas de extrema derecha y xenófobas y los nuevos-viejos nacionalismos junto al llamado populismo de izquierdas, y, por otro lado, no populistas o tradicionales (liberales, conservadoras, socialistas o de izquierdas) genera confusión analítica y

desorientación política. Es mejor identificar a esas corrientes con la denominación de derecha extrema o neofascistas (o, en su caso, centristas y nacionalistas) y no llamarles populistas con la connotación embellecida de que son 'populares'. Abundaría en la diferenciación del llamado populismo de izquierda o progresista, aunque, evidentemente, ya no se podría presumir de pertenecer a una tendencia histórica ganadora.

Cabe el interrogante: **¿Por qué algunos autores prefieren ostentar el perfil ganador, adscribiéndose a un espacio o momento -populismo- tan problemático y contradictorio, y subordinar a ello el sentido político sustantivo del proyecto de cambio, democrático y de progreso?** En el terreno político concreto la dirección de *Podemos* y sus aliados han evitado esa implicación. En España, al considerar, con todas sus contradicciones, socio preferente a la propia socialdemocracia. Y en Cataluña, al diferenciarse claramente del etnopolulismo de Puigdemont y el neo-nacionalismo españolista de *Ciudadanos* y *Partido Popular*.

Una débil fundamentación teórica

En el terreno teórico y de la supuesta supremacía intelectual y analítica a nivel general todavía algunos analistas defienden el simbolismo de la pertenencia a esa supuesta corriente ganadora, compartiendo trayectoria ascendente con las fuerzas emergentes de derecha extrema y nacionalistas xenóforas, ambas autoritarias e insolidarias. A la hora de la identificación política con un campo común de populistas frente al resto, así como la clasificación de las fuerzas políticas, los objetivos y las alianzas, priman un aspecto secundario, la lógica del idealismo dialéctico (antagonismo discursivo), por encima de su contenido sustantivo y su enraizamiento social. No diferencian claramente entre la dicotomía *nosotros / ellos* de corte nacionalista, supremacista, dominador y autoritario y la oposición *abajo / arriba* de carácter popular, democrático, igualitario y anti-oligárquico (similar al convencional conflicto social renovado).

Además, hay que clarificar una dinámica con apariencia intermedia: movimientos populares de supuesta defensa nacional, con un sentido ambivalente, anti-establishment (pero para recomponer el poder) y reaccionario

(para garantizar mayor dominación y división de la mayoría popular). Así, dentro de su diversidad, tienen ese componente doble: frente al poder establecido (neoliberal) u otras potencias y frente a otros segmentos más vulnerables: inmigrantes, extranjeros, diferentes... Ese nacionalismo más o menos excluyente es lo que hay que evaluar en concreto.

La motivación de la insistencia en la garantía de ganar es reforzar el liderazgo a través de representar lo ganador. Su argumento: su lógica o su técnica es la ganadora, no tanto la justeza de su proyecto. Así, el antagonismo es lo que gana; sin reparar en qué tipo de antagonismo y entre qué actores. Y el discurso es lo que construye realidad; sin valorar adecuadamente la base de poder, relaciones sociales y culturales, existente en unos y otros. La capacidad articuladora del pueblo se le da al discurso, o sea, a la élite que lo elabora.

No es un simple error coyuntural, es una arraigada deficiencia teórica y política que lastra las capacidades prácticas y estratégicas de la emancipación popular. Es normal la tentación desde los *establishments* de desprestigiar las dinámicas progresistas metiéndolas en el mismo saco que todos los 'ismos' (populismo, extremismos... antes, comunismo o radicalismos, etc.). Lo que no tiene mucha explicación es revalorizarlo desde posiciones de progreso y no construir una posición política nítida y diferenciada. Pero, veamos los precedentes histórico-teóricos.

Ya Laclau, en los años setenta, reconociendo la existencia del populismo de clases dominantes y el populismo (socialista) de clases dominadas, justificaba esa actitud de sumar y mezclar bajo la misma palabra ambas corrientes antagónicas. Su interés era hacer valer la supuesta supremacía histórica ganadora del conjunto populista frente al bloque de poder neoliberal tradicional. Para él el populismo de izquierdas superaba y subsumía a las corrientes socialistas y comunistas, definidas como perdedoras; es decir, el populismo de izquierdas sería posmarxista y reflejaría el estadio superior de la lucha por la democracia y el socialismo, como recuerdan ahora autores como M. Monereo.

Así, a la dialéctica en abstracto le añadía no solo la confrontación democrática sino también la pugna por el socialismo. Pero eso puede definir al populismo de izquierdas en su lucha por la igualdad, no al populismo en general, ambiguo o incompleto en su definición política. Para justificar la

supremacía aplicativa de su populismo como lógica de antagonismo no se queda en esa interpretación del populismo de izquierdas, sino que incorpora la confrontación de las derechas (y centristas) y de los nacionalismos; es decir, recupera el esquema identitario de la dialéctica antagonista de *nosotros / ellos* de C. Schmitt, ideólogo del nacionalismo supremacista totalitario.

Por ello, **para el populismo teórico, el carácter ganador lo da no a una tendencia política concreta, reaccionaria o progresista, sino a la suma de todas ellas que apelan a un pueblo indeterminado, es decir, a unos intereses y demandas ambiguos y a definir por el discurso de la élite correspondiente.** Su adversario teórico, por un lado, es el consenso liberal tradicional, no el radicalismo nacionalista, reaccionario, autoritario o xenófobo emergente sobre el que prima su afinidad procedimental de la dialéctica de confrontación y la construcción discursiva de la realidad, la política o el sujeto. Pero, por otro lado, combate el determinismo economicista que fijaría los intereses de las capas subordinadas como base para construir el pueblo, cuestión que, según su crítica, limitaría la voluntad constructivista de la élite promotora del discurso y su capacidad articuladora. Y tiene parte de razón, pero se va al otro extremo idealista, sin pararse en el actor concreto y su práctica relacional.

Por tanto, ese enfoque se desliza hacia la irrealidad y el desarraigo popular real, ya que destaca la formación del sujeto de cambio con la infravaloración de sus condiciones materiales y culturales de existencia, de su experiencia sociopolítica, de las relaciones de fuerza existentes. Y, por otro lado, con la sobrevaloración de la capacidad constructiva de un pueblo a través de la acción política discursiva de un liderazgo o la gestión institucional derivada de la misma, no de la activación cívica del mismo.

Además, esa posición prioriza la validez de su lógica antagónica, complementada por la transversalidad en los campos secundarios, y su construcción idealista arbitraria de su 'pueblo', sin profundizar en su contradicción con lo que denomina 'populismo de clases dominantes'. En el terreno político genera desorientación al desconsiderar lo sustantivo: el sentido político de cada actor y proceso.

La lógica populista define una manera de construir la política y el sujeto pueblo: la dialéctica idealista, el antagonismo de contrarios

articulado por el discurso. Es la vuelta a Hegel que ya he criticado en otra parte (ver *El populismo a debate*, ed. Rebelión). Frente al estructuralismo determinista (económico, biológico, étnico o político-institucional), el posestructuralismo postmoderno no es la solución. Ambos, en realidad, tienen una fundamentación idealista a superar. **Es más sugerente otra corriente de pensamiento que denomino de *realismo crítico y con hermenéutica social*, más multilateral y que pone el acento en la experiencia popular real, las relaciones sociales, los vínculos comunes vividos por la gente y su cultura, así como su adecuada interpretación.** Aparte de otros precedentes de la teoría crítica, podemos citar a Gramsci y, en particular, para explicar los procesos de contienda sociopolítica y los movimientos sociales, a pensadores como E. P. Thompson, Ch. Tilly y R. Jessop.

En definitiva, **el enfoque populista es incompleto o indefinido en su contenido estratégico y programático. Es decir, para superar su ambigüedad necesita asociarse con una ideología o teoría política sustantiva, encarnarse en unos sujetos concretos.** Así, lo que existe son populismos específicos: reaccionarios o progresistas, autoritarios o democrático-republicanos, de derecha extrema, centro o izquierda, nacionalistas o estatistas, segregadores y racistas o inclusivos, etc. Por tanto, hay dos discusiones. Una, sobre los dos fundamentos teóricos o metodológicos: carácter y alcance de la polarización y el antagonismo dialéctico y su combinación con la transversalidad, el consenso o el universalismo, y papel del constructivismo voluntarista, superador del mecanicismo, pero sin llegar al realismo crítico y social. Otra, sobre la función política concreta de un populismo particular, con el sentido sociopolítico y ético de su impacto transformador y su mayor o menor definición política, sincretismo y eclecticismo.

Pluralidad político-ideológica en las fuerzas del cambio

Existe una gran crisis de las izquierdas, incluida la socialdemocracia, pero sería excesivo apropiarse bajo el rótulo de populista todas las heterogéneas tendencias sociopolíticas en los países europeos desde Grecia hasta Portugal, pasando por Francia, Alemania y Reino Unido. Incluso en España el carácter

político-ideológico de los partidos políticos o élites asociativas alternativas es muy diverso, considerando el conjunto de *Podemos*, *Izquierda Unida*, las convergencias (catalana, gallega, valenciana, vasca...) y las candidaturas municipalistas de los grandes (y pequeños) ayuntamientos del cambio, así como los distintos movimientos sociales progresivos, en particular el movimiento feminista.

Pues bien, todo ese conglomerado democrático y de progreso hay que diferenciarlo claramente del populismo de derechas, empezando por el nombre. Pero, además, tampoco encaja bajo el nombre de 'populismo' de izquierdas, ni se ha conformado discursivamente, sino relacionamente, con su participación pública, democrática y cívica.

En lo que sí ha tenido un papel más relevante el discurso y el liderazgo de una élite ha sido con la configuración de una nueva representación política -Podemos-, no tanto en sus convergencias y candidaturas municipalistas, más abiertas y plurales. Pero, sobre todo, esa manera populista no ha sido el determinante para la conformación sociopolítica del movimiento popular o las mareas cívicas, desde el movimiento 15-M hasta el actual movimiento feminista o incluso la formación del electorado indignado, ya casi configurado desde el año 2011.

Su activación y su articulación sociopolítica no han dependido tanto de un relato previo, sino de procesos de indignación ante realidades de injusticia o discriminación interpretados desde unos valores democráticos y de justicia social y con un alto nivel participativo y asociativo de base. Ha sido, sobre todo, la experiencia de confrontación con los poderosos por sus políticas regresivas e impositivas en el contexto de crisis socioeconómica y precariedad, que desde 2010, han vivido millones de personas con su articulación sociopolítica y su cultura igualitaria y solidaria. Así, se han reafirmado en ella y han dado paso a su representación político-institucional en las llamadas fuerzas del cambio, con credibilidad suficiente para ser cauce institucional de sus demandas.

Ahora, hay una limitada movilización social, aunque se ha reactivado, especialmente, a través del movimiento feminista. Es el último gran ejemplo positivo de una amplia contestación cívica que, enraizada en su lucha por la igualdad de las mujeres y contra la violencia machista, ha desbordado su

marco específico y ha supuesto una amplia unidad popular y democrática de demanda de reformas feministas sustantivas, sociales y legislativas.

Hay también una importante presencia institucional de las fuerzas del cambio y un nuevo clima político con el gobierno socialista. Garantizar el avance hacia un cambio de progreso supone una reelaboración estratégica alternativa y unitaria, pero, sobre todo, una amplia participación popular.

La confrontación no es entre populismo (ganador) y no populismo (perdedor)

A nivel europeo, a pesar del giro derechista, también es empíricamente problemático que vayan a ganar las formas populistas (de extrema derecha), hasta el nivel de imposición de regímenes totalitarios y la destrucción de la U.E. liberal. Ese vaticinio desconsidera lo fundamental: que las estructuras de poder neoliberal de EE.UU. y la U.E. siguen siendo dominantes, que comparten algunos objetivos comunes con las presiones neofascistas, en particular para reforzar su capacidad de control operativa frente a la amplia deslegitimación social, aunque con una limitada capacidad de poder progresista o de izquierdas. El reajuste principal viene por la pugna nacionalista (o neo-imperialista) entre los grandes países (o grupos de países) por la nueva jerarquización y control en la estructura mundial de poder geoestratégico y económico.

Por tanto, **es contraproducente, desde el punto de vista analítico y estratégico, la posición de aprovechar una supuesta fuente de legitimidad como fuerza emergente ganadora a través de compartir el mismo campo que la tendencia reaccionaria-autoritaria-segregadora y pro-oligárquica neoliberal.** Ese objetivo de aparentar ser fuerza ganadora (cosa habitual en cierta izquierda radical catalana), con esa demostración empírica de supuestos aliados también ganadores tiene poco recorrido. Justo hasta la evidencia social y política de los resultados nefastos de sus políticas y su gestión y el carácter continuista del nuevo proceso de similar dominación oligárquica y subordinación popular.

Però el mantenimiento de esa idea de compartir un momento o un proceso populista común tiende a no preparar las capacidades políticas

para enfrentarse a esa tendencia reaccionaria neofascista o nacionalista neoliberal e idealizar las expectativas propias. Y el riesgo es la adaptación de la actividad a esa prioridad de la apariencia de ganar como reclamo de lealtad y cohesión del proyecto político de cambio. Es lo que también ha ocurrido en sectores de izquierda catalana deslumbrados por la expectativa inmediata de un cambio ganador (frente al Estado), sin valorar su realismo y su sentido.

En definitiva, hay que afinar estos análisis del doble conflicto social y nacional. Son erróneos los fundamentos teóricos y programáticos nacional-populistas que alimentan la polarización identitaria y el idealismo discursivo. Son contraproducentes para una solución progresista en lo social y solidaria en lo nacional, superadora de la confrontación de ambos bloques de poder neoliberal y nacionalistas que es la apuesta que empieza a abrirse camino.